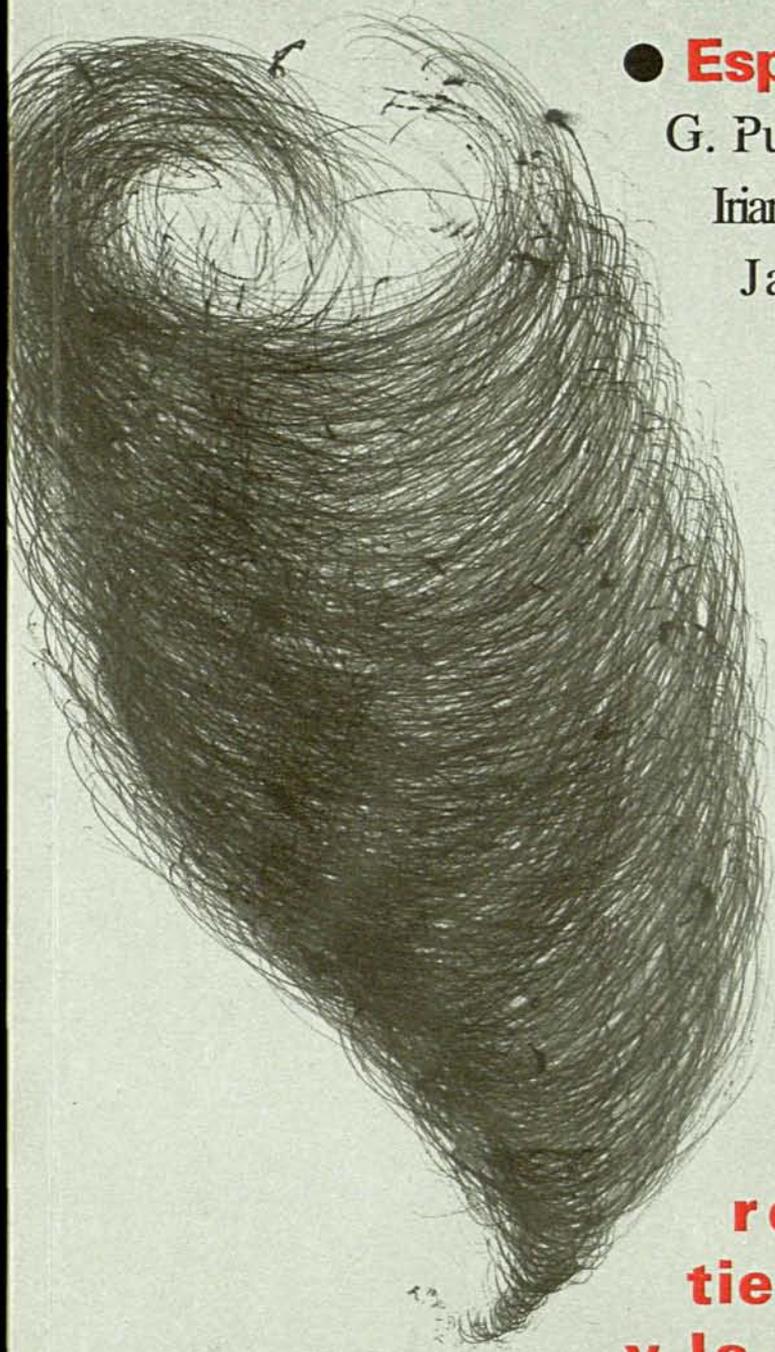


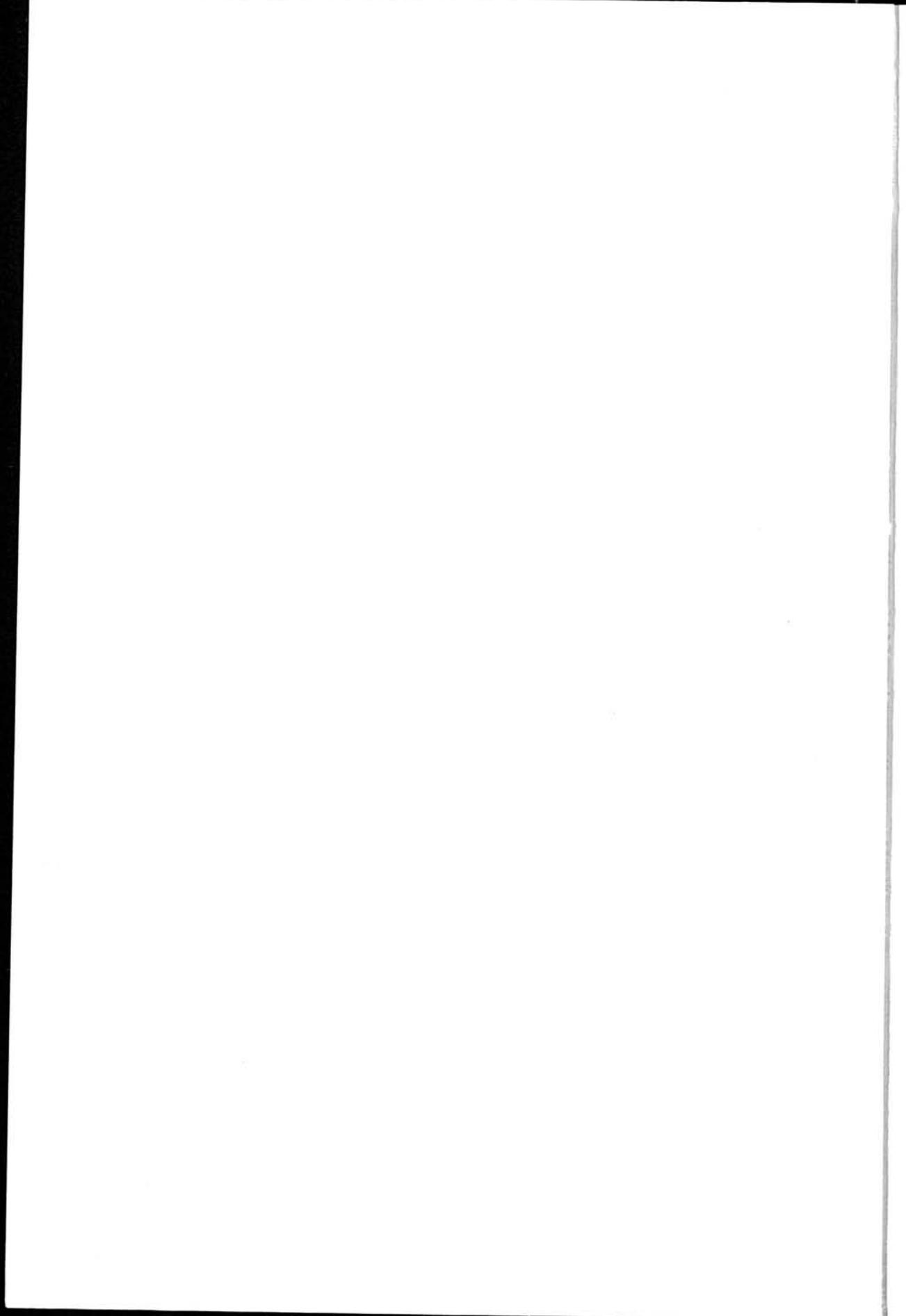
VIENTO

POR UNA IZQUIERDA ALTERNATIVA

SUR



- **España, ¿una?**. Javier G. Pulido, Pedro Ibarra, Joxe Iriarte "Bikila", David Marquand, Jaime Pastor, Ramón Zallo
- **Un mundo sin utopías.** Luis Beltrán
- **La guerra de Chechenia.** L. Tolstoi, K. Bartak
- **Vietnam. El bombardeo del Fondo Monetario Internacional.** M. Chossudovski
- **Francia. La reducción del tiempo de trabajo y la compensación salarial.** Alain Lipietz, Maxime Durand



Número 19 / febrero 1995 / 700 pesetas

1 agenda

Notas sobre la actualidad política en el Estado español. *Joaquín Nieto, Julio Rodríguez Bueno, Ladislao Martínez, José Luis Ordóñez, Álvaro Martínez, Begoña Sanjosé, Pedro Montes* **7**

2 el desorden internacional

Rusia/Chechenia

Chechenia 1852. *Leon Tolstoi* **24**

Las jugadas sangrientas de Boris Yeltsin. *Karel Bartak* **29**

Vietnam

El bombardeo del Fondo Monetario Internacional. *Michel Chossudovski* **37**

Francia

La reducción del tiempo de trabajo y la compensación salarial. *Alain Lieptiz, Maxime Durand* **51**

Perú/Ecuador

Una "guerra" de intereses. *Pepe Mejía* **61**

3 miradas voces

Fotos de *Lola Rivera* **65**

4 plural plural

España, ¿una?

Comunidad, nación y federalismo. *Pedro Ibarra y Ramón Zallo* **71**

Alternativas al Estado español. *Javier González Pulido* **82**

¿España, una y de izquierdas? *Joxe Iriarte "Bikila"* **86**

Nacionalismos y federalismo: el caso español. *Jaime Pastor* **90**

Reinventando el federalismo: Europa y la izquierda. *David Marquand* **96**

Nuestro tiempo

Un mundo sin utopías. *Luis Beltrán* **105**

Trabajo y sociedad

Entrevista con *Robert Castel* **111**

5 subrayados subrayados

"Mercado, ética y economía" y "La quimera fértil" de Félix Ovejero. *Daniel Raventós* **121**

"La ciencia y cómo se elabora" de Alan Chalmers. *José Luis Moreno Pestaña* **123**

"Europa del Este: el laberinto del cambio". *G. Buster* **125**

Propuesta gráfica de *Jaime Gil*

Consejo Editorial:

Jesús Albarracín
G. Buster
José Ramón Castaños
Montserrat Cerveza
Javier González Pulido
Petxo Idoyaga
José Iriarte "Bikila"
Lourdes Larripa
Miren Llona
Juana López
Gloria Marín
Cristina Monje
Justa Montero
Pedro Montes
Joaquín Nieto
Iñaki Olano
Alberte Pagán
Jaime Pastor
Daniel Raventós
Miguel Romero
Flora Sáez
Iñaki Uribarri
Begoña Zabala

Diseño:

Jérôme Oudin &
Susanna Shannon

Maqueta:

Escala 7

**Redacción, administración
y suscripciones:**

Apartado de Correos 50.522
28080 - Madrid
c/ Embajadores, 24 - 1ª izda.
28012 - Madrid
Tel.: (91) 530 75 38
Fax: (91) 527 96 52
Correo electrónico: Viensur
@nodo50.gn.apc.org

Imprime:

J. P. Arts Gràfiques

DL: B-7852-92
ISSN: 1133-5637

Precio:

700 pesetas (IVA incluido)

Han colaborado en este número:

Karel Bartak

Periodista checo. Colaborador de *Le Monde Diplomatique*.

Luis Beltrán

Filólogo.

Begoña Sanjosé

Concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid.

Robert Castel

Sociólogo.

Michel Chossudovsky

Es profesor de la Universidad de Ottawa. Colaborador de *Le Monde Diplomatique*.

Maxime Durand

Miembro del equipo de economistas de la LCR francesa.

Jaime Gil

Profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

Pedro Ibarra

Es profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad del País Vasco.

Alain Lipietz

Es miembro de la Comisión Económica de los Verdes en Francia.

David Marquand

Colaborador de la *New Left Review*.

Álvaro Martínez

Senador de los Verdes-IU-CA.

Ladislao Martínez

Ecologista de AEDENAT.

Pepe Mejía

Periodista. Miembro del Comité de Defensa de los Derechos Humanos-Perú.

José Luis Ordóñez

Miembro de la corriente ecosocialista de IU.

Lola Rivera

Es pintora

Leon Tolstoi

Prometedor novelista. Oficial de la artillería rusa en la campaña de 1852 contra los insurgentes chechenos.

Ramón Zallo

Es catedrático de la Universidad del País Vasco.

«**La República** tenía que ser la antítesis natural de la Monarquía. Su misión, por lo tanto, era romper implacablemente con el centralismo asfixiante, burocrático, de armadura mohosa, que representaba el viejo régimen. ¿La Monarquía era centralista? Pues la República debía ser federal. Esto parece que era una conclusión tan incontrovertible como un axioma. Y así, en efecto, lo habían considerado los republicanos hasta el preciso momento en que había que pasar de la teoría a la acción, de las palabras a los hechos. Entonces retrocedieron». Así explicaba Joaquín Maurín, dirigente del POUM, en 1935, una de las encrucijadas por las que se perdió la clase obrera en la II República.

Después de la dictadura franquista, los pactos políticos sobre los que se vertebró el nuevo régimen excluyeron la autodeterminación y el federalismo y los sustituyeron por el “Estado de las autonomías”. Hoy, las grietas del artículo octavo de la Constitución son mas evidentes que nunca y desde diversos sectores políticos se empieza a pensar en su reforma. En la nueva encrucijada que empieza a dibujarse, la izquierda no puede volver a perderse y actuar hoy como los republicanos de ayer. Hemos querido dedicar nuestro *Plural* a este debate, de la máxima actualidad, entre autodeterminación y/versus federalismo.

Este es el tema que abordan **Ramón Zallo**, **Pedro Ibarra**, **Joxe Iriarte “Bikila”**, desde Euskadi, **Javier González Pulido**, reivindicando un nacionalismo de izquierdas andaluz, y **Jaime Pastor**, que contribuyó —junto a otros compañeros de Izquierda Alternativa de Madrid— a poner de nuevo este tema en la agenda de la IV Asamblea Federal de IU. La aportación de **David Marquand** desde un punto de vista “europeista de izquierdas” situar el debate sobre la alternativa al “Estado de las autonomías” en el marco de la construcción de la Unión Europea.

La guerra de Chechenia ha servido, además de para descubrir un nuevo “pueblo sin historia” —por utilizar la cínica fórmula austro-húngara—, para contar con algún colaborador inesperado en *VIENTO SUR*, aunque viejo conocido. **León Tolstoi** participó personalmente como oficial de artillería ruso en las operaciones contra los insurgentes chechenos en 1852 y dejó en su última novela, *Jadsi Murat*, el relato de unos sucesos que parecen condenados a repetirse. El informado artículo de **Karel Bartak** nos devuelve al hoy fantas-

magórico de un Estado post-soviético, en el que mafias, clanes y nomenclaturas tratan de utilizar la cuestión nacional para enriquecerse en el incipiente mercado, hasta que llegue a poner orden un Estado también post-soviético, pero más grande, más corrupto si cabe y mucho más peligroso, en nombre de la "estabilidad internacional" y de la defensa de "la ley y el orden". Hoy, sólo queda de Grozny, después de tres meses de combates y decenas de miles de víctimas civiles, la estructura carbonizada del Palacio presidencial como un monumento funerario a la democracia rusa.

No menos desgarrador, porque este "desorden internacional" no nos da muchas buenas noticias, es el artículo de **Michel Chossudovsky** sobre las consecuencias de la aplicación en Vietnam de los programas de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial. Quienes han seguido los debates del Foro Alternativo no encontrarán muchas novedades de fondo. Pero es difícil hacerse a la idea de que la política de *Doi Moi* del Partido Comunista Vietnamita —que fue uno de los referentes históricos de la izquierda surgida en 1968— esté teniendo unas consecuencias sociales sólo comparables a las de la propia agresión de los EE UU. En unas coordenadas geográficas muy lejanas de Vietnam, pero también inmersas en su inserción en la economía capitalista mundial de la mano del FMI y del Banco Mundial, se encuentra la guerra del Río Cenepa, que enfrenta a Ecuador y Perú en unas tierras amazónicas que sólo pertenecen de verdad a los shuar, aguarunas y huambisas que las habitan. **Pepe Mejía** describe las razones de la dictadura *narco-militar* de Fujimori y de los militares-empresarios ecuatorianos para enzarzarse en una guerra, no por absurda menos injusta.

La izquierda francesa se encuentra en uno de sus momentos mas bajos, entre otras razones por su incapacidad para ofrecer una alternativa creíble a la política neoliberal del Gobierno Balladur. Tanto la LCR como los Verdes han jugado un papel destacado en la creación de un movimiento contra el paro, *AC!*, del que ya hemos dado noticia desde esta revista. Esta experiencia ha exigido definir posturas, entrando al fondo de muchos debates muy complejos sobre el reparto del trabajo. Una prueba de ello es el intercambio de artículos que reproducimos entre **Alain Lipietz**, de la Comisión de Economía de Los Verdes, y **Maxime Durand**, del grupos de economistas de la LCR. A través de la discusión, que refleja la que tuvo lugar en el seno de *AC!*, es posible conocer las distintas posturas de toda la izquierda francesa y el por qué los Verdes y la LCR divergen a la hora de defender las 35 horas semanales con o sin

disminución de salario para el grupo de trabajadores con rentas mas altas.

La utopía ha sido una seña de identidad de todos los movimientos transformadores y, desde luego, de ese marxismo mestizo y cálido que permitió enfrentarse en el orden mundial bipolar de la guerra fría, a la izquierda alternativa contra burguesías y nomenclaturas. **Luis Beltrán** vuelve a defender su necesidad, en un momento en el que la hegemonía política y cultural del capitalismo nos quiere convencer del "fin de la historia" y el "realismo" se convierte en la excusa de importantes sectores de la izquierda para integrarse en el sistema. **Robert Castel**, por su parte, se refiere al sujeto histórico casi único de la utopía emancipatoria socialista, hasta el desarrollo múltiple de los movimientos sociales: la clase obrera. Su obra, poco conocida en el Estado español, es uno de los puntales de la renovación de la sociología crítica francesa, planteándose la naturaleza misma del trabajo asalariado en un momento histórico en el que se quiebra a la vez el pacto social del Estado del bienestar y la posibilidad de integrar en un mercado de trabajo en expansión a sectores, cada vez mas significativos, de la sociedad.

En fin, este es el primer número de la suscripción de 1995, que empieza con el ya tradicional, aunque evitable y corregible retraso. Esperamos seguir contando con el apoyo de lectores y lectoras.

Por otra parte en la página 2 encontraréis la composición del Consejo Editorial que de ahora en adelante se responsabiliza de la marcha de la revista.

Revista que, por cierto, tiene algunos cambios en su dirección postal que escribimos muy mal en nuestro número anterior. A continuación, la dirección correcta:

Apartado de Correos 50.522

28080 - Madrid

c/ Embajadores, 24 - 1º izda.

28012 - Madrid

Tel.: (91) 530 75 38

Fax: (91) 527 96 52

Correo electrónico: Viensur@nodo50.gn.apc.org



1 agenda

agenda

28 de enero. Tras el aniversario de la Huelga General del 27-E, salta a los medios de comunicación la confrontación entre el sector mayoritario y el sector crítico en la dirección de CC.OO.

El movimiento sindical vive tiempos de zozobra. La huelga del 27-E, sin continuidad durante el trámite parlamentario de la reforma laboral marca el inicio de una parálisis sindical que aún perdura. Recientemente ha saltado a la luz pública la confrontación en el seno de la dirección de CC.OO. Joaquín Nieto, de su Ejecutiva Confederal, nos cuenta su particular punto de vista.

Pregunta: A un año de la HG del 27-E, ¿qué balance se puede hacer de la política de Comisiones tras aquella huelga?

Joaquín Nieto: A diferencia del 14-D, que se saldó con una victoria sindical, el 27-E no consigue parar la aprobación de la contrarreforma laboral. Después se paralizó la movilización de carácter general. Algunos, ya en su día, juzgamos que además de situar la acción en la negociación colectiva era necesario proseguir con acciones de ámbito general. Yo mismo lo planteé en un Consejo Confederal. Pero nuestra propuesta no prosperó.

No creo que eso hubiera conseguido modificar la aprobación de la reforma y me parece gratuita la afirmación de que su ausencia permitió su empeoramiento en el trámite parlamentario. La contrarreforma se combatió con una huelga general y si salió adelante fue porque la correlación de fuerzas global era desfavorable, a pesar del 27-E. Por la naturaleza de la reforma laboral su aplicación dependerá, sobre todo, de la resistencia que encuentre en las empresas y sectores, pero mantener un tono de respuesta general habría dado un mayor impulso a esa lucha principal en los sectores y empresas.

P.: ¿A qué se debe esa renuncia?

J. N.: Creo que a un temor a que la persistencia de movilizaciones contra la reforma sólo sirviera para exhibir la derrota. Pero no me parece acertado. De hecho, cuando proponíamos retomar la iniciativa, yo al menos estaba pensando en movilizaciones de características singulares (marchas, cadenas humanas,...) que

permitieran mantener la tensión general, pero sin necesidad de compararlas con la envergadura de la huelga general. Este problema, el de cómo mantener una movilización sostenida tras una huelga general, con acciones que lógicamente serán de menor entidad, es una cuestión que está aún sin resolver satisfactoriamente.

P.: Las dos alas que aparecen confrontadas en el interior de la Ejecutiva ¿a qué responden?

J. N.: Vivimos el final de una etapa política y el inicio de otra nueva. Lo que por sí mismo genera incertidumbres y nuevos debates. Pero respecto a las alas mencionadas no aparecen después del 27-E sino en vísperas del V Congreso. Lo de ahora es un capítulo más. Las diferencias se han ido profundizando, incluso se fuerzan a veces artificialmente. Hay diferencias de línea sindical, pero también diferencias políticas. El sector mayoritario (que no es homogéneo) se autonomizó definitivamente del PCE y es muy celoso de la independencia del sindicato y el crítico es afín al PCE y a la mayoría de la dirección de Izquierda Unida.

En cuanto a línea sindical, los críticos abogan por una dinámica de mayor movilización y confrontación con el Gobierno. Por ello he coincidido a menudo con sus propuestas. Otra cuestión es la acusación a la mayoría de sostener al Gobierno. Me parece poco rigurosa y de corte sectario. Hace ya varios meses que el secretario general pidió en un Consejo la marcha de Felipe González y lo ha venido reiterando desde entonces. ¿Puede alguien sostener al Gobierno con semejantes propuestas?

P.: La búsqueda de acuerdos ¿no contribuye a sostenerlo?

J. N.: No es tan simple. Aquí hay un debate real sobre cuál debe ser la actitud de un sindicato ante los gobiernos de turno. Si debe limitarse a golpear al gobierno (que debe hacerlo y duro) o debe además seguir planteándole las reivindicaciones oportunas de cada momento e incluso llegar a los eventuales acuerdos (no hablo de pacto social, que es otra cosa) que pueda arrancar. Si consigue un buen acuerdo, bueno es, sin que tenga que interpretarse como un balón de oxígeno. Una fuerza política, Izquierda Unida, puede y debe orientar su actuación de otra manera en este tipo de coyunturas, pero no un sindicato que no puede dejar de estar al quite defendiendo las reivindicaciones de quienes, como los parados, pensionistas o inmigrantes no pueden depender de los avatares de la coyuntura política para que se les resuelvan sus problemas más inmediatos, a veces de supervivencia.

Y en otras circunstancias lo mismo. Aunque hubiera un gobierno de izquierdas el sindicato no podría estar esperando que cayeran las reivindicaciones como manzanas del árbol, sino que tendría que estar peleándolas frente a ese gobierno. Y si viene un gobierno conservador de derechas, que parece próximo, la acción sindical tendrá que orientarse a despacharlo, cuanto antes mejor, pero no podrá por ello dejar de mantener relaciones contractuales con él para arrancarle las reivindicaciones oportunas. Esta es la base de una verdadera autonomía sindical.

Me sorprenden algunas posiciones al respecto. Recientemente hemos tenido un debate sobre la experiencia del ANE, un pacto social en toda regla que contemplaba explícitamente sacrificios laborales con el objetivo de estabilizar la situación política y sostener a un gobierno en crisis (el de Calvo Sotelo) Pues bien,

el presidente de CC.OO, entonces al frente del sindicato y hoy activo portavoz crítico, ha vuelto a defender aquel pacto y sin embargo ahora cualquier acuerdo con el Gobierno, aunque sea bueno en contenidos, lo califica de balón de oxígeno.

P.: En estas condiciones ¿cómo se presenta el VI Congreso Confederal?

J. N.: El Congreso ya está abierto y de la peor manera. Ya estamos ante un debate lleno de reflejos sectarios y en pugna por la dirección. Sería mejor configurar las posiciones a partir del debate sobre los materiales, pero no. Le tengo pánico a dar el espectáculo que dió la UGT en su Congreso: ante la opinión pública lo único que se dirimía era la lucha por el poder.

Comisiones tiene la imperiosa necesidad de reorientarse sobre cuestiones que no se están debatiendo y en las que nos jugamos el futuro del movimiento sindical: cómo incorporar a la acción y al sindicalismo a todo ese numerosísimo sector precario que está desplazando al tradicional, lo que obliga a modificar la acción sindical y las formas de organizarse, pero nadie sabe aún en qué sentido; cómo incorporar el ecologismo al sindicalismo, lo que supone un cambio Copernicano; cómo reformular alternativas coherentes para otras relaciones Norte-Sur; como hacer un sindicato para hombres y mujeres; cómo enfocar las reivindicaciones en una sociedad en la que conviven unos sectores con problemas de pobreza con segmentos más preocupados por motivaciones de corte posmaterial... Hace falta también prepararse para la nueva etapa política que se avecina, que puede ser especialmente adversa para el movimiento sindical. El VI Congreso debería servir para orientarse en ese tipo de asuntos. Y esto por ahora no está en el debate.

P.: Y en el vértice de la tensión, la declaración conjunta sindicatos-patronal.

J. N.: La declaración no es aceptable, porque el texto no ha sido claro en el tema fundamental: la crisis se ha producido por la corrupción y el GAL y eso no se menciona; ¡lo terrible sería que con todos esos casos bajo investigación judicial no hubiera habido crisis! La declaración ha sido un enorme éxito mediático, pero no político. La reacción ante la misma es un hecho objetivo insoslayable: si la oposición de izquierdas, sea por lo que sea y aunque retorcidamente, la interpreta públicamente como de apoyo al Gobierno y esa misma es la interpretación gubernamental, aunque la letra del texto dijera lo contrario, eso es lo que queda. Por eso no es de extrañar que haya producido desconcierto y malestar en Comisiones.

Pero hay otro aspecto de la situación que me preocupa de verdad: se trata de una crisis por TV, ante la que la sociedad civil asiste pasiva. En Italia fue pasiva también y ¿qué pasó?: reforzamiento de la derecha y el neofascismo. En Brasil el PT llamó a la gente a salir a la calle y Collor de Melo cayó con una movilización democrática impresionante. Nuestro caso se va pareciendo más al italiano. Me preocupa. La responsabilidad de tomar la iniciativa es de las fuerzas políticas de izquierda. Es un error que aún no se haya llamado a la ciudadanía a expresarse en la calle. También es responsabilidad del movimiento sindical. He propuesto reiteradamente en dos Ejecutivas que, ya que otros no lo hacían, CC OO tomara la iniciativa de una autoconvocatoria de fuerzas políticas de izquierdas, sociales, cívicas, etc... para convocar movilizaciones. Me he quedado solo.

P.: Y ante este panorama ¿qué dice la izquierda sindical?

J. N.: La izquierda sindical como corriente organizada ya no existe. Al menos a nivel de Estado. Desapareció con la desunificación y disolución de los partidos que la sustentaban. Y no vale cerrar los ojos a sea realidad, aunque nos duela, que a muchos nos duele. Por honestidad conmigo mismo, y con las personas que han constituido la corriente, no puedo sentirme portavoz de una izquierda sindical que no existe. Esas personas hoy nos dedicamos a trabajar lo mejor posible desde nuestro ámbitos respectivos, sea en una sección sindical o en la Ejecutiva Confederal, abriendo campos nuevos de trabajo sindical –como es mi caso en el campo de la ecología– o haciendo las tareas de siempre y aportando también nuestras ideas sobre la acción sindical global. Ideas que creo que suelen estar en sintonía, aunque no siempre, como es lógico en estas circunstancias.

Antes había por nuestra parte cierta sintonía con el sector crítico de la Ejecutiva. Yo mismo animaba a las gentes de izquierda sindical a coincidir más con él en la configuración de un proyecto más amplio. Pero me da la impresión de que, vistos los reflejos sectarios que han a florado, la gente tradicionalmente ligada a la izquierda sindical ha preferido tener sus puntos de vista propios y posiciones en cada ocasión, según los debates, sin brazos de madera. Yo por lo menos así lo hago y, visto lo visto, no tengo ninguna intención de alinearme con el sector crítico en la guerra abierta de aquí al Congreso.

P.: Para terminar, ¿qué pasó con el enfrentamiento entre los sindicatos y la Plataforma Cívica por los Derechos Sociales el pasado día 27?

J. N.: La iniciativa de la Plataforma ha sido malograda. Hablo de Madrid, en Catalunya afortunadamente no se ha dado ese enfrentamiento. ¿Qué ha quedado del 27 de enero? Una pobre convocatoria (apenas dos o tres mil personas concentradas) el saldo de un enfrentamiento público Plataforma-sindicatos y un ácido debate entre las direcciones de Comisiones e Izquierda Unida. Las causas del desastre son múltiples y las responsabilidades repartidas. No compartí la descalificación pública de la Ejecutiva a la Plataforma, pero, ¿a quién se le ocurre convocar unilateralmente una concentración el aniversario del 27-E, anunciarla públicamente y votarla en el Congreso de IU, para después llamar a CC OO y UGT a sumarse y esperar que lo vayan a hacer? O hay ingenuidad o se trata de una maniobra sectaria para ganar posiciones ante el próximo Congreso.

Al emprender un proyecto unitario sobre cualquier temática no basta con un buen programa, hay que tener en cuenta la realidad del movimiento. Si IU montara por ejemplo una plataforma en defensa del medio ambiente sin las organizaciones ecologistas, convocara movidas y las llamara después a sumarse, estoy convencido de que no se sumarían. Y lo mismo pasaría con el feminismo o con cualquier otro movimiento ya construido. Ya sé que hay quien no lo entiende así, incluso muy amigos míos, pero estoy convencido que se debe actuar siempre respetando a los movimientos, incluidos el sindical.

Se ha malogrado un proyecto interesante. Ya desde el principio se le quiso dar un sesgo exclusivamente socio-laboral y cierto carácter reivindicativo respecto a los sindicatos. Algunos propusimos que su nombre fuera Plataforma por los Derechos Cívicos y Sociales, con la idea no sólo de evitar la colisión con los

sindicatos, sino también de crear un instrumento amplio y unitario de intervención sobre cuestiones como la corrupción, sobre las que nadie movilizaba. Pero no se nos quiso hacer caso. Sigo echando a faltar ese instrumento unitario, con credibilidad y consenso suficiente, capaz de emprender iniciativas y convocatorias respecto a cuestiones de interés colectivo, como la corrupción o el GAL. Incluso creo que el momento aconsejaba más una movilización de esas características, que habría sido masivamente seguida. Recientemente se ha propuesto en la permanente de la Plataforma promover una movilización así, pero se ha desestimado.

HKA/marzo de 1995/Bilbo

17 de febrero. Juicio en Madrid al insumiso Julio Rodríguez Bueno.

[Ante el Tribunal, Julio realizó una defensa insumisa y apasionada de la insumisión y una condena radical del ejército y el militarismo. Estas fueron sus palabras]

No sólo conocía perfectamente la citación por la que se me conminaba a incorporarme a filas, sino que la exigí. Un buen número de compañeros, conocedores de que se nos iba a ofrecer una amnistía encubierta, en forma de pase masivo a la reserva, a todos los objetores de conciencia que habíamos presentado la solicitud antes de una fecha determinada, quisimos renunciar a los beneficios que nos reportaría. Nuestro objetivo era evitar el salto generacional que pretendían crear el Gobierno y el Ejército entre los objetores de más edad y los más jóvenes. Estos últimos se iban a ver obligados a elegir entre el Servicio Militar, la Prestación Social Sustitutoria o la cárcel. A esta acción colectiva le dimos en llamar *reobjección*, y todos nosotros renunciábamos voluntariamente a nuestro status legal, solicitamos ser enviados al Servicio Militar, y en el momento de incorporarnos a filas nos negamos expresamente y por escrito ante los respectivos Gobiernos Militares.

Pretendíamos solidarizarnos con los insumisos más jóvenes. Pero también mostrar inequívocamente que no pretendíamos librarnos, sin más, del Servicio Militar, sino mostrar nuestro rechazo más absoluto a la existencia de los Ejércitos, a los que consideramos la mayor organización criminal que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad.

A la pregunta de si era consciente de la responsabilidad penal en que podía incurrir, quiero subrayar que sí, que era y soy consciente de que en el Estado español hay leyes que penalizan a los objetores, razón por la cual existen en la actualidad más de 150 presos de conciencia.

Mi profesión es la de profesor de Bachillerato. A mis alumnos y alumnas, como pregunta mi abogado, intento inculcarles los valores que se derivan de la educación para la paz. No he recibido nunca por parte de las personas a las que he impartido

docencia el mas mínimo escándalo ante la metodología pedagógica que aplico. Muy al contrario, siempre he encontrado en el aula una importante receptividad.

En cualquier caso, resulta evidente que la pena de inhabilitación que exige el Ministerio Fiscal va encaminada a impedir que siga ejerciendo la libertad de cátedra, recogida en la legislación vigente, y que imparta a los estudiantes las ideas antiautoritarias y antimilitarista que defiende.

Mi abogado quiere saber si comulgo con el saludo, la subordinación, la disciplina y el uniforme y si considero, que hubiera sido un mal militar. Puede que sea un mal profesor (no soy yo el mas indicado para juzgarlo), pero tengo por cierto que hubiera sido un pésimo militar. A mis alumnos y alumnas intento convencerles de que elijan cualquier profesión honrada, sea la de albañil, abogado, fontanero... o incluso juez, pero que se aparten de la milicia como de la peste.

No sólo no hubiera considerado un "alto honor" haber "servido a la Patria con las armas", sino que para mi hubiera constituido una vergüenza. Por el contrario consideraría un alto honor ser encarcelado por mis ideas, al igual que lo están un buen número de compañeros insumisos. Aprovecho la ocasión para denunciar que, mientras que algunos sufren persecución y penas privativas de libertad simplemente por motivos de conciencia, varios miles estamos hasta el momento en la calle a pesar de haber cometido el mismo supuesto "delito", esto es ser objetores hasta las últimas consecuencias.

En cuanto a si considero lícita la Prestación Social Sustitutoria (PSS) debo decir que supongo que el Estado tiene la potestad de imponer cualquier tipo de obligación a los ciudadanos/as. Otro asunto es que considere lícita dicha potestad. La PSS, tal y como está concebida, constituye un castigo a los objetores de conciencia, usurpa puestos de trabajo que deberían ocupar personas en paro, y prostituye la palabra "voluntariado", desde el momento en que una actividad obligatoria nunca puede ser considerada equivalente a una labor solidaria libremente ejercida. Los insumisos estamos en contra de cualquier obligación que el Estado imponga a la conciencia de los individuos y ésta es la razón por la que hemos desobedecido la Ley de Objeción de Conciencia y todos los reglamentos y normativas derivados de ella.

Quizá sea deformación profesional, pero siempre he comparado la Prestación Social Sustitutoria con la obligación de impartir una signatura "sustitutoria" a la religión, sea la de Ética o en la actualidad la de "estudio asistido". La intención es evidente: al imponer una sustitución a la religión, se mantiene ésta en el currículum de las/los estudiantes. De igual forma, la función de la PSS es legitimar la existencia del Servicio Militar Obligatorio.

Quiero contestar a mi abogado que, efectivamente, mi rechazo al militarismo no viene del momento en que tuve que incorporarme a filas en 1989. Desde hace años formo parte del movimiento pacifista y desde la Comisión Anti-Otan participé en las campañas de rechazo popular a la OTAN y las bases norteamericanas. Posteriormente colaboré a crear la Coordinadora de Kolectivos Anti-Mili de Madrid y en la actualidad participo en la ONG Paz Ahora, creada a raíz de la Caravana por la Paz a Sarajevo, en la que cerca de 2.000 pacifistas de catorce nacionalidades intentamos llevar a cabo una acción de interposición civil no-violenta en el conflicto que asola Bosnia-Herzegovina.

Desde entonces he vuelto a los Balcanes en varias ocasiones. Allí he podido comprobar los efectos devastadores de la existencia de los Ejércitos y soy testigo del horror de la guerra y de la acción genocida de unos militares que están al servicio de la política de limpieza étnica impuesta por los intereses políticos y económicos de los gobiernos de Zagreb y de Belgrado, que están sometiendo al pueblo bosnio a una carnicería sin precedentes en Europa desde el final de la II Guerra Mundial. También soy testigo de cómo unos cascos azules que teóricamente son una fuerza de interposición y una fuerza de paz, ni han sido capaz de cumplir una labor real de interposición, ni han conseguido llevar la paz a las víctimas del conflicto.

Considero que los cascos azules sólo tienen la misión de lavar la cara a sus Gobiernos respectivos y legitimar el papel de los Ejércitos ante la opinión pública de sus Estados de origen. No están realizando una labor social allí, sino todo lo contrario. Soy consciente, porque he sido testigo de ello, de que una gran parte de la población civil bosnia es absolutamente hostil a la presencia de las fuerzas de Naciones Unidas. Fuerzas que han sido denunciadas en multitud de ocasiones por realizar contrabando, comercio de armas, trata de blancas, etc., como ha aparecido en la prensa nacional e internacional. Todo ello es lógico si tenemos en cuenta que este tipo de atrocidades las han realizado los militares, siempre, en cualquier guerra.

Tengo que contradecir a mi abogado cuando afirma que, aunque sea insumiso al Servicio Militar, nunca he faltado al respeto al Ejército. Por si no ha quedado suficientemente claro, solicito que conste en el acta de esta vista que no sólo le he faltado al respecto a esa institución en multitud de ocasiones, sino que los militares merecen el mayor de mis desprecios.

Quiero darle la razón al Ministerio Fiscal cuando afirma que no existe atenuante alguno para el delito por el que se me juzga. Si se me apura, le diré que me parece pequeña la pena de 2 años, cuatro meses y un día de prisión, comparada con los sufrimientos ocasionados a la humanidad por siglos y siglos de opresión. Por la condena colectiva que ha supuesto la existencia de los Ejércitos. Por los millones de personas asesinadas, mutiladas o violadas en las guerras. Por los ríos de sangre, por las masacres y los genocidios.

Sin embargo, no puedo por menos que decirle, Sr. Fiscal, que no es cierto en absoluto que el lugar adecuado para hablar sobre el cambio de leyes sea el Parlamento. El objetivo último de la desobediencia civil es el de acabar con las legislaciones, normas o situaciones injustas. Y si no hubiera sido por la desobediencia colectiva de muchas personas, probablemente aún viviríamos en una dictadura.

Si hoy a este juicio han venido tantas personas de la calle, además de parlamentarios, sindicalistas, profesores de Universidad y representantes de distintos movimientos sociales, es porque a lo largo de estos años de insumisión, cuyo sexto aniversario celebramos el próximo fin de semana, hemos conseguido que se extienda como la espuma, ya que nuestra lucha es una lucha justa.

Sr. Fiscal: el Estado a quien Vd. representa en esta vista oral, está perdiendo la batalla y los insumisos la estamos ganando.

Julio Rodríguez Bueno

20 de febrero. Colectivos verdes y ecologistas asociados a IU presentan una Ley para la reconversión ecológica de la economía.

Abundan los autores que han señalado el desencuentro entre economía y ecología. No es infrecuente que épocas y países en que los indicadores económicos (PIB, tasa de inflación, balanza comercial...) muestran un comportamiento excelente, sean a la vez ejemplos claros de procesos acelerados de destrucción del medio. Durante mucho tiempo la tensión entre ambas disciplinas se resolvía, sin más, en favor de la economía. Ante las ingentes necesidades materiales por cubrir de la gran mayoría de la población, los problemas del medio aparecían inevitablemente como cuestiones menores que preocupaban sólo a cuatro románticos. Por otra parte la dimensión de los impactos ambientales asociados a niveles tecnológicos más bajos eran también mucho menores.

En buena medida esto ha cambiado. El alcance de algunos problemas ambientales (destrucción de la capa de ozono, cambio climático, pérdida de la biodiversidad, problemas de erosión y deforestación...) ha experimentado un salto cualitativo. Muchos de ellos tienen, además, una profunda repercusión económica cada vez más evidentes: es el caso de los problemas de escasez de agua en todo el Mediterráneo que obliga a la realización de obras públicas cada vez más costosas y menos rentables. En ningún período histórico anterior se presentaron simultáneamente tantos problemas que afectaran a la vez a áreas tan extensas.

De otro lado se hace cada día más evidente que en los países industrializados el aumento de la renta disponible no lleva aparejada un crecimiento paralelo de la calidad de vida. ¿Alguien se atrevería a afirmar que en Japón se vive dos veces mejor que en nuestro país porque su PIB por habitante es doble? La aparición de otros indicadores cada vez más aceptados, como el Índice de Desarrollo Humano, muestra a las claras que el bienestar de la sociedad no se expresa correctamente a través de los indicadores económicos más convencionales.

Por todo ello, al menos en los países industriales, es evidente que se necesita un cierto equilibrio entre la importancia concedida a los problemas ambientales y económicos. Y en paralelo una definición de nuevos parámetros que permitan una descripción más realista de la nueva situación.

Es por esto que diversos colectivos verdes y ecosocialistas asociados a Izquierda Unida hemos presentado un borrador para la elaboración de una "Ley de reequilibrio ecológico de la economía" que pretende sentar las bases de una política económica que haga compatibles la satisfacción de las necesidades sociales con el mantenimiento de la calidad ambiental.

Esta idea está inspirada en una iniciativa similar desarrollada por Los Verdes alemanes en 1990. La ley no fue aprobada, pero originó un notable debate político en Alemania que sirvió para vivificar el pensamiento de izquierdas y ofrecer un

horizonte de esperanza, justo cuando la caída del muro parecía haber sepultado cualquier posibilidad de transformación social.

El sustrato ecológico de la economía. Como elemento central de dicha ley está la creencia de que lo deseable no es un crecimiento "constante y adecuado" de la economía, sino que debe aspirarse a regenerar sus fundamentos ecológicos. Se pretende además superar la concepción del medio ambiente como un mero problema técnico para convertirlo en un aspecto central de la política económica.

En la propuesta se contempla además la preocupación por los altos niveles de desempleo existentes en este país y, consecuentemente con ellos, se proclama que un objetivo central de la política económica a desarrollar por el Gobierno es posibilitar a todos los ciudadanos y ciudadanas que lo deseen una actividad remunerada. Se pretende, en consecuencia, acabar con el fatalismo imperante en el pensamiento económico al uso que considera "inevitable elevados niveles de paro", salvo que la economía crezca a un ritmo que todo el mundo sabe imposible. Y por el contrario, se insiste en la eficacia de políticas de reparto del tiempo de trabajo (contenidas por otra parte en el programa electoral de IU) y de actuación específica sobre el mercado laboral que complementan las actuaciones de política fiscal y monetaria más convencionales.

Otros objetivos a perseguir por la política económica deberían ser una distribución más equitativa de la renta y los ingresos, el reequilibrio territorial, y la estabilidad en los precios. Para este último fin debe también abandonarse la idea tan arraigada de la necesidad de una continua y creciente apertura a la economía mundial, renunciando a todo instrumento de protección de los mercados interiores. En sintonía con ello está nuestra postura de rechazo a los acuerdos de la última ronda del GATT que dieron origen a la Organización Mundial del Comercio.

El papel del Estado en la planificación. Como idea subyacente a todo ello está la de que el Estado (tanto el Gobierno central como las Administraciones regionales y locales) es un agente económico determinante en la orientación de la economía, frente a quienes proponen que dicha orientación debe estar en manos de intereses bien visibles que algunos ideólogos identifican con el mercado. En definitiva, el Estado realiza una planificación-marco elaborada con la mayor participación social posible, lejos de la planificación central imperativa de infausto recuerdo. Los problemas son vinculantes para los poderes públicos, pero indicativos para las empresas.

Como novedades de la propuesta que sometemos a discusión estarían además:

- La necesidad de modificar la contabilidad nacional para que, al lado de indicadores como el PIB, aparecieran evaluaciones de los costes sociales y ambientales de la actividad económica y una contabilidad global ecológico-económica que informe cuantitativamente del estado del medio ambiente y el consumo de recursos naturales.

- Los programas de inversiones públicas en todos los niveles (estatal, comunitario y municipal) deberán ser escrutados en cuanto a su compatibilidad ambiental.

- El Gobierno central estará obligado a presentar planes marco y programas en los que se determinen los objetivos e instrumentos para la reconstrucción ecológica de la economía. En ellos deberán abordarse las reducciones de residuos tóxicos, de gases contaminantes, de los generadores del efecto invernadero..., así como de empleo racional de los recursos naturales.

- El Consejo Económico y Social pasa a ser también Ecológico, modificando su composición para dar entrada a los representantes de organizaciones ecologistas, al tiempo que sus funciones se ampliarían.

- El texto se posiciona además en contra de otro de los dogmas que se afirman con gran vigor en la actualidad: el de la autonomía de los bancos centrales encargados de velar por la estabilidad de los precios. Por el contrario, se debería modificar la ley recién estrenada para evitar la descoordinación de las actividades del banco central y el gobierno. Estando obligado aquel a apoyar la política económica en pos de los fines señalados.

Pretendemos que este texto de ley sea discutido tanto por IU como por aquellos grupos ecológicos que estén interesados en ello. Para IU resultará útil, porque servirá para aumentar el contenido real de lo que ya es un slogan con notable gancho electoral: la idea de ser una fuerza rojiverde. Para el ecologismo, porque permitiría entender la raíz de muchos problemas que combate. Y es claro que un pensamiento económico que sólo entiende el medio como un problema, en el mejor de los casos técnico, está en la base de muchas agresiones ambientales que luego se combaten con mejor voluntad que fortuna.

Ladislao Martínez, José Luis Ordoñez, Álvaro Martínez

26 de febrero. Cierre en falso del debate de Izquierda Unida de Madrid sobre las cuotas de mujeres en las listas electorales.

La escasa presencia de mujeres en las candidaturas de IU para las elecciones de Mayo de 1995 al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid ha movido a varias candidatas y candidatos a renunciar y ha abierto una polémica dentro y fuera de Izquierda Unida. ¿Para qué sirven las cuotas de mujeres en la política?

La propia etimología de "política" alude a lo complejo, lo compuesto por partes o cuotas. La representación del pluralismo político, asignando cuotas de representatividad a los diversos partidos (partido viene de parte) es uno de los requisitos básicos de cualquier sistema político. El reconocimiento de la diversidad territorial, garantizando representaciones mínimas a las circunscripciones electorales, es otro hecho común. Exigimos también una mínima heterogeneidad en la extracción social de los políticos, para que no constituyan una clase o casta. En resumen, la pertenencia a ciertos colectivos humanos, definidos por ideas, recursos o intereses diferenciados y contrapuestos,

ha adquirido relevancia política, y no reconoceríamos legitimidad democrática a un sistema político que impidiera a alguno de los antagonistas ser parte.

La política esta llena de cuotas. ¿Es relevante para la política el antagonismo de los sexos? ¿Somos las mujeres, como tales, sujetos de la acción política? Para el movimiento feminista, en sus diversas corrientes y etapas, la respuesta siempre ha sido afirmativa, y así lo ratifica la centralidad de la reivindicación del voto en su historia y la permanente demanda de respuesta política a sus reivindicaciones. La duda sólo se ha planteado sobre si puede canalizarse mediante acuerdos con los partidos y sindicatos mixtos o deben hacerse partidos y listas sólo de mujeres, como la que va a presentarse en San Sebastián o Donostia.

La implantación de cuotas mínimas de mujeres ha sellado, tras muchas batallas, un pacto entre el feminismo y la izquierda. Como toda norma, tiene una componente de legitimación (las mujeres son sujeto político) y otra de fuerza (garantía de mínimos). Empezaron los países escandinavos, modélicos por contar con un 34% de mujeres en los órganos de representación política, mientras la media española es del 16%, la de la Unión Europea del 19% y la mundial del 9%. Les siguieron la mayor parte de los partidos socialdemócratas y comunistas de Europa. En EE UU, las cuotas mínimas de mujeres y minorías raciales no obligan a los partidos políticos (el sistema electoral de circunscripciones de un sólo representante también lo dificulta) pero sí a los órganos de selección de las universidades, de las empresas públicas y de las privadas que contratan con el estado. Las cuotas han sido defendidas como discriminación o acción positiva por el movimiento feminista, el de los derechos civiles de los negros y la izquierda, como una técnica no sólo para garantizar pasos efectivos hacia la igualdad de oportunidades y el desarrollo personal de la mayoría de la población, sino también para apostar por la integración social de un país donde la desigualdad y la exclusión son ya un problema de orden público. Sin embargo, la eliminación de las cuotas es uno de los objetivos de la ofensiva de la derecha republicana, que exige la eliminación de trabas al darwinismo social, al triunfo de "los mejores".

En España, el sistema de cuotas mínimas de mujeres lo inició el PSOE en su Congreso de 1988, fijandola en el 25%. Meses más tarde, Izquierda Unida estableció su cuota mínima en el 35%. La medida supuso saltar del 6,6% al 14,6% de diputadas en el Congreso en las elecciones legislativas de 1989 y del 2,7% al 12,9% de senadoras. El Partido Popular, que tras Convergencia i Unió ha ostentado siempre las menores tasas de mujeres entre sus cargos públicos, empezó también entonces un proceso de crecimiento de las mismas. Sin embargo, el PP reitera una y otra vez que en su partido no se garantizará ninguna cuota de mujeres, sino que subirán "por su valía". No cantidad, sino calidad, es el lema para coaptar a unas pocas supermujeres muy visibles. El PP se apunta a las conquistas del feminismo que ya han sido asumidas por la mayoría de la población, pero no lo admite como presencia colectiva, diferenciada y reivindicativa de las mujeres.

IU y el pacto con las feministas. ¿Qué ha pasado ahora en Izquierda Unida de Madrid para que no se cumpla la cuota? Las listas aprobadas el 25 de enero tenían un 20% entre los 10 primeros para el Ayuntamiento de Madrid y un

25% entre los 20 primeros para la Asamblea autonómica. Entre los elegidos en 1991, la proporción fue del 33% y el 31% respectivamente. La razón principal ha sido un desplazamiento del interés del pacto con las feministas en favor del pacto entre corrientes. Fruto del propio avance electoral de IU en, el debate sobre el apoyo al PSOE o la formación con él de Gobiernos de coalición en ayuntamientos y la comunidad autónoma ha polarizado el debate en los últimos cuatro años. Las cuatro corrientes se han aplicado a lograr un equilibrio entre ellas, relegando el equilibrio entre hombres y mujeres en el seno de cada una de ellas y su presentación ante la sociedad como la fuerza parlamentaria más comprometida con la igualdad de las mujeres.

Presentada la protesta de varias mujeres y también de hombres, el eco de la misma ha sido mayor fuera que dentro de la organización de Izquierda Unida. En el Consejo Regional del 26 de febrero, al que el Área de la Mujer, varias Asambleas de base, y diversas asociaciones de mujeres habían pedido una solución que diera cumplimiento a la cuota de mujeres, el tema ni siquiera fue sometida a votación. Las otras disidencias, con las que sin duda había conexiones, fueron juzgadas por la mayoría del órgano de dirección de IU como lo principal. El tema de la cuota, como el accesorio. De hecho, ese día se sustituyó en pocos minutos a cinco de los candidatos y candidatas, para lograr una recomposición de la mayoría y descomposición de las corrientes, pero no se votó siquiera la sustitución de dos hombres por dos mujeres.

El aspecto positivo del debate es que ha conseguido una relevancia social y política, y que ha sido defendido por mujeres y hombres de todas las corrientes. Por primera vez la Presidencia Federal va a dedicar al tema un debate monográfico. Lo negativo es que la mayoría de IU, incluyendo a las mujeres, en vez de articularlo con los otros principios u objetivos, lo han relegado.

¿Hasta qué punto lo ocurrido este mes de febrero en IU-Madrid es mera coyuntura o marca un punto de inflexión, el abandono definitivo de la cuota de mujeres y lo que representa? Dependerá de si el Área de la Mujer, debilitada en esta batalla por la confrontación también en su interior, de las corrientes, logra o no recomponerse como la corriente feminista en el interior de IU, por encima de la legítima diversidad de posicionamiento de sus militantes en otros temas. Sólo así la articulación con el movimiento feminista, que IU define en su programa como uno de los principios de su acción política, podrá recuperar un espacio en la organización.

Hay heridas que restañar y posicionamientos que aclarar. Al mayoritario argumento de que la cuota de mujeres 'no era lo importante', se sumaron opiniones de que 'es rechazable'. Es simbólico que en la tanda de sustituciones saltara del nº 29 al 2º una mujer que en la 3ª Asamblea de IU hace tres años defendió la abolición de la cuota mínima de mujeres. En el momento de dar este salto, afirmó de nuevo que las mujeres deben ir "por su valía" (valía, que como vemos puede incrementarse de la 29 a la 2 en unos momentos) y no por asegurar la representación del colectivo de mujeres, con conciencia de tales y con compromisos específicos por ello.

También las defensoras de la cuota tendremos que hacer nuestra autocrítica. La

principal es sobre cómo hemos usado la parte de poder que hemos tenido en los cargos públicos y en los centros de decisión de IU para acercar la política a las mujeres y las mujeres a la política. Creo que es justo decir que en general las concejales, diputadas y dirigentes de IU hemos mantenido una presión constante en favor de un reparto del empleo que no sea precarizador ni excluyente para las mujeres, por los servicios de atención a la infancia y los mayores que aligeren y socialicen el trabajo doméstico, por el diálogo entre las instituciones y las organizaciones de mujeres, pero todo esto no se ha configurado como un movimiento sociopolítico unívoco.

Begoña Sanjosé

5 de marzo. La «penúltima» devaluación del Gobierno de Felipe González pincha el globo de la «recuperación económica».

Con la nocturnidad con que suelen decidirse, el 5 de marzo la peseta sufrió su cuarta devaluación desde septiembre de 1992. O, por ser más precisos, la quinta, si se tiene en cuenta que, en julio de 1993, la Unión Europea decidió ampliar las bandas de fluctuación del Sistema Monetario Europeo para evitar entonces que varias monedas cuestionadas por los mercados tuvieran que ser devaluadas oficialmente y para desactivar la especulación que desde hacía un año azotaba recurrentemente los mercados de cambios europeos. Fue la muerte virtual del SME, porque siendo un mecanismo construido justo para garantizar la estabilidad de las cotizaciones y preparar el asalto final a la moneda única, tuvo que desfigurarse —la banda de fluctuación actual es del 30%— para sobrevivir y eludir decretar la muerte definitiva del proyecto de Maastricht.

Como es evidente, la causa próxima de esta penúltima devaluación de la peseta —en los días siguientes de marzo ha seguido depreciándose— es la crisis política en que los socialistas han sumido al país. Los inversores tienen motivos sobrados para desconfiar de la deuda que emite y la moneda que respalda un Estado gobernado por un grupo del que la mafia tendría muchas cosas que aprender, que actúa al margen de toda regla de moralidad y principios políticos, y cuyo único objetivo es resistir, para rehuir el tiempo que sea posible hacer frente a las responsabilidades penales que le esperan a algunos de sus miembros. Ninguna duda, pues, sobre el hecho de que la vorágine política y los intentos desesperados del Gobierno por escapar de ella, aunque sea al precio de arrastrar al país al descrédito total y de poner en peligro el sistema, han determinado el hundimiento de la peseta.

Pero más allá de esta constatación, la tormenta monetaria de los primeros días de marzo pone sobre el tapete otros aspectos más profundos de la situación interna e internacional y tiene un significado de más largo alcance que el descenso del prestigio del país otro escalón. Más concretamente: por un lado, la nueva

devaluación de la peseta refleja la enorme debilidad económica del capitalismo español y de la inestabilidad financiera que atenaza al capitalismo internacional; por otro, es el punto final de toda una estrategia de política económica fracasada y representa el hundimiento del proyecto de vincular la economía española a la europea, en condiciones de igualdad con las más fuertes de la Unión Europea.

Aquellos polvos.... Con ser graves la crisis política y la degeneración de la vida democrática, la fuerza y estridencia de los fenómenos financieros de los últimos tiempos solo pueden comprenderse a partir de la fallas estructurales y los agudos desequilibrios de la economía española.

Lejos quedan los días en que el Gobierno, en un alarde de ciega arrogancia decidió en 1989 integrar la peseta en el SME con un tipo central de 65 pesetas por marco, la cotización más alta alcanzada desde la incorporación a la CE en 1986, a pesar de que desde entonces la economía española llegó a acumular el déficit comercial más alto comparativamente del mundo (el 7% del PIB). Lejos quedan también los días en que la peseta, a lo largo de 1989, de 1990 y de 1991, se mantenía ufana como la moneda más fuerte del SME (llegó a cotizar a 61 pesetas por marco), gracias a unos tipos de interés desorbitados que hacían de nuestro país el refugio más rentable para los capitales especulativos.

Tan fantástica había sido la subida, que la caída tenía que ser muy dura. Y así, después de marcarse el rumbo de Maastricht con el primer Plan de convergencia de 1992, a los pocos meses hubo que devaluar la peseta una primera vez (septiembre), una segunda vez (noviembre), una tercera vez (mayo de 1993), admitir la banda del 30% (julio), una depreciación continua a lo largo de 1994, una cuarta devaluación (marzo de 1995), y una depreciación posterior, que anuncia nuevas devaluaciones o la salida definitiva del SME, donde nunca debió haber entrado y menos tan fatuamente. La peseta cotiza ahora en torno a las 91 pesetas por marco, lo que representa una depreciación de nada menos que el 50% con respecto a esa moneda en poco más de tres años. Con respecto al ECU, o cesta de monedas de la Unión Europea, la depreciación desde 1991 se aproxima al 30%.

El aterrizaje forzoso de la peseta, el substrato de esta evolución tan negativa de la moneda, es una economía que para afrontar el marco competitivo del Mercado Único ha acumulado una tasa de paro del 24%. Que mantiene todavía un agudo déficit comercial (el 4% del PIB en 1994), a pesar de la profunda recesión padecida y las devaluaciones, y que tiene un saldo negativo de la balanza por cuenta corriente al inicio una recuperación. Que incurrió el año pasado en un déficit público equivalente al 6,8% del PIB, después de muchos intentos frustrados de reducirlo, y que cuenta con importantes restricciones impuestas por el alto endeudamiento del sector público, que ha pasado del 45% del PIB en 1984 al 64% en 1994. Que ha registrado un insólito crecimiento de los pasivos exteriores, los cuales han pasado de 9 billones de pesetas en 1985 a más de 42 billones al final de 1994. Y esa caída, tiene que ver también con el incumplimiento de todas las condiciones de convergencia, con la pérdida de interés del país para el capital extranjero una vez que se ha apropiado o neutralizado a las principales empresas y sectores, con las incertidumbres de Maastricht y, al mismo tiempo, con la certeza de que el Estado español quedara descolgado si se implanta la moneda única, con

el desplazamiento hacia el Este y el Norte de la Unión Europea, todo ello sazonado, claro esta, con el repugnante espectáculo de los socialistas, que hacen edificantes a las repúblicas bananeras.

El gran casino del mundo. Todos estos factores internos, a cual de ellos más negativo, operan en un marco disparatado de libertad absoluta de movimientos de capitales, de acuerdo con el neoliberalismo y los imperativos de Maastricht, y han coincidido con una de las crisis recurrentes del sistema monetario internacional, cuyo inestabilidad potencial es enorme por el avance de la desregulación de todos los sistemas financieros y el ingente magma de deuda internacional existente. La víctima en esta ocasión ha sido el dólar, cuya cotización ha caído a mínimos históricos con respecto la marco y al yen. La moneda americana esta condenada a depreciarse tendencialmente por el intenso déficit corriente de la balanza de pagos que padece la economía (155.000 millones de dólares en 1994), pero las sacudidas recientes son sobre todo un reflejo de la crisis financiera de México, del cual los Estados Unidos se han tenido que constituir en garante para evitar que una crisis política y social en el vecino Sur abra la espita de las convulsiones en el resto del continente, sometido a unas condiciones económicas y sociales explosivas. Los dólares canalizados hacia Méjico para impedir su declaración de bancarrota han inundado los mercados financieros, depreciando la moneda americana.

El capitalismo está instalado en la inestabilidad. El problema del endeudamiento del Tercer Mundo no se ha resuelto. Todos los acuerdos internacionales para reordenar la deuda, las reducciones acordadas y los planes de ajuste estructural a que ha sido sometidos los países subdesarrollados para volcar su producción a las exportaciones e irla liquidando, no han impedido que la deuda externa de los países subdesarrollados pase de 750,000 millones de dólares en 1981 a mas de 1.500,000 millones en 1994. En el caso particular de Méjico, en 1982, cuando desató la crisis de la deuda declarando una moratoria unilateral, se elevaba a 81.000 millones, ascendiendo a 125.000 millones en 1994.

El Gobierno español, con el descaro que le es propio (a la devaluacion le ha llamado "realineamiento"), pretende enmascarar la crisis de la peseta en la crisis del dólar, para sacudirse responsabilidades y desligar su suerte de la de la moneda. No obstante, aunque es un hecho que el marasmo internacional ha atrapado a la peseta, en la medida en que el marco, como principal moneda del SME, ha sido, junto al yen, una de las monedas mas demandadas por los especuladores, no es menos cierto que la peseta ha tenido una historia reciente propia, iniciada en diciembre con la activación del caso del GAL. Desde entonces ha estado a punto de ser devaluada en varias ocasiones en uno de los frecuentes picos de la crisis política. El futuro, además, podrá de manifiesto la singularidad de la crisis española, pues, como se ha indicado, los factores económicos decisivos son adversos y en la prolongada agonía del PSOE quedan muchos momentos de tensión que vivirse, a juzgar por su empecinamiento, el cúmulo de escándalos embalsados y el aluvión de acontecimientos pendientes

Final de etapa. Posiblemente —una situación tan patológica desde el punto de vista político desaconseja e impide emplear la lógica—, en el transcurso de los

próximos meses tenga lugar el desenlace de esa crisis por lo que respecta al PSOE y González (lo que no quiere decir que acabe la inestabilidad política), pero ya se ha hecho patente el fracaso de la estrategia económica socialista y hace tiempo que la disparatada idea de ocupar el vagón de cabeza del tren a Maastricht chocó con la dura realidad. El desconcierto económico es absoluto, por más que no desentone con el político. Fuera del instinto con que se mueve el capital y el Gobierno, con nuevas privatizaciones y reclamando moderación salarial, otra reforma del mercado de trabajo, recortes en las prestaciones sociales, no hay proyecto económico alguno, acumulándose los problemas de modo inquietante. La recuperación no acaba de consolidarse. Corre serios riesgos de desvanecerse y, si después de todo, llega a tomar cuerpo, se emprende con tantas rémoras (déficit y endeudamiento exterior y público, debilidad del consumo, inestabilidad financiera) que será efímera y débil, con la consecuente falta de fuerza para generar empleo. Los pronósticos sobre el paro hasta 1996, en la mejor de la hipótesis, dejan la tasa apenas un punto por debajo del 24% actual.

Por otra parte, la justificación suprema de la política económica que se ha aplicado hasta ahora ha dejado de tener sentido, por más que se intenten salvar las formas y aparentar que todo sigue igual. El proyecto de Maastricht está sometido a tantas o más incógnitas que cuando surgió, pero, si finalmente en 1999 (la fecha de 1997 ya está oficiosamente descartada) se crea la moneda única, no existe posibilidad alguna de que la economía española forme parte del núcleo de países que la pongan en marcha. La Unión Europea se amplía y se desplaza al Este. No pasará mucho tiempo antes de que sea evidente de que nuestro país no ha sido más que una zona que ha acaparado transitoriamente el interés del capital dominante europeo como un terreno a invadir y colonizar, para lo cual que ha contado con el papanatismo de los socialistas y los intereses espurios que han movido su acción de gobierno durante todos estos años.

Al final, todas las aguas volverán a su cauce. El fraude en que ha acabado el "proyecto socialista" es el equivalente al paro, la precariedad del empleo, el retroceso en la protección social, la destrucción del tejido productivo, la agobiante dependencia exterior en que ha culminado la modernidad que proponían como modelo económico. La misma incompetencia, el mismo amateurismo, la misma arrogancia, la misma falta de escrúpulos que muestran los autores de la corrupción y del terrorífico asunto del GAL están también detrás de los problemas que arrastra nuestra economía. Un sistema económico sólido y potente necesita de un sistema político respetado, con gobernantes fiables, instituciones escrupulosas y leyes que se cumplen. Todo lo contrario de lo que ha llegado a representar el "felipismo". Al mismo tiempo que se descubren sus miserias políticas, se desintegra también la imagen de economía moderna que trataban de proyectar. Decididamente, es el fin de una época.

Pedro Montes

2 el desorden internacional

Rusia/Chechenia

La guerra de Chechenia

[Grozny ha sido arrasada. Después de tres meses de intervención militar rusa, las milicias chechenas todavía controlan el sur del país y ciudades como Chali o Argun. Pero las víctimas civiles se cuentan por decenas de miles y más de la mitad de la población de Chechenia ha huído de la República.]

Las consecuencias para la democracia rusa parecen igualmente desastrosas. Yeltsin parece haber perdido cualquier oportunidad de ser reelegido en 1996, pero la propia división del Ejército parece descartar, por el momento, un golpe de Estado cuyo clima intelectual y psicológico está dado. Los neoliberales como Gaidar, que han condenado la guerra, se asustan ahora del fantasma del autoritarismo ruso, después de meses pidiendo un autoritarismo a la occidental para imponer el mercado.

Pero lo primero que han hecho los diputados nacionalistas y comunistas de la Duma —los mismos que condenaron el asalto al Soviet Supremo ruso en octubre de 1993— ha sido destituir al Defensor de los Derechos Humanos, Sergei Kovalev, acusándole de haber defendido el de los ciudadanos chechenos. Mientras tanto, Yeltsin se operaba durante diez días el tabique nasal...

Entre los dos artículos que publicamos sobre esta terrible guerra, uno de ellos escrito por un joven oficial llamado Leon Tolstoi, hay casi siglo y medio de distancia. En cambio, expresan problemas, sufrimientos y pasiones muy cercanas. Esto constituye en sí mismo un importante tema de reflexión]

Chechenia 1852

León Tolstoi

Inmediatamente, en el mismo mes de Enero de 1852, se organizó una expedición militar contra Chechenia, para poner en ejecución la orden de Nicolás I.

El destacamento a este fin destinado, estaba compuesto por cuatro batallones de infantería, dos centenares de cosacos y ocho cañones.

La columna avanzaba a lo largo del camino. Flanqueándola en cadena ininterrumpida, tan pronto descendiendo a las torrenteras como escalando los terraplenes, marchaban los cazadores calzados con botas altas, vistiendo pellizas, con los altos gorros de piel encasquetados, llevando al hombro sus fusiles.

Como siempre, la columna avanzaba por el territorio enemigo guardando el silencio más completo. Sólo de tiempo en tiempo, los cañones producían un rápido ruido de herrajes al saltar sobre sus cureñas en los baches del camino, o bien relinchaba algún caballo, sin comprender la orden que prevenía la observancia de un silencio general, cuando no era la voz ronca de un jefe, encolerizado por un momentáneo desorden en la formación de la columna, o por juzgar que los cazadores se habían separado excesivamente del grueso de las fuerzas.

De pronto, el silencio fue turbado por la súbita aparición de una pareja de cabras monteses que salieron de la maleza, entre la columna y la línea de cazadores: la hembra tenía blanco el pelaje en el vientre y gris en el lomo; al macho le nacían unos cuernecillos minúsculos detrás de la cabeza, tan atrás, que parecían arrancar casi del lomo. Las bestezuelas, lindas y asustadizas, encogiendo las patas delanteras en el impulso raudo de un bote, pasaron rozando tan de cerca a la columna, que muchos de los soldados, gritando y riendo, se lanzaron en su persecución, tratando de darles muerte con sus bayonetas; pero la cabra y el macho, volviéndoles de pronto la espalda, lograron atravesar la cadena de cazadores, y perseguidas por algunos soldados a caballo y por los perros de las compañías, se adelantaron, raudas como pájaros, montaña arriba.

Aún no había llegado el final del invierno, pero ya el sol subía más alto, y a medio día, cuando el destacamento llevaba caminadas cuatro verstas, se dejaba sentir hasta el punto de que los soldados tenían calor. Brillaban sus rayos con tal intensidad, que dañaba la vista mirar al acero de las bayonetas y los lampos de luz que se encendían, de pronto, semejantes a minúsculos soles, en los cobres de los cañones.

Quedaba a la espalda un riachuelo rápido y claro, que acaba de atravesar el destacamento; ante éste, se extendían campos cultivados y, en profundas quebradas, la verdura de las praderas; más a lo lejos, alzábanse las misteriosas montañas

negras, cubiertas de bosques; sobre las montañas se destacaban altos roquedos, y, aún más allá, contra el elevado horizonte, montañas nevadas, siempre bellas, distintas siempre, semejantes a colosales brillantes en su diamantería de luces.

Delante de la quinta compañía marchaba, vistiendo su uniforme negro, tocada la cabeza con un gorro de pieles, descansando en el hombro el contrafilo del sable, el oficial Butler, bello, en la plenitud de la fuerza. Acababa de abandonar el servicio en la guardia imperial. Estaba lleno de alegría y de vida, e iba excitándose a un tiempo mismo por el peligro, por el deseo de actividad, y por la conciencia de que era partícipe en una empresa común dirigida por una sola voluntad.

Era la segunda vez que Butler iba a combatir. Estaba seguro de que el enemigo no tardaría mucho en abrir contra ellos un fuego mortífero; y caminaba decidido, no sólo a no bajar la frente ante los abusos y no prestar ninguna atención a las balas que en rededor silbasen, sino, por el contrario, a levantar más aún la cabeza —como ya lo había hecho la vez primera— y mirando con una alegre sonrisa a oficiales y soldados, ponerse a hablar, indiferente, de cualquier cosa que no tuviese nada que ver con la batalla.

El destacamento se separó bien pronto del camino llano, internándose por una senda estrecha y poco practicable que reptaba por entre los maizales. Algunos minutos después, cuando la columna estaba a punto de entrar en el bosque, inesperadamente, sin que pudiera decirse de dónde saliese, se oyó el siniestro silbido de un obús, que después de haber descrito una parábola en el cielo, fue a caer no en el centro de la columna, sino algo apartado de ella, junto al camino, en un maizal, donde hizo un agujero.

—¡Ya empieza!— dijo Butler, con una sonrisa de contento al compañero que tenía a su lado.

En efecto, aún no extinguido el eco del cañonazo, se vio salir del bosque un compacto tropel de *chechentzi* a caballo, llevando en las manos banderines. En el centro de ellos, ondeaba una gran bandera verde. El viejo suboficial de la compañía, que gozaba de una vista finísima, dijo a Butler —que, al contrario de él, era sumamente corto de vista— que debía ser el mismo Shamil quien capitanease a aquellos hombres.

Los montañeses descendían de la montaña; pronto aparecieron al borde de la torrentera, después se lanzaron por ella abajo.

Un general, vestido con uniforme negro y un gorro de piel blanco, se llegó a caballo, hasta la compañía de Butler, dándole orden de dirigirse hacia la derecha, al encuentro de la caballería montañesa.

Inmediatamente, Butler, condujo a sus hombres en la dirección indicada; pero aún no había tenido tiempo de bajar al fondo de la quebrada, cuando oyó a su espalda, uno tras otro, dos cañonazos. Volvió atrás la mirada: sobre dos de los cañones, se elevaron dos nébulas de humo azuleante, que se dispersaron a lo largo de la torrentera.

Los montañeses, que probablemente no esperaban tener que habérselas con la artillería, se retiraron. La compañía de Butler inició el fuego contra ellos, y todo el valle se cubrió del humo de la pólvora. Sólo se veía, un poco más arriba, a los montañeses replegándose en su huída, disparando sus fusiles contra los cosacos que les perseguían.

La columna entera se entregó a esta persecución; y no tardaron en descubrir una aldea enemiga a la bajada de una colina.

Butler, con su compañía, siguiendo a los cosacos, entró en la aldea. No había en

ella ni un solo habitante. Los soldados recibieron la orden de pegar fuego al trigo, al heno y a las casas. La aldea entera quedó envuelta en un humo asfixiante, y en medio de este humo se agitaban los soldados, apoderándose de cuanto hallaban en las casas, ocupados especialmente en atrapar o matar a culatazos las gallinas que no habían podido llevarse en su huída los aldeanos.

Los oficiales se sentaron a alguna distancia de la humareda, aprovechando el alto para desayunarse y echar un trago. Un suboficial les trajo, puesta en una tabla, miel fresca hallada en una colmena. No se veía ni oía a los *chechentzi*.

Poco después del mediodía llegó la orden de abandonar la aldea. A espaldas de ésta la compañía formó en columna, detrás de la cual se encontró Butler. Apenas se hubo puesto en marcha la compañía, cuando los montañeses reaparecieron, y, siguiéndola de lejos, disparaban contra ella de vez en cuando sus fusiles.

Cuando la tropa hubo salido a un sitio descubierto, los montañeses se detuvieron.

Butler no tenía ni un solo herido, y volvía de un humor excelente. El destacamento, después de haber atravesado a pie el riachuelo que aquella mañana misma habían vadeado ya, se desparramó por los maizales y praderas; entonces los soldados se pusieron a cantar a coro.

No había el menor frémito de viento. El aire era fresco, claro, y tan límpidamente diáfano, que las montañas que erigían sus cimas nevadas a más de cien verstas de distancia, parecían tocarse con la mano. Cada vez que los soldados dejaban de cantar por un momento, se oía el ruido regular de las pisadas y del rodar de los cañones; dijérase que aquel ruido fuese el fondo sobre el cual comenzaba y moría el canto.

La canción que la compañía de Butler entonaba en pleno, fuera compuesta, a la gloria del regimiento, por un joven oficial, sobre un alegre aire marcial.

Butler hacía trotar a su caballo al lado de su jefe inmediato, el mayor Petrov, con quien se pasaba ahora la vida; estaba muy contento de haber dejado el servicio en la guardia imperial y partido para el Cáucaso. La principal causa de esta decisión estaba en que había perdido a las cartas cuanto poseía. Temía que, de seguir prestando servicio en la guardia, carecería de fuerzas para renunciar al juego, y sin embargo, no tenía ya más que pudiera jugar. Ahora, todo aquello estaba bien muerto, y una vida nueva, interesante, plena de intrepidez, comenzaba para él, haciéndole olvidar su ruina y sus numerosas deudas. El Cáucaso, la guerra, los soldados, los oficiales, con su hombría de bien, su ebriedad y su bravura, el mayor Petrov, todo le parecía tan bueno, que su contemplación le llevaba a pensar con horror de su pasado. ¡Qué dicha no estar más en Petersburgo, en las habitaciones llenas de humo de tabaco, pesada la cabeza, con un odio sordo contra el que distribuye las cartas, sino hallarse aquí, en esta región admirable, entre estos calientes guerreros del Cáucaso!

Seguían cantando los soldados. El caballo de Butler trotaba alegremente, en una marcha acompasada al ritmo de la canción. "Tesoro", el perro de la compañía, peludo y gris, corría, con un aspecto preocupado, al frente de la compañía, como si fuera uno de sus jefes. El corazón de Butler rebotaba de alegría y de una calma dichosa. Concebía la guerra como un peligro al cual se exponía sin temor, como la muerte posible, y esto le hacía, a sus propios ojos, digno de recompensa y de estima por parte de sus colegas del Cáucaso y de sus amigos de Rusia. En el otro aspecto de la guerra, es decir, en la muerte y las heridas de los soldados, de los

oficiales y los montañeses, no se le ocurría pensar, aunque parezca extraño. Aun sin darse cuenta de ello, evitaba instintivamente mirar a muertos y heridos, para no obscurecer su concepción ideal de la guerra.

Así también esta vez. Había tres muertos y doce heridos entre los rusos. Butler pasó por delante de uno de los cadáveres; vio, de una ojeada, la extraña posición de una mano amarilla como la cera, y una mancha de un rojo negruzco sobre la cabeza, y volvió los ojos a otra parte. Los montañeses eran, a su juicio, bandidos a caballo contra los cuales había que defenderse.

-Ya usted ve, querido -le decía el mayor, en un intervalo de la canción- aquí no es como en Petersburgo, entre ustedes: "¡a la derecha!, ¡a la izquierda!, ¡a la derecha!, ¡a la izquierda!" ¡Aquí se trabaja!. Y ahora, después de haber trabajado, llegaremos a casa, y Machaka nos servirá un *pudding* caliente y una hermosa sopa de coles. ¡Esta sí que es vida!

Y dió orden a los soldados de que entonasen una nueva canción que comenzaba por las palabras: «Cuando el alba apuntó en el cielo...».

Vivía maritalmente con la hija del enfermo, a quien antes llamaban todos Machaka, y ahora, por respeto al mayor, María Dmitrievna. Era una mujer de treinta años, sin hijos, bonita, rubia y pecosa. Cualquiera que fuese su pasado, ahora era una amiga fiel del mayor, a quien cuidaba como una criada; y bien sabe Dios que el hombre tenía necesidad de semejantes cuidados, debido a su hábito de emborracharse hasta perder la conciencia de cuanto le rodeaba.

Cuando el destacamento estuvo de vuelta en la fortaleza, todo pasó como el mayor había predicho: María Dmitrievna sirvió un abundante almuerzo a Petrov, a Butler y a otros dos oficiales invitados. El mayor comió y bebió tanto, que no pudo resistirlo y se retiró a su cuarto, a dormir. Butler, fatigado de la expedición, pero contento y con algún vino del país demás en el cuerpo, marchó también a su casa. Apenas hubo entrado en su habitación y desnudándose, se quedó dormido con un sueño fuerte y profundo, sin sueños ni sobresaltos, puesta la mano, a modo de almohada, bajo su hermosa cabeza rizada.

La aldea, arruinada y entregada a las llamas por el destacamento ruso, era la misma en que había pasado Jadsí-Murat la noche anterior de su entrega a los rusos.

Sado, en cuya casa se había alojado entonces el caudillo, había huído a las montañas con toda su familia, al aproximarse las tropas. Al volver a la aldea, se encontró con su casa, hundido el techo, deshechas las puertas, lamentablemente sucio el interior de la casa por la soldadesca. Su hijo, el muchacho de ojos negros y brillantes que había contemplado con tanta admiración a Jadsí-Murat, había sido llevado a la mezquita, muerto, atravesado sobre su caballo cubierto con una manta, con un bayonetazo en la espalda.

La mujer de Sado, que sirvió a Jadsí-Murat durante la estancia de aquél en la aldea, estaba en pie ante el cadáver de su hijo, con la camisa desabrochada por el pecho, dejando ver sus senos viejos, péndulos; trágicamente desmelenada, lloraba a lágrima viva, sin tregua, arañándose el rostro con las uñas hasta hacerse sangre.

Sado provisto de una azada, fue, acompañado de todos los suyos, a cavar una fosa para su hijo. El decrepito abuelo, sentado contra el muro de la casa destruída, tallaba un trozo de madera con su navaja, y ponía los ojos en un punto indeterminado del espacio delante de sí. Acababa de volver de su colmenar; las dos hacinas de heno que en él había dejado, estaban ahora reducidas a cenizas; los

albaricoqueros y cerezos, ya crecidos y ramosos, con tantos desvelos y cuidados, veíanse ahora hendidos a hachazos y en parte carbonizados; pero había algo peor aún: habían sido quemadas todas las colmenas con enjambres y panales.

Oíanse los alaridos de las mujeres y de los niños pequeños que imitaban a sus madres. El ganado balaba y mugía, sin que hubiera nada que darle a comer. Los más crecidos de entre los niños no jugaban, y miraban con ojos pasmados a las personas mayores.

La fuente había sido enturbiada por los soldados —de intento tal vez, para que nadie pudiese tomar agua de ella—. La mezquita estaba asimismo llena de porquerías, de ex profeso amontonadas, que el *mulla* **1**, ayudado por los *mutalim* **2**, trataba de limpiar.

Nadie hablaba de odio hacia los rusos. El sentimiento que animaba a todos los *chechentzi*, grandes y pequeños, era más fuerte que el odio. Nadie consideraba a los “perros rusos” como a hombres; inspiraban tal repugnancia por su crueldad estúpida, y esta crueldad les desconcertaba hasta tal punto, que, ante ellos, el único deseo que se sentía era el de matarlos como se matan las ratas, las arañas venenosas, los lobos; sentimiento perfectamente natural, inspirado por el instinto de conservación.

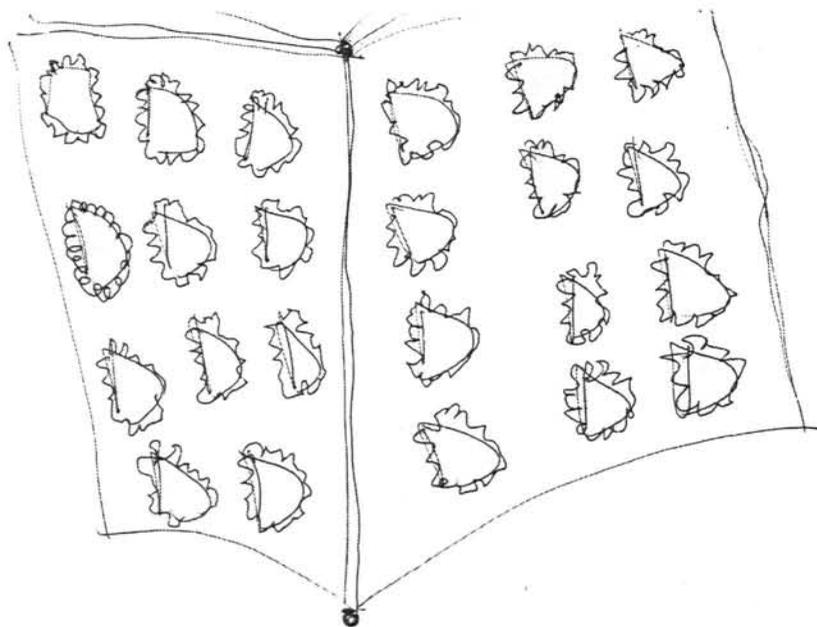
Los aldeanos se hallaban ante la alternativa de continuar allí, entregándose a la tarea de restaurar, con terribles esfuerzos, todo aquello que los rusos habían destruído, esperando a cada instante un nuevo y cruel asalto por parte de los rusos: o, de no ser así, y a pesar de la repugnancia que los rusos les inspiraban, someterse a ellos.

Los ancianos de la aldea, después de haber hecho su oración a Dios, decidieron por unanimidad enviar delegados a Shamil para solicitar de él socorros, y se entregaron inmediatamente a la faena de restaurar cuanto había sido destruído.

[Fragmento de *Jadsi-Murat*, según la edición en castellano de 1927]

1/ Sacerdote.

2/ Servidores del templo.



Las jugadas sangrientas de Boris Yeltsin

Karel Bartak

Boris Yeltsin declaró el pasado 26 de diciembre: "el orden y la legalidad serán restablecidos en Chechenia". Así, por primera vez desde el fin de la Unión Soviética y el nacimiento de la Federación de Rusia, el Kremlin ha decidido, pese a las reticencias de las Fuerzas Armadas y los diputados, resolver militarmente un conflicto político interno. El presidente corre el riesgo de que las llamas se propaguen por todo el Cáucaso y se debilite aún más la democracia en Moscú, ya maltratada por el asalto contra el Parlamento de octubre de 1993.

Viejas heridas

El 11 de diciembre de 1994, las tropas rusas franquearon la *frontera* de la República chechena. Poco a poco se fue estrechando el cerco en torno a la capital, Grozny. El avance de las Fuerzas Armadas tuvo por compañía numerosas atrocidades y la muerte de decenas de víctimas civiles. Simultáneamente, Moscú y Grozny entraron en un intercambio febril de propuestas de diálogo, que en la mayoría de los casos quedaron sin respuesta o fueron consideradas inaceptables; ambas partes se instalaron en posiciones irreconciliables.

El ataque sorpresa de una fuerza estimada en 20.000 hombres, la mayor operación militar organizada por Moscú desde su intervención en Afganistán en diciembre de 1979, puede incendiar todo el Cáucaso, desajustar las relaciones de fuerzas dentro de la dirección rusa y desacreditar al régimen del presidente Boris Yeltsin, tanto en el interior de la Federación como en el extranjero. Tras la guerra de propaganda y las explicaciones vergonzantes se oculta la voluntad de someter por la fuerza a una oposición regional que se apoya sobre una legitimidad real, vertiendo la sangre de gente inocente sin que las posibilidades de encontrar una solución negociada se hayan agotado.

La pequeña república montañosa, de 13.000 kilómetros cuadrados de superficie, está en el corazón de la agitación que reina en el Norte del Cáucaso desde la desintegración de la URSS. Marginal durante mucho tiempo, especialmente en relación a la Transcaucasia, en la que se multiplicaban los focos de tensión (Alto Karabag, Osetia del Sur, Abjasia), esta región se ha convertido bruscamente en la frontera sur de Rusia. A la vez, el relajamiento del poder central permitió el renacimiento de viejos contenciosos, la reapertura de antiguas heridas que el miedo había temporalmente, y mal, cicatrizado. Varios conflictos nacionales o étnicos han agitado a Rusia, pero finalmente todas las antiguas repúblicas autónomas, incluso el Tatarstán, han entrado en el redil y firmaron en 1993, con más o menos entusiasmo, el tratado de la Federación **1/**. Excepto Chechenia que, después de haber proclamado su independencia en 1991, continuó buscando su propio camino.

1/ La Federación de Rusia agrupa a ochenta y nueve "sujetos": las veinte Repúblicas (entre ellas, Chechenia); doce entidades autónomas; seis territorios (krai); cuarenta y nueve regiones (oblast), Moscú y San Petersburgo.

“Haremos de Chechenia el Kuwait del Cáucaso”, declaraba el general Dudáiev tras ser elegido presidente de la República por sufragio universal, en 1991. Contando con el apoyo popular, las relaciones tejidas durante su brillante carrera militar (entre 1987 y 1990 mandó la división de bombarderos estratégicos nucleares con base en Estonia) y los recursos petroleros de su país, entre los que se cuenta una refinería bastante moderna, Dudáiev ha querido hacer realidad el viejo sueño de independencia de su pueblo. Los rusos empezaron a irse masivamente; según las estimaciones de la prensa moscovita ², sólo quedarían 60.000, pillados entre la espada de la maquinaria militar de su patria y la pared del odio histórico, convertido en ánimo cotidiano.

El Kremlin sabía que la historia atormentada de los chechenos es fuente de numerosos rencores. Al terminar la guerra de conquista rusa del Cáucaso —que se extendió durante los siglos XVIII y XIX y cuyo episodio más célebre fue la revuelta del imán Shamil que duró treinta y cinco años, entre 1825 y 1859— centenas de miles de chechenos fueron forzados a huir hacia el Imperio Otomano; las mejores tierras fueron confiscadas en beneficio de los cosacos y la población autóctona fue empujada hacia los valles altos, poco fértiles.

Durante el período revolucionario, y después de la toma del poder por los bolcheviques en noviembre de 1917, los chechenos conquistaron algunas libertades, en especial la creación de una República de los Montañeses que reagrupaba a casi todos los pueblos del Norte del Cáucaso. Pero, desde mediados de los años 20, sufrieron la división de su república en varias entidades, los ataques contra la religión y después la colectivización; en fin, sobre todo en 1944, Stalin decretó la liquidación de la República checheno-inguche, la deportación masiva de toda la nación hacia el Kazajstán bajo el pretexto de “colaboración con el Ejército alemán”. Los supervivientes sólo pudieron volver a partir de 1957.

Ningún Gobierno ha reconocido la independencia de Chechenia, excepto el régimen efímero y controvertido del presidente georgiano Gamsajurdia. Moscú se ha negado categóricamente a negociar con Dudáiev, a quien no considera ni portavoz de un Estado independiente, ni representante legítimo de su pueblo (el resultado de la elección presidencial jamás ha sido aceptado por el Kremlin). Frente al bloqueo económico impuesto por Rusia y las dificultades crecientes de la vida cotidiana, que han hecho aparecer fuerzas de oposición, Dudáiev concentró todo el poder en sus manos: disolvió el Parlamento y cesó al gobierno, antes de introducir la censura, apoyándose cada vez más en la fidelidad de la familias y los clanes.

Una parte de la clase política local, es decir, los jefes de los clanes tradicionales, los viejos funcionarios comunistas, los intelectuales, comenzaron una oposición política, y después armada, con influencia, pero desunida. Sus jefes más conocidos son Omar Avturjanov (un antiguo oficial del Ministerio del Interior ruso, que dirige el Consejo provisional de la República chechena y se ha apoderado del distrito de Nadterechni, al norte de la capital) y Labazanov, antiguo capitán de la

² Los rusos representaban el 30% de la población de la República checheno-inguche antes de 1992, o sea cerca de 400.000 personas. Inguchia se separó de Chechenia en 1992, justamente para “beneficiarse” de su fidelidad a Moscú. Desde el otoño de ese año se considera traicionada, porque en la corta pero sangrienta guerra entre los osetios y los inguches en Osetia del Norte, Moscú tomó partido por los osetios, el único pueblo cristiano ortodoxo del Norte del Cáucaso, mayoritariamente musulmán.

guardia presidencial, con base en Urus-Martan, en el Sur. Entre los dos se mueven otros varios jefes: Gantemirov, que fue alcalde de Grozny y hombre de confianza de Dudáiev; Mamodaev, jefe del "Gobierno de confianza nacional"; Jasbulatov, antiguo presidente del Parlamento rebelde ruso disuelto por la fuerza por Yeltsin en octubre de 1993, originario de un clan local prestigioso, que regresó como mediador a su país natal, fracasó y se ha vuelto a Moscú, donde ha apoyado la intervención militar.

Todos estos protagonistas mantienen relaciones ambiguas entre ellos, con las autoridades de Grozny y con el Kremlin. Los seis últimos meses se han sucedido una serie de complots y de reuniones secretas con agentes de Moscú. Pero, excepto Avturjanov, ningún opositor proponía una solución militar y sus programas para el futuro—independencia, estatuto especial dentro de la federación, subordinación total a Moscú—eran confusos.

De hecho, asistimos a una áspera lucha por el poder, asentada en dignidad orgullosa de este pueblo, el más numeroso del flanco norte del Cáucaso (según el censo de 1989, había un millón de chechenos en todo el territorio de la Unión Soviética), en su tradición ancestral de la vendetta y en la cohesión de sus familias y sus clanes. Toda Rusia tiembla ante la mafia chechena, que es, a la vez, un poder real y un fruto de la propaganda con rasgos racistas de Moscú.

Penurias y coches de lujo

La incertidumbre nacida de la independencia, la falta de subvenciones del centro (el presupuesto ruso incluía una suma anual importante para Chechenia que no ha sido entregada desde 1991), las redes oscuras que controlan los negocios, la lucha por el poder, el bloqueo económico, han convertido a Chechenia en un extraño país. La víspera de la ofensiva rusa, las calles de Grozny estaban repletas de coches de lujo de las grandes marcas occidentales. Casi todo el mundo estaba armado. Los pocos extranjeros europeos que allí se aventuraban, buscaban la protección de personalidades poderosas para poder trabajar.

La penuria se había generalizado. En las sucias aceras había numerosos mendigos, un fenómeno desconocido en este orgulloso país, significativo del impacto del bloqueo ruso.

La gasolina, que antes vendían los obreros en la puerta de la refinería local, había desaparecido. Sólo los ricos encontraban los medios para procurársela. La producción petrolera había caído fuertemente, carente de productos químicos necesarios para tratar el petróleo bruto, pero también de especialistas rusos que habían preferido hacer las maletas. Las fábricas se han parado, la agricultura regresó a la etapa del intercambio primitivo, la criminalidad se gravó terriblemente. "La única cosa que Dudáiev ha dado a su pueblo es la bandera, el himno nacional, el Ejército y los demás atributos exteriores de la independencia. Según la opinión de la mayoría de los intelectuales, la independencia ha perdido su atractivo para la mayoría de la población", afirmaba el pasado 28 de agosto el diario moscovita *Izvestia*.

En estas condiciones, es difícil comprender cómo nació la decisión rusa de intervenir militarmente. La evolución de la situación sobre el terreno permitía

pensar que el mantenimiento del embargo económico y el apoyo habilidoso a las facciones hostiles a Dudáiev, habrían llevado con el tiempo al hundimiento del régimen o le habrían forzado a adoptar una posición más flexible hacia la Federación Rusa.

Sin embargo, desde octubre de 1994, estaba claro que el opción del Kremlin era diferente; así se pudo comprobar con el torpe apoyo aportado a la oposición local, en especial a Avturjanov.

La máscara oficial de ignorancia que se colocó Moscú para responder a las preguntas sobre el origen de los aviones y los helicópteros que durante el otoño bombardearon los aeropuertos y otros objetivos sensibles en torno a la capital chechena, no podía engañar ni a los más crédulos. Según la prensa liberal moscovita, una de las razones de la intervención del 11 de diciembre habría sido precisamente tapar el fracaso de la operación lanzada contra Grozny el 26 de noviembre, cuando las fuerzas de la oposición, convenientemente ayudadas por una treintena de tanques y ochenta soldados del Ejército regular, llegaron al centro de la ciudad, donde fueron detenidos o masacrados.

El Kremlin usó todo su poder para impedir una investigación judicial. Pero desde el 2 de diciembre, los periódicos rusos *Izvestia* y *Obchaia Gazeta* comenzaron a publicar los testimonios de los oficiales y soldados rusos que habían sido reclutados por el servicio federal de contraespionaje para participar en "una operación militar secreta en el territorio de la República chechena". Pese a los desmentidos de los responsables, esta participación fue probada claramente durante una investigación realizada por una delegación de la Duma (cámara de diputados del Parlamento ruso) que se había desplazado a Grozny para negociar la liberación de los soldados rusos hechos prisioneros durante el ataque. En una conferencia de prensa, dos soldados liberados por Dudáiev reconocieron haber sido contactados por el servicio de contraespionaje para participar en la acción, a cambio de seis millones de rublos.

Estas revelaciones crearon el pánico en Moscú; confirmaban las acusaciones de Dudáiev, según el cual "la dirección política suprema de Rusia no controla la situación en el país, sobre todo en lo que se refiere al nacimiento y el desarrollo de diferentes conflictos. Cada maharajá de un servicio secreto, perteneciente a no importa qué patrón político, es capaz hoy de desencadenar una "pequeña guerra". Según Dudáiev, el presidente Yeltsin estaría "completamente aislado por los servicios secretos, que le dan informaciones falaces y crean una falsa imagen del enemigo".

El diputado Sergei Yuchenko, presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, ha pedido públicamente la "dimisión de los que han tomado esas decisiones y la apertura de un proceso criminal contra ellos". Otro miembro de la delegación, Vladimir Kysenko, también diputado del grupo Opción Rusa, ha afirmado: "La solución militar de este problema está excluida", añadiendo que existía un "peligro de que el incendio se propague a las regiones vecinas y finalmente a todo el Norte del Cáucaso".

Estas posiciones han sido apoyadas por un número creciente de hombres políticos y militares importantes, como los populares generales Gromov y Lebed. Cuando, en la noche del 18 de diciembre los aviones rusos bombardearon por primera vez el centro de Grozny, el presidente ruso y sus allegados estaban

aislados. Eran fuertemente criticados incluso en el seno del núcleo duro de las fuerzas democráticas, al que deben su poder.

"La crisis chechena amenaza la integridad de Rusia y exige una resolución urgente", ha replicado Yeltsin a unos diputados estupefactos, al día siguiente del comienzo de la operación militar. En su mensaje, Yeltsin ha explicado que no tenía otra opción porque toda negociación sobre el estatuto de Chechenia sería contraria a la Constitución, que la considera uno de los ochenta y nueve integrantes de la Federación; tener conversaciones oficialmente con Dudáiev sería también contrario a la ley, porque el resultado de la elección presidencial en Chechenia, en octubre de 1991, fue invalidado por Moscú. Este planteamiento ha encontrado un cierto eco entre los parlamentarios mayoritariamente hostiles a la independencia chechena, que temen sea el comienzo del estallido de la Federación. En adelante, cada toma de posición contra la solución militar fue considerada como una prueba del apoyo al separatismo checheno y Yeltsin ha multiplicado las presiones sobre los medios para que difundan solamente la versión oficial de la crisis.

La venganza, en vez del compromiso

Moscú no ha respondido jamás de una forma constructiva a las críticas; su comportamiento, la hospitalización de Yeltsin y el ascenso del jefe de su seguridad personal, el general Alexandre Korjakov, recuerdan los peores momentos del declive del imperio soviético. "Yeltsin salda sus cuentas personales con Dudáiev que se ha burlado abiertamente de él durante mucho tiempo", estima Jadsi-Murat Ibraghimbeili, especialista de la Academia de Ciencias rusa. Sin embargo, en su opinión, bastaría un gesto de Moscú: "Si Moscú ayuda a Dudáiev a salvar la cara, él estaría dispuesto a aceptar compromisos".

Una solución como la que ha prevalecido en el Tatarstán habría sido aceptable para la mayor parte de los hombres políticos chechenos. Moscú ha preferido la venganza.

Después del comienzo de la ofensiva militar, todas las conversaciones estaban destinadas al fracaso. Los chechenos no tenían ninguna intención de ceder a la presión y aceptar que la independencia se someta a la mesa de negociaciones y exigían la retirada de las tropas rusas. Por el contrario, Moscú exigía el desarme unilateral de las "bandas armadas" como condición de la paz.

"Una invasión rusa de Chechenia haría arder todo el Cáucaso", declaró a comienzos de octubre Mussa Chabinov, presidente de la Confederación de Pueblos del Cáucaso (CPC), que reagrupa a los pequeños pueblos montañoses ^{3/}. "Eso significaría el comienzo de la segunda guerra del Cáucaso, de la cual la región saldría devastada y Rusia fuertemente debilitada". La Confederación no apoya el separatismo checheno y se pronuncia por el mantenimiento del Norte del Cáucaso en el seno de la Federación rusa, que debería tender en el futuro hacia una "confederación de repúblicas". Pero una intervención militar sería intolerable y

^{3/} La Confederación de los Pueblos del Cáucaso reagrupa a representantes de los "pequeños" pueblos de la Federación rusa y de Georgia que, contrariamente a los georgianos, azeríes y armenios, no tenían un estatuto de República soviética en el seno de la URSS.

tendría como respuesta inmediata el llamamiento de la CPC a miles de voluntarios —en muchos casos forjados en la reciente guerra de Abjasia—, “a todos los jóvenes del Cáucaso”, a ir a defender a “sus hermanos chechenos” contra una “agresión”.

Estas amenazas no han quedado en letra muerta. El Congreso extraordinario de la Confederación, reunido en Naltchik, capital de la República de Kabardino-Balkaria desde el 10 de diciembre, ha puesto en pie un estado mayor de coordinación de la ayuda a Chechenia. En una declaración, el Congreso ha amenazado con pedir a todos los pueblos del Norte del Cáucaso que retiren la firma de sus repúblicas del tratado de la Federación. Ruslan Auchev, presidente inguche, ha hecho saber que se estaba planteando ya esa decisión.

Las tropas rusas que avanzan desde el Este y el Oeste han sido detenidas por la población civil en Daghestán y en Inguchia; en la confusión, varias decenas de soldados han sido tomados como rehenes.

Los medios rusos, citando fuentes del servicio de contraespionaje según las cuales unidades de “mercenarios” compuestas por inguches y kabardos habrían llegado a Grozny para defender la ciudad; esto sería el primer fruto de la declaración de movilización lanzada por el CPC. Se habrían organizado también puntos de reclutamiento de voluntarios en Naltchik, Nazran (capital de Inguchia), Majatcjala (capital de Daguestán) y en otras ciudades del flanco norte del Cáucaso, así como en Sujumi (en Abjasia) y en las regiones limítrofes de Rusia.

La televisión rusa y la agencia de prensa oficial Itar-Tass informan de concentraciones de grupos “terroristas” en territorio checheno desde el 8 de diciembre. Según estas informaciones, que provienen del servicio de contraespionaje ruso, se trataría, entre otros, de miembros del partido turco de extrema derecha los Lobos Grises y de mujaidines afganos que habrían contado con la complicidad “de un país miembro de la Comunidad de Estados Independientes (CEI)”, (alusión a Azerbaidján, cuyas relaciones con Moscú están actualmente en su nivel más bajo). Pero ninguno de los periodistas extranjeros presentes en Grozny ha podido confirmar esta presencia.

Es cierto que un intento de apoderarse militarmente de una gran ciudad como Grozny (400.000 habitantes antes del bombardeo) se saldaría con una masacre de consecuencias desastrosas. La sangre vertida y el odio así creado darían nacimiento a una guerra de guerrillas, en la cual el Ejército ruso frustrado y poco motivado (como se ha mostrado ya en varios incidentes graves de falta de disciplina y negativa a obedecer órdenes) sufriría graves pérdidas.

Pese a la complacencia de las potencias occidentales, que han dado tácitamente su apoyo al Kremlin para que arregle a su manera los “problemas internos”, una guerra en el Cáucaso tendría consecuencias internacionales. Las primeras reacciones de Arabia Saudita, de Turquía y de otros miembros organizadores de la Conferencia Islámica, en la Cumbre de Casablanca de los días 13 a 15 de diciembre, muestran que el mundo musulmán no permanecerá indiferente ante el aplastamiento de un pequeño pueblo musulmán por una potencia ortodoxa: la experiencia de Afganistán y el frente unido de los países islámicos, contra la URSS, en aquella ocasión, permanecen en las memorias.

Las reacciones negativas se dejan oír en los países de la CEI, alérgicos históricamente al expansionismo ruso. Tokaiev, ministro de Asuntos Exteriores de

Kazajstán, ha cuestionado públicamente la orientación de Moscú. Su homólogo ruso Kozirev le ha respondido agresivamente: "Yo no aconsejaría a nadie que se mezclara en los asuntos internos de Rusia. Eso podría acarrear a esos países graves problemas".

Estos nervios son comprensibles: Kozirev es consciente de que, después de un baño de sangre en Chechenia, le sería difícil defender los intereses de las minorías rusas en los países postsoviéticos o continuar defendiendo con éxito los de la minoría serbia en Bosnia.

Pero la crisis chechena podría provocar también el fin de la democratización de Rusia. Como señala Izvestia el 14 de diciembre: "El presidente pierde el apoyo de la derecha y no gana nada ni en la izquierda, ni en el centro. El único apoyo que le queda es el aparato de Estado". Y el periódico añade que ideas como apostar por "una pequeña guerra victoriosa" sólo nacen "en el seno de regímenes agonizantes, que no tienen ya la capacidad o la voluntad de resolver las tareas más difíciles, es decir, las reformas democráticas".

LE MONDE DIPLOMATIQUE/ enero de 1994/ París

Traducción: Miguel Romero



En memoria que profetas aún
alcanza de estos pueblos, niños y niñas...

Vietnam

El bombardeo del FMI

Michel Chossudovsky

Las consecuencias sociales de la reforma macroeconómica aplicada en Vietnam desde mediados de los años 80 han sido devastadoras. Se han cerrado clínicas y hospitales, ha aparecido el hambre, afectando a más de un cuarto de la población del país. Tres cuartos de millón de niños han quedado excluidos del sistema escolar. Han resurgido las enfermedades infecciosas, lo que ha triplicado el número de muertos por malaria durante los cuatro primeros años de la reforma. Cuatro mil (de un total de 12.000) empresas públicas han quebrado, más de un millón de trabajadores y unos 200.000 empleados públicos, incluyendo diez mil enseñantes y personal de la salud, han perdido sus puestos de trabajo.

El acuerdo firmado en París en 1993, cuyo objetivo es forzar al Vietnam a devolver los gastos de guerra a Washington, obliga a Hanoi a reconocer la deuda multilateral del difunto régimen de Saigón del general Thieu, como condición previa a los créditos franceses y al alzamiento del embargo americano.

Los logros de las luchas anteriores y las aspiraciones de la población entera son puestos en cuestión y borrados: sin bombas, sin napalm, sin los tóxicos químicos. Una nueva fase de destrucción económica y social (más que física) se está llevando a cabo.

Los llamados "instrumentos de la política macroeconómica" (bajo los consejos de las instituciones de Bretton Woods) constituyen la revancha de la guerra del Vietnam y un útil formalmente no violento, de recolonización y de empobrecimiento que afecta a los medios de existencia de millones de personas.

La devastación dejada por la guerra de Vietnam creó, desde el comienzo, una atmósfera de impotencia y de inercia política. La guerra civil que estalló en Camboya, enseguida alimentada por el apoyo oficioso de Washington a las fuerzas de Pol Pot tras 1979, y la invasión de China de la frontera Norte retrasaron también la reconstrucción de la economía civil.

Con la reunificación fueron reunidos dos sistemas socioeconómicos divergentes: las reformas en el Sur fueron aplicadas siguiendo estrictamente la línea dictada por el Comité Central, preocupándose poco de la realidad de las fuerzas sociales: el pequeño comercio de Ciudad Ho Chi Minh fue suprimido mientras se ponía en marcha un proceso activo de colectivización en el delta del Mekong, encontrando una fuerte oposición del mediano campesino. La represión política no afectó solo a los sectores de la sociedad que tenían lazos con el régimen de Saigón, sino también a muchos de los que se habían opuesto al general Thieu. Mientras tanto, el entorno internacional había cambiado: las transformaciones del sistema global del mercado y el hundimiento del bloque soviético, que era el principal socio comercial de Vietnam, llevaron a una situación de desorganización de la economía nacional así como a un vacío político en el proceso de formulación de un proyecto nacional. Se desarrollaron profundas divisiones y cambios en el interior del Partido Comunista (PCV)

desde comienzos de los años 80. Hoy, tras más de 50 años de lucha contra la ocupación extranjera, la historia de la guerra del Vietnam está siendo prudentemente reescrita: el neoliberalismo constituye (con el apoyo técnico de las instituciones de Bretton Woods) la doctrina oficial del PCV. Burócratas e intelectuales son llamados a apoyar sin reservas el nuevo dogma, en nombre del socialismo.

Reescribir la historia

Con la adopción en 1986 de la *Doi moi* ("Renovación"), las referencias al papel brutal de América en la guerra son consideradas cada vez más inoportunas. La dirección del PCV ha subrayado recientemente el "papel histórico" de los EE UU en la liberación del Vietnam de las fuerzas de ocupación japonesas en 1945. Los símbolos del período americano vuelven poco a poco a las calles de Saigón.

En el Museo de los Crímenes de Guerra se puede comprar en el almacén de recuerdos una maqueta de avión de guerra ligero utilizado por la *US Air Force* en los bombardeos, con un logotipo de Coca Cola en su fuselaje, así como un vasto catálogo de manuales sobre la inversión extranjera y la reforma macroeconómica. Ni un solo texto sobre la historia de la guerra está a la vista.

La imagen estilizada descrita en muchos medios de comunicación occidentales es que el mecanismo de mercado "libre" ha catapultado al Vietnam al estatuto de futuro "tigre asiático". Nada puede estar tan alejado de la verdad: las reformas económicas lanzadas en 1986 bajo la dirección de las instituciones de Bretton Woods han iniciado en el período brutal de la posguerra una nueva fase histórica de devastación social y económica.

La primera etapa en 1984-1985 (antes del lanzamiento formal de la *Doi moi* por el 6º congreso del PCV) consistió en aplastar la moneda vietnamita. La inflación y la dolarización de los precios domésticos fueron aplicadas mediante devaluaciones repetidas que recordaban el hundimiento espectacular de la piastra en 1973 bajo el régimen de Saigón, al año siguiente del Acuerdo de París y la "retirada" formal de las tropas de combate americanas. Hoy el Vietnam está una vez más inundado de billetes verdes, que han reemplazado en gran medida al dong vietnamita. Mientras el FMI vigila de cerca las emisiones monetarias del Banco Central del Vietnam, la Reserva Federal americana ha tomado de facto la responsabilidad de emitir la moneda (es decir, una operación de crédito masiva) para el antiguo enemigo de América.

La ilusión de "progreso económico" y de prosperidad descrita en la prensa occidental está basada en el crecimiento rápido de pequeñas, pero muy visibles, *bolsas* de consumo de estilo occidental, muy concentradas en Saigón. Las duras realidades sociales y económicas son diferentes: los precios de la alimentación, que aumentan muy rápidamente, las hambrunas a nivel local, los despidos de trabajadores de la ciudad y funcionarios, la destrucción de los programas sociales del Vietnam.

La devolución de las "malas deudas"

El Vietnam no ha recibido nunca reparaciones de guerra y, sin embargo, Hanoi ha sido obligada (como condición para la *normalización* de las relaciones económicas y el alzamiento del embargo americano en febrero de 1974) a pagar las deudas

multilaterales contratadas por el régimen de Saigón sostenido por los americanos. En la conferencia que se desarrolló en París en 1993, un total de 1.860 millones de dólares en préstamos y ayudas fue generosamente concedido en apoyo a las reformas de mercado en Vietnam; pero inmediatamente después de la conferencia tuvo lugar otra reunión, esta vez a puerta cerrada, con el Club de París de los acreedores oficiales. En el orden del día: el reescalonomiento de las "malas deudas" contratadas por el régimen de Saigón antes de 1975. ¿Qué da paso a qué? El FMI dió su aprobación a las reformas económicas del Vietnam antes de la conferencia de París. Sin embargo han sido los resultados de las reuniones del Club de París los decisivos para proporcionar el la *luz verde* de Washington". Sólo después del alzamiento oficial del embargo fue autorizado el desbloqueo de los créditos multilaterales y bilaterales.

La devolución de los atrasos de 140 millones de dólares (debidos por Saigón) al FMI fue también exigido para la obtención de los créditos. A estos efectos, Japón y Francia (los antiguos dueños coloniales del Vietnam en la época de Vichy) han formado un autodenominado Comité de los Amigos de Vietnam para prestar a Hanoi el dinero necesario para la devolución al FMI.

Reconociendo plenamente la legitimidad de estas deudas, Hanoi había de hecho aceptado devolver préstamos que habían sido utilizados para sostener el esfuerzo de guerra americano. Irónicamente, estas negociaciones se desarrollaron con la participación de un antiguo Ministro de Finanzas del Gobierno de Vietnam del Sur, es decir, del Gobierno militar del general Duong Van Minh que había sido puesto en pie por la misión militar americana en 1963 tras el asesinato del presidente Diem y de su joven hermano. El doctor Nguyen Xian Oanh (un eminente economista que había sido también un antiguo miembro del FMI) ocupa ahora la posición de consejero económico del primer ministro Vo Van Kiet.

La destrucción de la economía

A través del mecanismo aparentemente inofensivo del mercado libre, las reformas han contribuido a una desmovilización masiva de la capacidad de producción; más de cinco mil de las 12.300 empresas del Estado han sido cerradas o llevadas a la quiebra. Este proceso ha sido agravado más aún por el hundimiento del comercio con los países del bloque socialista. En 1990 fueron adoptadas unas leyes sobre la liquidación de las empresas del Estado, llevando a una reducción suplementaria de la base industrial a través de la reestructuración de las empresas restantes... Más de un millón de trabajadores y unos 136.000 empleados del sector público (la mayor parte de los mismos trabajadores de la salud y profesores) habían sido despedidos a finales de 1992. El objetivo del Gobierno, según el decreto nº 111, es despedir aún a cien mil obreros de aquí a finales de 1994, reduciendo en un 20% el tamaño del sector público. Además, con la retirada de las tropas vietnamitas de Camboya, alrededor de quinientos mil soldados fueron desmovilizados y doscientos cincuenta mil trabajadores han vuelto de Europa del Este y el Medio Oriente, con pocas perspectivas de empleo.

Según los datos del Banco Mundial, el crecimiento del empleo en el sector privado ha sido muy insuficiente en relación al número de quienes se incorporan por primera vez

mercado de trabajo. Con precios que suben en flecha, los sueldos reales de los que tienen aún un empleo han caído de forma catastrófica: incapaces de sobrevivir con salarios gubernamentales de 15 dólares por mes, una serie de "actividades de supervivencia" incluido el mercado negro, se han desarrollado entre los empleados del Estado, llevando a una tasa de absentismo elevada y a la parálisis de hecho de todo el aparato administrativo. Con la excepción de las *joint-ventures*, empresas mixtas, en las que el salario mínimo recomendado ha sido fijado en 30-35 dólares por mes, no hay salario mínimo ni directivas sobre el ajuste o indexación de los salarios. «La política de mercado libre del Partido es que el mercado de trabajo debe también ser libre».

Mientras muchas empresas del Estado eran "no rentables" y "no competitivas" según los criterios occidentales, su liquidación ha sido orquestada con una manipulación deliberada de las fuerzas del mercado: la reestructuración del sistema bancario del estado y de las instituciones financieras (incluida la eliminación de las cooperativas de crédito a nivel comunal) han conducido a la "congelación" de todo crédito a medio y largo plazo para los productores domésticos. Solo el crédito a corto plazo puede ser obtenido y a una tasa de interés del 35% (1994). Además según los términos del acuerdo con el FMI, el Estado no tiene derecho a apoyar financieramente la economía nacionalizada, ni el sector privado.

La destrucción de la economía del Estado ha sido provocada también por un sistema de impuestos muy discriminatorio: mientras que las empresas del Estado continúan pagando, sin subsidios ni créditos del Estado, el impuesto sobre los beneficios del 40-50% heredado del sistema de planificación, el inversor extranjero (incluidas todas las empresas mixtas) se beneficia de generosas exenciones. Además, el impuesto sobre los beneficios no es ya deducido de forma regular en el sector privado.

El objetivo secreto de las reformas es desestabilizar la base industrial del Vietnam: la industria pesada, el petróleo y el gas, las minas, el cemento y la producción de acero deben ser organizadas y puestas bajo la batuta del capital extranjero, con los conglomerados japoneses jugando un papel decisivo y dominante. Las empresas estatales más rentables serán transferidas a empresas mixtas. La dirección no se preocupa por reforzar y preservar su base industrial, o por desarrollar una economía capitalista controlada por "nacionales".

El punto de vista dominante en la "comunidad de donantes" es que una reducción de la economía del Estado es necesaria para "dejar sitio" al desarrollo espontáneo de un sector privado vietnamita. Se supone que la inversión del Estado en este contexto "estorba" a la formación del capital privado. Sin embargo es evidente que las reformas, no sólo desmovilizan la economía estatal sino que impiden también una transición hacia el capitalismo de mercado.

Además, no hay por el momento una clase empresarial desarrollada exterior a la economía del estado. La relativa debilidad de los grupos de negocios en Vietnam, combinada con la congelación del crédito y la casi ausencia de apoyo del Estado tienden a ahogar el desarrollo de un sector privado doméstico de la economía. Mientras que se ofrecen incentivos simbólicos a los *viet kieu* (vietnamitas de ultramar), una gran parte de la "diáspora vietnamita", incluidos los refugiados de la guerra de Vietnam y los *boat people*, posee poco en términos de recursos financieros o de ahorro. Con algunas excepciones, sus activos están muy concentrados en el comercio y los servicios.

Un ejemplo llamativo de las reformas concierne a la suerte de la industria siderúrgica vietnamita. Alrededor de ocho millones de toneladas de bombas y una enorme cantidad de material militar abandonado han proporcionado a la industria pesada del Vietnam un aprovisionamiento importante en materias primas. Sin embargo, la única contribución tangible de América a la reconstrucción está a punto de ser puesta en cuestión: con la política de *puertas abiertas*, grandes cantidades de chatarra son libremente *reexportadas* (a precios inferiores a los precios mundiales). Mientras tanto, las cinco principales acerías del Vietnam funcionan a bajo ritmo, por falta de materia prima (por no hablar de la prohibición hecha a las empresas estatales de importar chatarra), y un conglomerado japonés que comprende a Kyoei, Mitsui y Itochu ha establecido una acería moderna con el sistema de empresa mixta, que reimportará la chatarra al Vietnam (al precio del mercado mundial).

La exclusión de los productores domésticos

Por medio de la manipulación deliberada de las fuerzas del mercado, los productores domésticos son literalmente excluidos de su propio mercado, incluso en terrenos en los que se considera que tienen una cierta ventaja. Con el alzamiento de las barreras aduaneras, una gran parte de la industria ligera es desplazada por un influjo masivo de mercancías importadas. Desde 1986, los magros recursos del comercio exterior del país son dedicados casi exclusivamente a la importación de mercancías de consumo, creando un vacío de capital disponible para el equipamiento de la industria doméstica. Las reformas permiten a las empresas estatales relacionadas con la exportación utilizar libremente sus ganancias en divisas para importar mercancías de consumo.

Se establece así una red entre los directores de las empresas estatales que se dedican a la importación-exportación, los burócratas locales y los comerciantes privados. Las facturas en divisas son derrochadas y se desvían grandes cantidades de dinero. Con la reforma del mercado, muchas empresas estatales escapan al control del estado y son implicadas en diversas actividades ilícitas. Con el levantamiento del apoyo del presupuesto del Estado y la congelación del crédito, son abandonadas las actividades productivas.

En los nuevos sectores de la industria ligera y de la fabricación fomentados por la política de *puertas abiertas*, el mercado interno está fuera del alcance de las compañías vietnamitas. Fabricantes de vestidos que emplean mano de obra barata, implicados en empresas mixtas o acuerdos de subcontratación con capital extranjero exportan la totalidad de su producción. Por el contrario, el mercado vietnamita se aprovisiona con vestidos de ocasión y restos de fabricación provenientes de Hong Kong, lo que conlleva el paro de los sastres y de los pequeños productores locales, (el precio de los vestidos de ocasión comprados en los países desarrollados es de 80 dólares la tonelada).

La asfixia del comercio

Las reformas han alimentado la "balkanización económica" de las regiones, que son integradas de forma separada en el comercio mundial.

Los canales del comercio interior son también minados por las alzas periódicas

de los precios del carburante y por las tasas (impuestas por el Banco Mundial) que tienen el efecto de un "derecho de peaje interno" sobre los movimientos de mercancías del mercado doméstico. Los precios excesivamente elevados de la gasolina y del diesel, así como los numerosos peajes repercuten en el precio de las mercancías locales, dando ventaja a las mercancías importadas.

Además, con la congelación de las transferencias de presupuesto del gobierno central hacia las autoridades provinciales y locales recomendado por el Banco Mundial, estas autoridades son cada vez más *libres* para establecer sus propias inversiones y relaciones comerciales con compañías extranjeras, en detrimento del comercio interior. Las provincias negocian numerosos acuerdos comerciales, incluso concesiones de terrenos a los inversores extranjeros, lo que les permite, en un contexto de desreglamentación, saquear los recursos forestales. Estos acuerdos constituyen a menudo el único medio que tienen los gobiernos locales y provinciales de cubrir sus gastos, incluidos los salarios de los funcionarios, a causa de la crisis del presupuesto del Estado.

En un contexto en el que los salarios de los empleados del servicio público son muy bajos, la cooperación y los lazos con las empresas mixtas constituyen un medio de obtener *suplementos* de salario bajo la forma de diferentes indemnizaciones. Estas últimas, pagadas en divisas, permiten a los inversores extranjeros asegurar la colaboración de cuadros profesionales así como de funcionarios y burócratas locales. El Estado está en bancarrota y es incapaz (según las cláusulas de sus acuerdos con sus acreedores) de remunerar a sus funcionarios. Las empresas extranjeras y las organizaciones asistenciales, no solo se apropian de los recursos humanos de las unidades de investigación y de los servicios gubernamentales, sino que se convierten en la principal fuente de rentas de los altos y medios funcionarios implicados en la gestión de la inversión extranjera y el comercio exterior.

Las reformas colocan a las finanzas del estado en mala situación. El Banco Central no puede aumentar la masa monetaria o emitir moneda más que con el acuerdo del FMI. No está permitido tampoco financiar o conceder créditos a las empresas del estado, que se encuentran abocadas a la bancarrota. Esta bancarrota conlleva a su vez una caída de las rentas de los impuestos, lo que repercute sobre las finanzas del estado.

El hundimiento del capital del Estado

Las reformas han inducido un hundimiento significativo de la inversión pública. Desde 1985, la parte de gastos del Gobierno en el PIB ha caído el 63%, del 8,2% al 3,1% del PIB mientras que en la agricultura la caída era aún más importante (el 90%), del 1% al 0,1%. En la industria y la construcción, los gastos han pasado del 2,7% al 0,5% del PIB.

Han sido establecidas nuevas reglas sobre los gastos de inversión sobre la base de los acuerdos de préstamos negociados con las instituciones de Bretton Woods. Se han señalado techos precisos a todos los gastos, con despido de los empleados del sector público, congelación de las subvenciones a la educación y la salud, etc. El objetivo es reducir el déficit del presupuesto. En otras palabras, el Estado no tiene ya derecho a movilizar sus propios recursos para la construcción de la infraestructura pública, carreteras, hospitales, etc. No hay ni que decir que el proceso de financiación crea deudas que refuerzan el dominio de los acreedores sobre la política de reforma económica.

Esta supervisión no se aplica sólo a la inversión pública, afecta a la naturaleza de los gastos públicos y fija las prioridades de inversión. Exige también la liberación y la privatización de la mayor parte de las empresas estatales ligadas a la infraestructura y a los sectores estratégicos de la economía.

Reintegración en el imperio japonés

La tendencia es a una reintegración del Vietnam en la esfera de influencia japonesa, una situación que recuerda la Segunda Guerra Mundial, cuando el Vietnam formaba parte de la "Esfera de coprosperidad del Este asiático" del Japón. Esta posición dominante del capital japonés se explica por el control de más del 80% de los préstamos destinados a los proyectos de inversión y de infraestructura. Al pasar estos préstamos por el OECF del Japón así como por el Banco de Desarrollo asiático (ADB) apoyan la expansión de las grandes compañías comerciales japonesas y transnacionales.

Con el levantamiento del embargo en febrero de 1994, el capital americano se precipita a restaurar su posición en una zona de altas ganancias en términos de inversión y de comercio dominada por el Japón y en una menor medida por la Unión Europea. Los japoneses no solo van por delante en el terreno de las inversiones-clave, sino que controlan también la mayor parte del crédito a largo plazo del Vietnam. Son previsibles confrontaciones entre Washington y Tokio si las compañías americanas transnacionales intentan reencontrar la posición que tenían en Vietnam del Sur antes de 1975. Los coreanos y los chinos de Hong-Kong han entrado también en el juego. Pero existe una clara demarcación: se concentran en la fabricación y la exportación, mientras que los grandes proyectos de explotación de los recursos naturales, como el gas o el petróleo, están en manos de conglomerados japoneses o europeos.

Hay que señalar que el Japón controla también una gran parte de los préstamos utilizados para financiar las importaciones de consumo. Este frenesí de consumo de productos de origen japonés esta muy apoyado por el dinero prestado inyectado bajo la forma de centenares de millones de dólares de los llamados "préstamos rápidos" ofrecidos por el Japón y los bancos multilaterales, incluido el Banco de Desarrollo Asiático, el Banco Mundial y el FMI.

Con la excepción de un pequeño número de grandes empresas del Estado (y las implicadas en la importación), las reformas contribuyen a desmovilizar a sectores enteros de la economía nacional: el único medio de supervivencia para una empresa nacional es entrar en los negocios de importación o establecer una empresa mixta en la que el socio extranjero tenga acceso al crédito (en divisas) y al control de la tecnología, los precios y el reparto de las ganancias.

La crisis económica no ha significado, sin embargo, una caída paralela de la tasa de crecimiento oficial (PIB). Esta última ha aumentado en gran parte a causa de la reorientación rápida de la economía en dirección al comercio extranjero (desarrollo del petróleo y del gas, de los recursos naturales, fabricación con mano de obra barata). A pesar de la ola de bancarrotas y la reducción del mercado interior, ha habido un crecimiento significativo en las nuevas empresas mixtas orientadas hacia la exportación. A su vez, el flujo *artificial* de mercancías importadas ha conducido a un aumento del sector comercial y de su participación en el PIB.

El hambre

La adopción de un "sistema de contrato agrícola" más flexible en las primeras reformas de 1981 para apoyar la producción doméstica había sido bien acogido por la población rural. Pero la segunda ola de reformas adoptadas a partir de 1986 en el sector de la agricultura ha contribuido al empobrecimiento de amplios sectores de esa población. Bajo la égida del Banco Mundial y de la FAO, las autoridades han derogado la política de "autosuficiencia alimenticia a nivel local" que estaba destinada a evitar el desarrollo de penurias regionales. En las regiones de montaña del centro de Vietnam, los agricultores han sido animados a especializarse "según las capacidades regionales", es decir a abandonar la agricultura de autosubsistencia y a reconvertirse a las producciones de "alto rendimiento" para la exportación. Las recolecciones excedentarias de café, de algodón y otras, combinadas a la caída de los precios mundiales y al precio elevado de los productos necesarios para la agricultura, importados, han provocado hambres localizadas. Irónicamente, el paso a las producciones agrícolas para la exportación ha tenido también como consecuencia un claro declive de las ganancias del comercio exterior, porque grandes cantidades de productos agrícolas han sido vendidos por empresas comerciales del estado con pérdidas sustanciales.

En otras palabras, las compañías de exportación del Estado, aunque presenten cuentas positivas, generan de hecho deudas. En muchas zonas con déficit alimenticio, las cosechas industriales de los campesinos, que han abandonado las recolecciones de subsistencia, quedan invendidas debido al excedente que caracteriza al mercado mundial. El resultado es el hambre, pues los campesinos no pueden ni vender sus cosechas industriales ni producir alimentos para su propio consumo. ... Se encuentra una situación similar en las empresas del estado que se ocupan del comercio del arroz. Prefieren exportar con pérdidas más que vender en el mercado interior. Con la desreglamentación completa del mercado del grano y las ventas en manos de los comerciantes privados, los precios domésticos han subido en flecha, sobre todo en las zonas de déficit alimenticio. Mientras que el arroz es exportado al precio del mercado mundial, se desarrollan penurias importantes en regiones en las que la producción de subsistencia ha sido abandonada en beneficio de la especialización. En 1994 por ejemplo, las autoridades han admitido la existencia de una hambruna en la provincia de Lai Cai, en la frontera con China, que afectaba a más de 50.000 personas.

El hambre no está limitada a las zonas de penuria, golpea a todas las regiones, incluso las zonas urbanas. En las ciudades, la devaluación del dong así como el fin de las subvenciones y del control de los precios han conducido a un alza muy importante del arroz y de otros productos de base.

El agroalimentario internacional

La política general cerealista del Gobierno corresponde en gran medida a los intereses del *agro-bussines* internacional: abandono del arroz por diferentes cultivos (limones, maíz híbrido, nuez de anacardo), incluso en regiones muy favorables al cultivo del arroz, como el delta del Mekong. En la provincia de Dong Nai, en el Sur, por ejemplo, se anima a los campesinos a abandonar el arroz, se compran semillas de maíz híbrido a una filial de Cargill (un congl-

mercado cerealista internacional) con préstamos a corto plazo financiados por el Banco del estado de la agricultura. El maíz producido es luego *comprado* por Prononco, una empresa mixta agroalimenticia francesa, que exporta y vende alimentación para animales en el mercado interno, para producir carne para Hong Kong y Taiwan.

En 1987-89 y en 1992 ha tenido lugar un aumento impresionante de la producción de arroz, lo que ha permitido al Vietnam pasar de una situación de importador a la de exportador de arroz. Esta tendencia se ha esbozado sin aumento de las superficies consagradas a la producción de arroz. Era el resultado de la utilización de nuevas variedades y del aumento de la utilización de abonos y pesticidas que conllevan costos mucho más elevados para el pequeño campesino. El Gobierno ha dejado de proporcionar los productos, las empresas del Estado que producían pesticidas han cerrado. Se importa una cantidad cada vez más importante de productos para la agricultura: "Nuestra productividad ha aumentado pero nuestra renta no ha aumentado. Debemos pagar por nuevas especies de granos y pesticidas, el abono y los transportes han aumentado. Si los costes continúan aumentando, no podremos seguir. El empleo en el exterior de la granja es esencial, incluso el artesanado y el trabajo en la ciudad. La agricultura no nos da suficiente".

Sin embargo, la expansión de la producción de arroz ha alcanzado un límite: la retirada del apoyo del estado en materia de infraestructuras de irrigación, de conservación del agua, y de mantenimiento desde 1987 afectará a las futuras producciones. La irrigación a gran escala y el drenaje han sido descuidados: el Banco Mundial recomienda cubrir los costes y comercializar los recursos en agua, a la vez que reconoce que los agricultores de fuera del Delta del Mekong son demasiado pobres para soportar el aumento de los gastos de irrigación.

El aporte en semillas, abonos, crédito, servicios veterinarios, máquinas, etc. era una función principalmente gubernamental hasta final de los años 80. Este sistema, aunque continúa en vigor sobre el papel, no existe ya debido a la vuelta a la explotación familiar, la falta de créditos y la caída de los salarios reales de los funcionarios debida a la inflación. Estos servicios concernientes a una producción comercializable han sido semiprivatizados con algún éxito, y los demás ya casi no funcionan. Un gran número de empleados sobreviven gracias al Mercado negro y ocho mil diplomados de las escuelas agro-técnicas están en el paro.

La concentración de las tierras

La tendencia va en el sentido de una crisis importante de la producción, una polarización social en aumento en el campo y una mayor concentración de la propiedad de la tierra. Sectores importantes de la población en las regiones del río Rojo y del Mekong se ven obligadas a partir; se han producido hambrunas en regiones de producción excedentaria de arroz. La nueva ley votada por la Asamblea Nacional en octubre de 1993 ha sido elaborada con la ayuda de los servicios jurídicos del Banco Mundial. Se organizaron seminarios del Banco Mundial sobre las implicaciones de la nueva ley agraria:

"Los expertos extranjeros piensan que la Ley agraria conviene a nuestras

condiciones particulares: si los campesinos carecen de capital o de recursos, pueden transferir la tierra o pueden ir a la ciudad. La falta de tierra no es la causa de la pobreza, los pobres carecen de instrucción, de experiencia y tienen demasiados niños”.

Según la ley, las tierras agrícolas pueden ser libremente transferidas (es decir vendidas) o hipotecadas (oficialmente solamente por el sistema bancario del estado, pero en realidad por prestamistas privados también). La tierra puede ser “transferida” o vendida si los préstamos no son devueltos.

La consecuencia, en particular en el sur, es la reaparición de la usura y de la aparcería, que retrotraen a los campesinos a las épocas de las luchas por la tierra y el crédito, a finales del período colonial francés. En el Sur, la concentración de las tierras ya está avanzada, marcada por el desarrollo de medias y grandes explotaciones (incluidas empresas mixtas de capital extranjero). Las granjas del Estado son sistemáticamente transformadas en empresas mixtas.

Los campesinos sin tierra, que constituyen una parte cada vez más importante de la población rural, están obligados a ir a buscar un empleo en las ciudades o trabajos temporales para los ricos. Los salarios en la región del Delta del Río Rojo son del orden de 50 céntimos al día. Aunque la explotación de los pequeños campesinos no está más que en sus comienzos en el norte del Vietnam, la nueva Ley Agraria abre el camino a la apropiación de vastas zonas agrícolas por comerciantes urbanos y prestamistas.

Es necesario mencionar que las políticas agrícolas del difunto régimen de Saigón del general Thieu vuelven a la superficie. En el sur, los títulos de propiedad de la tierra concedidos por los programas de “ayuda” americanos en 1973, como medio de pacificación de las zonas rurales, son plenamente reconocidos por las autoridades. Por el contrario, miles de campesinos que habían abandonado sus pueblos para combatir al lado de las fuerzas de liberación están hoy sin derecho legal a la tierra. Según el Ministerio de Agricultura, el programa americano es un “modelo útil”: “Nuestra política actual es emular el programa americano de distribución de las tierras de ese período, aunque nuestros recursos financieros sean insuficientes”.

La desreglamentación del mercado de los cereales no sólo ha provocado hambrunas, sino que también ha tenido una incidencia importante sobre la malnutrición infantil. A pesar del aumento de la “disponibilidad” de los productos de base que sugieren los datos de la FAO, un estudio sobre la nutrición llevado a cabo en 1987-89 indica un deterioro súbito de la alimentación de los niños y de los adultos. La absorción media de calorías por persona y por día era de 1.861 calorías con 25% de la población por debajo de esa cifra, lo que es una situación de malnutrición extrema. En el 9% de los hogares, la absorción era de menos de 1.500 calorías para los adultos. La media para los niños de menos de seis años era de 827 calorías.

La destrucción de la educación

Los efectos más dramáticos de las reformas se han hecho sentir en los terrenos de la educación y de la salud. La educación y la alfabetización para todos era un objetivo clave de la lucha contra la ocupación colonial francesa. Desde la derrota

francesa en Dien - Bien - Phu en 1954 hasta 1972, las inscripciones en las escuelas primarias secundarias en Vietnam del Norte habían sido multiplicadas por siete. Tras la reunificación en 1975, se desarrolló en el sur una campaña de alfabetización. Según las cifras de la UNESCO, las tasas de alfabetización y de escolarización eran de las más elevadas del Sureste asiático.

Las reformas, consciente y deliberadamente, han intentado destruir el sistema educativo haciendo recortes en el presupuesto de educación, disminuyendo el salario de los enseñantes y *comercializando* la educación secundaria y superior, introduciendo gastos de escolaridad. La tendencia va en el sentido de la transformación de la educación en mercancía. En la jerga oficial de las agencias de las Naciones Unidas, esto exige que "los consumidores de los servicios paguen sumas más elevadas, que las instituciones se autofinancien, y, utilizando incentivos, privatizar la educación y la formación allí donde sea posible", poniendo en cuestión todas las conquistas, incluida la lucha contra el analfabetismo, las reformas han producido una caída sin precedentes en la escolarización, con una tasa elevada de salida del sistema escolar en los últimos años de la primaria. La obligación de pagar gastos de escolaridad está ahora inscrita en la Constitución, que ha sido cuidadosamente reescrita en 1992. Según los datos oficiales, la proporción de alumnos de la primaria que entra en el primer ciclo de 4 años de la educación secundaria ha caído de un 92% en 1986-87 (antes de la introducción de los gastos de escolaridad) al 72% en 1989-1990, una pérdida de más de quinientos mil alumnos. De la misma forma, 231.000 alumnos de un total de 922.000 han abandonado el segundo ciclo secundario. En otras palabras, un total de cerca de tres cuartos de millón de alumnos han sido expulsados del sistema escolar secundario en tres años (a pesar de un aumento de más del 7% de la población en edad escolar).

La disminución de los créditos provocará una erosión rápida de la educación primaria en los próximos años. El Estado concede (1994) una media de 3 a 4 dólares por niño y por año a nivel de la primaria. En la región del delta del Río Rojo, el coste para los padres de los libros y del material escolar (antes financiados por el gobierno) es del orden de 100 kilos de arroz por niño y por año, una fracción significativa del consumo total de una familia.

Con un sistema escolar "reducido", se deberá considerar más "la calidad que la cantidad", lo que necesita, según los "donantes", el despido de los profesores que sobran. Todos los escalones del sistema educativo se ven afectados: las guarderías del estado ya no son financiadas. Deberán ser gestionadas como empresas comerciales.

La "rentabilización" ha sido impuesta en las universidades y todos los institutos de la educación superior. Los institutos de investigación aplicada deben financiarse comercializando los productos de sus investigaciones. El estado no cubre más que el 25% de los salarios y de los gastos de los principales institutos de investigación. Se les concede, sin embargo, una tasa de crédito preferencial (1,8% por mes en lugar del 2,3%).

En este contexto, el control financiero y la supervisión de la mayor parte de los institutos de investigación y de formación están en manos de las agencias de los "donantes" extranjeros que financian selectivamente los contratos de investi-

gación a la vez que dictan también la orientación de las investigaciones y el desarrollo de los estudios universitarios.

Hundimiento del sistema de salud

En el sector de la salud, el efecto más inmediato de las reformas ha sido la ruina de los hospitales de distrito y de los centros de salud a nivel comunal. Hasta 1989, unas unidades de salud aportaban consultas médicas y los medicamentos esenciales, gratuitamente, a la población. La desaparición de los centros de atención está globalmente más avanzada en el sur, donde la infraestructura de la salud no había sido desarrollada más que tras la reunificación, en 1975. Con las reformas, se ha introducido un sistema de cuidados que hay que pagar. Se han aplicado los principios de la "cobertura de costes" y el mercado libre de la venta de los medicamentos. El consumo de medicamentos de base (a través del sistema de distribución público) ha decrecido en un 89%, llevando a la industria farmacéutica del Vietnam a la bancarrota. En 1989, la producción doméstica de productos farmacéuticos había disminuído en un 98,5% en relación a 1980, y un gran número de empresas había cerrado. Con la desreglamentación completa de la industria farmacéutica, incluida la liberación de los precios de los medicamentos, los medicamentos importados, (ahora vendidos exclusivamente en el mercado "libre" a precios muy elevados) han reemplazado en gran medida a los productos locales. Un mercado comercial considerablemente reducido, pero altamente rentable se ha puesto en pie para las multinacionales farmacéuticas. El impacto sobre la salud de la población ha sido dramático.

El gobierno, bajo presión de la "comunidad de los donantes", también ha dejado de alimentar el presupuesto de mantenimiento y del equipo médico, lo que produce una parálisis casi completa de todo el sistema de salud pública. Los salarios reales y las condiciones de trabajo del personal médico se han deteriorado mucho: el salario mensual de un médico en un hospital de distrito no es más que de 15 dólares. Con el hundimiento de los salarios del sector público y la emergencia de un pequeño sector privado, decenas de miles de médicos y de trabajadores de la salud han abandonado, de hecho, el sector público. Un estudio realizado en 1991 confirma que la mayor parte de los centros de salud comunales son inoperantes con un personal de cinco trabajadores como media, el número de pacientes ha caído a menos de 6 por día. Desde las reformas, hubo también una reducción considerable de las admisiones en las escuelas de medicina del país, que sufren de una disminución masiva de su presupuesto de funcionamiento.

El resurgimiento de enfermedades infecciosas

Aunque los datos disponibles sean por el momento incompletos, el resurgimiento de un cierto número de enfermedades infecciosas, como el paludismo, la tuberculosis y la diarrea es reconocido por el Ministerio de la salud y los "donantes". Una encuesta ha demostrado que el número de muertes debidas al paludismo se había triplicado durante los cuatro primeros años de las reformas, paralelamente a la desintegración del sistema de salud y a la subida de los precios

de los medicamentos antipaludismo. Lo que es llamativo es que el número de muertes debidas al paludismo ha aumentado más rápidamente que el número de casos declarados, lo que sugiere que la ruina del sistema de salud curativo ha jugado un papel decisivo en el aumento de la mortalidad. Estas tendencias están claramente confirmadas por los datos a nivel comunal: "El estado de salud era antes bastante mejor, había un control anual de la tuberculosis, ahora, no hay ya medicinas para tratar el paludismo, los campesinos no tienen dinero para ir al hospital de distrito, no pueden pagar los gastos".

El Banco Mundial admite cándidamente la desintegración del sistema de salud (las causas "macroeconómicas" subyacentes, sin embargo, no son mencionadas): "A pesar de sus impresionantes logros pasados, el sistema de salud vietnamita está actualmente en vías de desaparición... hay una penuria severa de medicamentos, materiales médicos y equipamientos y las clínicas del gobierno están muy subutilizadas. La falta de créditos en el sector de la salud es tan agudo que hay que preguntarse cómo van a poder continuar funcionando estos establecimientos en el futuro".

Mientras que el Banco Mundial reconoce que los programas de control de las enfermedades contagiosas "han estado en el pasado entre las intervenciones más exitosas en el terreno de la salud en Vietnam», las soluciones propuestas consisten en «comercializar» la salud pública y despedir masivamente el personal sanitario. Los salarios de los trabajadores de la salud deberán ser aumentados en el marco del mismo presupuesto: «un aumento de los salarios producirá casi obligatoriamente una reducción masiva de los efectivos".

Las reformas dismantelan brutalmente los sectores sociales, aniquilando los esfuerzos y las luchas llevadas a cabo durante 40 años por el pueblo vietnamita, acabando de un plumazo con todos los progresos conseguidos. Hay un esquema coherente: el deterioro de la salud y de la nutrición es similar a lo que ocurre con la escolarización. Tras una guerra brutal y criminal, la comunidad mundial debe tomar conciencia del impacto mortal de la política macroeconómica, aplicada a un antiguo enemigo.

Traducción: Alberto Nadal

Aun cuando, ^{has por la primera vez} ~~hemos~~ a Ocher
 ¿y que poder evitarlo?

Lo rojo del agua

pareciera un vuelo

indefinible de
 ¡meritarse!
 hasta cubrir

el Suelo.

¿y que poder
 evitarlo?

~~Adorno & Schlegel~~
 Ulanov.

~~Los Pinos de la~~
~~Basilea~~

~~Luxemburg.~~
~~Roma~~

~~Roma~~

~~Poriferos Estimosa~~

Nord. Mont.

~~Red. Lila~~

Arden. Nuv.

CHISES.



Francia

La reducción del tiempo de trabajo y la compensación salarial

Alain Lipietz / Maxime Durand

[Hace unos meses ha tenido lugar un debate en revistas francesas de la izquierda alternativa entre dos reconocidos portavoces de la economía crítica: Alain Lipietz, de la Comisión Económica de los Verdes, y Maxime Durand, del grupo de economistas de la LCR. El debate ha tenido la agresividad tradicional de la izquierda francesa y se ha centrado en un tema especialmente polémico, allí y aquí: la compensación salarial de una eventual reducción de la jornada laboral. Presentamos los artículos en una versión ligeramente editada, evitando referencias coyunturales a la actualidad francesa que no son imprescindibles para entender las ideas de Lipietz y Durand].

Lipietz I

La recuperación mundial, inflada por la bajada drástica de las tasas de interés en los EE UU, ha brillado durante un año sin tocar las orillas de la Europa encorsetada por los "criterios de convergencia" de Maastricht.

Mientras pierde velocidad al otro lado del Atlántico, parece por fin tocar sin mucha fuerza las orillas de Francia. Y ya comienza la inquietud: ¿recaeremos en el error histórico, confesado por Michel Rocard, de finales de los años ochenta: contar con ella para asegurar la vuelta al empleo, olvidando la reducción del tiempo de trabajo? En aquel momento, 800.000 empleos creados no habían hecho bajar el paro más que en un punto, antes del regreso de la recesión.

Pues bien, quizás. La recuperación, que como de costumbre relanza la combatividad de los asalariados, se traduce por primera vez en una ola de huelgas más orientadas hacia el empleo que hacia el salario. Pero parece haberse franqueado un umbral: el paro, porque toca ahora a todas las familias, a todas las clases sociales, se ha establecido de forma duradera como el problema económico, social, cultural, ético, ... y ecológico de nuestro tiempo.

El papel de la recuperación. Ciertamente, la recuperación, si es convenientemente orientada para permanecer "sostenible", tanto desde el punto de vista del comercio exterior como desde el punto de vista del medio ambiente (y amplios programas de economía de energía y de desarrollo de los transportes en común tendrían este doble efecto), será un auxiliar poderoso de la lucha contra el paro. Por sus efectos directos de creación de empleo en primer lugar (como en 89-91). Además, porque, reduciendo la crisis fiscal del Estado e aumentando los beneficios ya confortables de las empresas, permitirá financiar las otras dos "grandes obras" posibles: el desarrollo de un tercer sector de utilidad social, y

sobre todo la reducción de la duración del trabajo "por todos los conceptos", edad de jubilación y duración anual o semanal del trabajo.

No olvidemos nunca este punto: la política Rocard/Balladur de alargamiento de la duración de la cotización para la jubilación es, por sí misma, un factor de agravación en unos 200.000 parados por año. Hay que hacerla retroceder lo más rápidamente posible, antes de soñar con cosas mejores.

Queda la parte más importante: el reparto del trabajo durante la duración de la vida activa, y la más importante subparte: la reducción general, por vía legislativa o interprofesional, de la duración semanal del trabajo (con o sin anualización: dejemos de lado ese asunto). Entonces, sobre este punto, ¿donde está el debate?

Cuatro posiciones. De hecho, se ha movido un poco desde el pasado invierno. En aquel momento, se enfrentaban cuatro posiciones:

1. La posición tradicional de los sindicatos y de la "vieja izquierda": las treinta y cinco horas sin ninguna disminución de salario. Posición irrealista y puramente verbal, pues conllevaría tales dificultades para las empresas que acabaría en una ola de despidos.
2. La posición más generosa para los excluidos, la de un experto de ATD-Quart Monde, Pierre Larrourou: las treinta y dos horas inmediatamente, con descenso realista de los salarios, incluso de los salarios más bajos.
3. La posición realista "pro-cuadros" de Henri Emmanuelli: no hay que "romper la unidad de los asalariados", es decir no hay que poner en cuestión la renta de los altos salarios, "incluso los de 30.000 francos al mes" y consiguientemente, subordinación de la reducción de la duración del trabajo al ulterior crecimiento de la productividad. En definitiva: las treinta y siete horas inmediatamente, las treinta y cinco horas más tarde.
4. La posición realista "pro-excluidos" de los ecologistas: las treinta y cinco horas inmediatamente, con mantenimiento de la renta mensual garantizada a los bajos y medios salarios (los demás: a negociar con los empresarios).

Tres evoluciones. El primer semestre de 1994 ha marcado tres grandes evoluciones:

- La desaparición casi total de la posición 2. Generosa y económicamente realista (por ello, había encontrado un apoyo en la derecha "humanista"), era políticamente irrealista, puesto que se privaba de todo apoyo entre los asalariados.
- La vuelta del PS, bajo la égida de Emmanuelli, a una vieja tradición "molletista": discurso muy radical anticapitalista, posicionamiento electoral centrista, es decir: "Delors y las treinta y cinco horas, sin bajada del salario".
- Y sobre todo, en el seno de los colectivos "Agir ensemble contre le chômage!" (Actuar conjuntamente contra el paro, AC!). Ver más información sobre esta campaña en *VIENTO SUR* nº 15) y en los debates fraternales de las marchas contra el paro, la confrontación entre las posiciones uno y cuatro.

La posición "treinta y cinco horas inmediatamente, sin ninguna disminución de salario" es defendida allí con talento por la LCR. Sin caricaturizarla demasiado, la

argumentación es grosso modo: "Los patronos pueden pagar. O, si no pueden, se les puede 'ayudar' aumentando los impuestos sobre los rentistas. E incluso si un día debemos reconocer que no pueden todos pagar todo, no merece la pena dividirnos anticipando los compromisos que tendremos que hacer con ellos".

¿Prioridad a las capas medias? El problema, con este último argumento, es que se acerca peligrosamente a la posición de Emmanuelli. Pues, de hecho, o bien plantea un doble discurso ("Por el momento nos negamos a cualquier descenso de la renta de las capas medias, pero si un día la cuestión se pone de actualidad..."), o bien subordina la lucha contra la exclusión a la defensa de la renta de las capas medias. Posición llamativa por parte de una extrema izquierda a la que estábamos acostumbrados a ver defender los aumentos salariales no jerarquizados ("500 francos para todos").

Pero, ¿qué es una compensación salarial sino un aumento de salario horario? Una posición del tipo "compensación salarial uniforme" habría permitido a la izquierda sindical unificarse sin dificultades con los ecologistas.

Esta prioridad concedida a las capas medias es tanto más chocante en la medida que esos mismo militantes no dudan (con razón) en predicar la estricta limitación de las horas extras. Así, no se dudaría en amputar más del 10% de las rentas de una persona que cobre el salario mínimo interprofesional (SMIC) trabajando cuarenta y tres horas por semana, pero ¡habría que pelear por los 60.000 francos del piloto de un Boeing 747!

Pero el problema es más profundo. Para la extrema izquierda, toda ganancia salarial en el seno del "enfrentamiento capital-trabajo" debe ser apoyada. Ahora bien, los excluidos no forman parte (desgraciadamente para ellos) de la relación capital-trabajo, y la "nueva pequeña burguesía" recibe sus rentas bajo la forma de salario. A partir de ahí, un acuerdo "capital-asalariados" por las treinta y cinco horas sin disminución de salario podría muy bien hacerse... a condición de cerrar los establecimientos menos productivos, disminuir los gastos de protección social y las reglamentaciones de defensa del medio ambiente (lo que fue en definitiva la política del boom tatcheriano, arrastrado por los altos salarios).

Frente a esta posición estamos los ecologistas, y en particular los Verdes, que, por primera vez se han comprometido colectivamente en el terreno social y se han presentado como valientes defensores del reparto del trabajo y de las rentas.

Rentas garantizadas. Estando muy de acuerdo en que había que comenzar por "hacer pagar" prioritariamente a las rentas de la propiedad para financiar la reducción del tiempo de trabajo, los Verdes se separaban de la extrema izquierda al no garantizar el mantenimiento de los salarios mensuales más que "para la mitad de los asalariados menos pagados".

Ahora bien, esta mitad gana menos de 9.000 francos. Lo que puede ser relativamente confortable en provincias es muy insuficiente en la región parisina (la diferencia de los salarios París-provincia es mucho más importante que la diferencia hombres-mujeres). Un sondeo de la Unión de los Sindicatos de la Metalurgia CFDT de París muestra que una cierta pérdida de salario mensual en el paso a las treinta y cinco horas no es aceptado más que a partir de 10.000 francos por mes.

¿Fiscalizar las cotizaciones sociales? Pero, mientras los Verdes se proponían aumentar el salario mínimo interprofesional, a la vez que dejaban los altos salarios a la negociación, han aparecido como si pelearan por el descenso de los altos (y porqué no de los medios) salarios. Sin embargo, cualquiera que sea su preocupación por la naturaleza y el Tercer Mundo, los Verdes no hacen ciertamente de la bajada de los altos salarios un objetivo en sí mismo. Simplemente, conscientes de que una subida general del salario horario podría arruinar no pocas empresas, intentan "limitar los destrozos" garantizando sólo los salarios bajos. También habría que disminuir el coste de esos salarios para las industrias de mano de obra, por ejemplo fiscalizando las cotizaciones sociales.

Todo el mundo está de acuerdo en AC! en una reforma fiscal que hiciera pagar las cargas sociales al conjunto de las rentas. Una parte de los Verdes propuso este verano unirse a la consigna de "treinta y cinco horas sin reducción de salario para todos"... pero con un aumento de los impuestos, lo que habría permitido una unificación formal con la LCR e incluso con Emmanuelli, a la vez que se preservaba la posibilidad de recuperar mediante el impuesto, para "entregárselas" a las empresas, las esplendideces que éstas habrían concedido a sus cuadros.

Esta propuesta fue rechazada por los Verdes, por recomendación de su Comisión Económica, pero el ejercicio merecía ser intentado. Parece técnicamente posible "financiar la reducción del tiempo de trabajo mediante los impuestos", es decir pasar a las treinta y cinco horas sin reducción de salario y sin dañar la competitividad ni la capacidad de financiación de las empresas, gracias a una reforma fiscal. Pero, incluso si se recauda el 20% suplementario sobre las rentas del capital, incluso si se toman 120 mil millones sobre los consumos de energía a través de una ecotasa anti-CO2 que se repercutiría sobre los precios, hay aún que aumentar el impuesto sobre la renta en un 25%, y en un 40% si la introducción de la ecotasa se hace a precios constantes (es decir a cargo de las empresas).

En definitiva, una fuerza política no tiene nada que ganar en desviar sobre el Estado, vía los impuestos, la redistribución de los costes salariales: es ella la que recibiría todos los golpes asumiendo la transferencia del bolsillo de las capas medias hacia las de los empresarios. Más vale atenerse a las reglas de una sociedad pluralista. Es normal que los sindicatos exijan los salarios más altos posibles, normal que los empresarios resistan. El papel de una fuerza política que lucha por la solidaridad es proteger a los excluidos y a los bajos salarios...dejando a los demás que negocien entre ellos.

Pero para esto también es preciso haber privilegiado la alianza de los excluidos y de los explotados.

Durand I

Alain Lipietz, portavoz de la Comisión Económica de los Verdes, ha polemizado ampliamente en *Politis* con la posición de la LCR sobre las 35 horas sin pérdida de salario. Esta es una respuesta.

Lipietz comienza distinguiendo cuatro posiciones sobre la reducción de la duración del trabajo: la suya, la de Larouturrou, la de la «vieja izquierda» y la de

Emmanuelli. Intentando describir la evolución del debate, comienza por deplorar la desaparición de la propuesta de Larouturrou (la semana de cuatro días con 5% de descenso salarial) que tenía el doble mérito a sus ojos de ser la más «generosa para los excluidos», al mismo tiempo que «económicamente realista». Capaz de encontrar un apoyo en lo que Lipietz llama la «derecha humanista», este proyecto se privaba sin embargo de cualquier apoyo entre los asalariados.

Hay en esta presentación un primer patinazo, que consiste en sugerir que una parte de la derecha podría ser más generosa que los asalariados. Debería sin embargo ser fácil de discernir, tras el discurso cada vez más social de la derecha, su voluntad de hierro en cuanto a la acentuación de la austeridad salarial y a la ofensiva contra la protección social. ¿Es verdaderamente astuto concederle, en el momento de la apertura de la campaña presidencial, certificados de «humanismo», aunque vayan entre comillas?

Amalgama. No es el único ejemplo de una cierta torpeza política de la argumentación de Lipietz. Ciertamente, rompe brillantemente la posición de Emmanuelli con esta fórmula: Delors inmediatamente, y las 35 horas sin pérdida de salario... más tarde. Pero es para abrir inmediatamente un mal proceso a la posición de la Liga, cuya argumentación se acercaría «peligrosamente a la de Emmanuelli». Tal amalgama es por lo menos difícil de tragar. Si se cree a Lipietz, la Liga estaría en la práctica por la defensa de la renta de las clases medias y habría renunciado a aumentos de salarios no jerarquizados, como los 1.500 F para todos (que una divertida errata reduce por otra parte a 500 F).

El fondo del problema. El fondo del problema está en otra parte: ocurre que nuestros argumentos sobre esta cuestión de la compensación salarial se han revelado más convincentes que los de Lipietz. No debido al «talento» que habríamos desplegado, sino sencillamente porque esos argumentos sintonizaban con un principio muy extendido en el movimiento sindical, según el cual no se movilizará a los asalariados por una plataforma que prevé un descenso de los salarios. Además, incluso con las propuestas de Lipietz, que hacían descender muy bajo en la escala de las rentas, puesto que un asalariado de cada dos se vería afectado, la compensación (para los patronos) era muy débil. Sobre una alza de la masa salarial de un 11% que representaría un paso a las 35 horas sin pérdida de salario, Lipietz no hacía economizar más que un 3% a los patronos, lo que dejaría entero lo esencial del problema. En cuanto a las rentas más elevadas, no hay que mezclarlo todo. Hay que comenzar por recordar que el 90% de los asalariados no supera cuatro veces el SMIC. El aumento de las desigualdades proviene en lo esencial de las rentas financieras, y en lo que les concierne, no hemos estado nunca, evidentemente, a favor del statu quo. Proponemos desde hace mucho una reforma fiscal radical, que iría en el sentido de una mayor equidad, jugando con las franjas del impuesto sobre la renta, sobre los techos de cotización social...

Lipietz responde que es hipócrita, puesto que a fin de cuentas esas medidas tendrían por efecto no mantener el reparto de las rentas después de los impuestos. No se trata sin embargo de un «doble discurso», como sugiere amablemente Lipietz, sino de una distinción esencial a nuestros ojos. Hace falta una ley a favor de las 35 horas sin

pérdida de salario para crear empleos, y hace falta una reforma fiscal para asegurar un reparto más equitativo de las rentas. Pero no se deben mezclar las dos, por una razón evidente: los objetivos de igualdad social tienen que ver con la lógica del impuesto, porque deben tomar en consideración todas las formas de renta, mientras que la reducción de la duración del trabajo no concierne más que a los asalariados.

Evolución del debate. Esta obstinación en pregonar descensos de salarios no ha convencido, ni en AC!, ni siquiera entre los Verdes. Es sintomático que las posiciones defendidas hasta ahora por Lipietz hayan desaparecido del proyecto sometido a la discusión de la Convención de la Ecología Política y Social, que retoma en sus rasgos generales la formulaciones del llamamiento de AC!. Este texto propone en efecto «reducir mediante una ley-marco la duración legal del trabajo a 35 horas semanales con mantenimiento del poder de compra, sin aumento de la intensidad del trabajo, a fin de permitir las contrataciones correspondientes», y asegurar la financiación de esta medida «mediante impuestos sobre las rentas financieras, la especulación monetaria, plusvalías, que marquen una voluntad de un reparto más igualitario de las riquezas y de una tasación al menos igual de las rentas del capital y del trabajo».

El llamamiento inicial de AC! contenía una fórmula de compromiso sobre los altos salarios, que ha permitido no cerrar el debate sobre este punto que está muy lejos de reducirse a un cara a cara entre los Verdes y la LCR. Tal presentación no refleja la realidad diversificada de este movimiento, su función de federador.

En cuanto a la idea, implícita en el artículo, según la cual AC! habría privilegiado insuficientemente la «alianza de los excluidos y de los explotados», bajo la influencia sin duda de la «vieja izquierda», no es sostenible. Si hay algo que AC! ha conseguido con las marchas de la pasada primavera, es comenzar a construir tal alianza. Que esto no pasa por la autolimitación de las reivindicaciones salariales es una realidad que no confirma las tesis de Lipietz.

Esta polémica tiene al menos la ventaja de señalar claramente lo que puede distinguir a dos posiciones presentes hoy en el movimiento social. Lipietz piensa que este último, para constituirse, debe ser portador de un esbozo de contrato social aceptable para las clases dominantes (¿la “derecha humanista”?). Nuestra posición, como revolucionarios, no es proclamar la inminencia de la revolución, lo que sería manifiestamente absurdo. Consiste más bien en defender un proyecto radical que sintetice las aspiraciones populares y que se oponga punto por punto a los proyectos implacables de una burguesía que no tiene, verdaderamente, nada de humanista.

Lipietz II

La respuesta de Maxime Durand a mi artículo de *Politis* plantea, en primer lugar, un problema de estilo que es un problema político. Antes de abordar el fondo, el autor consagra una cuarta parte de su artículo a tacharme de «torpeza política» (por haber recordado que la posición Larroutou, aunque es la más generosa para los excluidos, había recibido el apoyo de una parte de la derecha), y, cosa mucho más grave, lanza contra mí una falsedad por sugerir no se sabe qué crueldad contra los trabajadores que cobran el salario mínimo.

Problema de estilo, problema político: antes incluso de debatir, se comienza por demonizar al adversario, el infame verde, especie altamente reaccionaria... Pero vayamos al fondo.

Salario horario y lucha de clases. En primer lugar, Durand reivindica sin ambigüedades la posición defendida sobre la cuestión de los altos salarios. Lejos de ser un compromiso táctico (no mezclar la cuestión de la reducción del tiempo de trabajo a la de la reducción de la jerarquía de los salarios), afirma claramente que no se debe, «por principio», prever ninguna disminución de los (altos) salarios.

Aquí, el debate ganaría en claridad si el autor precisara si habla de salario horario o de salario mensual. Para los patronos (¡y los marxistas!), sólo cuenta el primero (lo que paga el capital para comprar tiempo de trabajo). Cualquier reducción de tiempo de trabajo, desde el momento en que es incluso parcialmente compensada, es una subida del salario horario y una bajada de la tasa de plusvalía (relativa). En ningún caso se trata de «sacrificio» del lado de los asalariados; venden menos trabajo (y ganan consiguientemente tiempo libre), y este trabajo lo venden más caro: son menos explotados. Del lado del capital, hay pérdida de plusvalía relativa y absoluta, de donde proviene su oposición a la reducción del tiempo de trabajo.

Sin embargo, para los bajos salarios, un descenso de la cantidad de su fuerza de trabajo explotada puede conllevar un descenso de la renta mensual, que, hará su vida aún más difícil a pesar de su ganancia en tiempo libre. La posición de los Verdes es pues garantizar la renta mensual de la mayoría de los asalariados mediante la única medida centralmente obligatoria: la subida del salario mínimo interprofesional horario.

¿Y más allá? Más allá nosotros decimos claramente que debe regularse a nivel de la relación empleadores/empleados y precisamos que un descenso del 3% del coste salarial mensual directo medio (esencialmente sobre las franjas superiores de los asalariados), consiguientemente una subida media del 7% del salario horario por un descenso del 10% del tiempo de trabajo, permitiría a la patronal conservar la rentabilidad y competitividad, es decir, contratar gente efectivamente.

A esto, Durand opone en primer lugar un argumento bastante divertido: “¡el 3% no arregla el problema de los patronos!”. Cuando un representante de la patronal nos dice eso, le respondemos: «¿Y las economías sobre el coste del paro? ¿Y las ganancias de productividad horaria?» Pero cuando un artículo de Maxime Durand nos sirve el argumento patronal, uno tiene derecho a imaginar que su ordenador le ha jugado una mala pasada.

¿La igualdad por el Estado? Su verdadero argumento es sin duda el siguiente: no se debe mezclar reducción del tiempo de trabajo y lucha contra la jerarquía de los salarios. «El objetivo de igualdad, dice, se remite sólo a la lógica del impuesto». Según esta posición de principio «esencial», el capital debe fijar libremente la jerarquía de los salarios, y el movimiento obrero no debe intentar restablecer más igualdad sino por el medio redistributivo del Estado, a través de los impuestos.

Esta posición tiene a su favor ser, desde los años cincuenta, la de la socialdemocracia nor-europea, a la que no se le pueden negar los éxitos. Pero, ¿sería válida en Francia donde la escala de los salarios, antes de impuestos, es escandalosamente más grande, y se ha ampliado aún a lo largo de los años ochenta? La Comisión Económica de los Verdes ha examinado este escenario. Implicaría una alza de alrededor del 40% del impuesto sobre la renta, para entregarlo a la desgraciada patronal que habría íntegramente compensado para sus cuadros el paso a las treinta y cinco horas. Deseo buena suerte al gobierno «rojo» que tomaría tal iniciativa... Por lo que a nosotros se refiere, preferimos una cierta descentralización de la lucha de clases...

¿A las calendas griegas? En mi artículo, esbozaba una propuesta: la compensación no jerarquizada. Técnicamente difícil de imponer, el principio es simple. Si se estima que el asalariado que gana diez mil francos por mes no debe ver moverse su renta mensual con el paso a las treinta y cinco horas, entonces mantengamos los salarios horarios... y concedamos a todos una prima mensual de mil francos. Es mucho para el trabajador que cobra el salario mínimo (cuyo salario mensual se eleva en 500 francos), es poco para el «cuadro Emmanuelli» que cobra treinta mil francos por mes, y, para el asalariado que cobra cuatro veces el SMIC (diez y nueve mil seiscientos francos netos aproximadamente) que parece privilegiar Maxime Durand (¿esbozo de compromiso?), la «pérdida» mensual no sería más que de novecientos sesenta francos... . Espero aún una respuesta seria (y no me comprometo sobre la viabilidad de ese umbral).

Última rareza de Maxime Durand: su concepción del cambio social. «Nuestra posición, en tanto que revolucionarios, no es proclamar la inminencia de la revolución, lo que sería manifiestamente absurdo (Soy yo el que subraya). Consiste en plantear un proyecto radical (...) que se oponga punto por punto a los proyectos implacables de una burguesía que no tiene nada de humanista». Dicho de otra forma, sería revolucionaria una posición cuyos proyectos de reforma serían tan radicales que no podrían ser puestos en marcha más que tras una derrota de la burguesía en toda la línea. En el caso presente: el paso a las treinta y cinco horas después de una revolución «cuya inminencia sería manifiestamente absurda».

Es en este sentido en el que decía que esta posición se unía a la de Emmanuelli: las treinta y cinco horas para las calendas griegas. Por nuestra parte, preferimos pelear por reformas que no gustarán ciertamente a las clases dominantes, pero no presuponen el Gran Día, «inminente» o no. ¿No muy «revolucionario»? No nos importa. Evidentemente (y es una de nuestras más graves divergencias), no tenemos la misma relación con el tiempo, se trate de la lucha contra el paro... o de la lucha contra el efecto invernadero.

Durand II

En primer lugar, quiero felicitar a Alain Lipietz por haber desafiado el boicot de los Verdes hacia el debate con la Liga. Luego, algunas rápidas observaciones a su reacción.

Lipietz mezcla salarios de los cuadros y rentas financieras. En 1993, las empresas han distribuido 440.000 millones de intereses y dividendos netos. Una

tasa del 25% sobre estas rentas reportaría pues 110.000 millones. Si se les añaden los 80.000 millones de economías en el coste del paro, no quedan por encontrar más que 40.000 millones para llegar a los 230.000 millones que representan el paso a las treinta y cinco horas. Tal suma no representa más que el 20% del fraude fiscal (según la estimación del SNUI), o el 15% del déficit presupuestario. Es inferior a las ganancias que las empresas no han destinado a la inversión en 1993. Recordar a Lipietz que su compensación no reporta más que el 3% de la masa salarial, no es pues tragarse la argumentación patronal, sino subrayar que las verdaderas fuentes de financiación están en otra parte.

El "gran día". La forma en que Lipietz evoca «aumentos de productividad» asociados a la reducción de la duración del trabajo plantea problemas, si se trata de convencer a los asalariados. Revela sobre todo una incomprensión profunda de las reticencias de los asalariados que temen —quizá tanto como una pérdida de salario— que la reducción de la duración del trabajo sea un medio de obligarles a hacer el mismo trabajo en menos tiempo.

Lipietz parece creer que nuestro análisis estratégico se reduce al siguiente simplismo: la LCR está a favor de las 35 horas, pero tras el Gran Día...; y saca de ello argumentos para decir que en este punto estamos con Emmanuelli. ¿Y por qué no con Delors?

Si se quiere abordar serenamente este debate, habría sin duda que distinguir dos orientaciones coherentes. La de Larroutourou consiste en elaborar un proyecto bien acabado, en convencer a la patronal (y la CFDT) de que es practicable, y en soñar con una especie de pacto social en frío. La de AC! se propone, al contrario, construir un movimiento social, fundado en el rechazo de la sociedad del paro y en la afirmación de aspiraciones transformadoras.

No es en sí un proyecto revolucionario, pero la condición de existencia de tal movimiento es su radicalidad. Lo que la gente siente más o menos confusamente hoy, es que la lucha contra el paro exige un proyecto global que, sin plantear forzosamente la cuestión de su derrocamiento, toca sin embargo las raíces mismas del sistema económico dominante. ¿Cómo transformar esta toma de conciencia aún dudosa en voluntad de acción? No es un problema sencillo de «relación con el tiempo», sino también de método. Nada autoriza en efecto a Lipietz a afirmar que se moviliza mejor por la lucha contra el paro a partir de un discurso razonable sobre la compensación salarial.

Continuemos pues debatiendo (vivamente si es necesario) pero también experimentando en común: no estamos, ni unos ni otros, en posición de establecer verdades definitivas.

Traducción: Alberto Nadal



Una "guerra" de intereses

Pepe Mejía

Nuestros abominables aparatos de televisión comenzaron a vomitar imágenes de paupérrimos e imberbes soldados, todos ellos con rasgos indígenas, caras que expresaban hambre y blandengues cuerpos que no podían sostener sus propios fusiles. Las imágenes nos mostraban selvas intrincadas en donde se oían no el cantar de los pájaros sino el rugir de los aviones y las descargas de los cañones. En las capitales, las masas convenientemente aleccionadas desde estratégicos púlpitos entraban en trance patriotero gritando vivas a su país y muera al vecino, manteniendo una histeria colectiva que, de pronto, se había apoderado de esas masas antes inmóviles ante el empuje del hambre, la miseria y el etnocidio. Desde nuestros cómodos sillones de reducido *salón-piso-europeo* entramos diariamente a la película de una guerra convencional entre paisanos y que los forasteros no entendían.

En el reparto de este esperpéntico escenario —que algunos han llegado en llamar en un alarde de monería, "guerra del Amazonas"— figuran dos contingentes militares. Uno con bastante poder económico —el ecuatoriano— y otro con más adicción a la cocaína que a los deberes patrios.

Petróleo, oro y uranio

En este teatro no podían faltar los fantoches. Los dos —Fujimori y Durán Ballén— han llevado a sus pueblos por la frondosa senda del neoliberalismo salvaje. El espectáculo del enfrentamiento armado entre fuerzas militares de Perú y Ecuador tenía en el fondo una canción de cuna patriotera y rastrea.

Para el análisis de este absurdo y estúpido enfrentamiento armado para los pueblos, pero certeramente interesado para ambos Gobiernos y cúpulas militares, es necesario tener en cuenta varios elementos.

En primer lugar, el conflicto de falta de delimitación de fronteras existe y es un hecho del que históricamente gobiernos de ambos países han echado mano para solventar otros problemas que nada tiene que ver con esos remotos y recónditos linderos.

Otro crucial elemento que ha prevalecido a lo largo de la historia de ambas naciones —que curiosamente siempre ha estado de tapadillo— es el hambre depredador de las TNC (Transnational Corporations y/o Empresas multinacionales).

Ya en 1542, un capitán español y lleno de codicia, Francisco de Orellana, recorrió la zona en busca de oro. El área de conflicto es rica en petróleo, oro y uranio. Desde hace mucho tiempo existe un plan de desarrollo instigado, promocionado y alentado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para convertir ese maravilloso paraje en zona franca que beneficiará sólo y exclusivamente a esas TNC.

Las perjudicadas, como siempre, serán las poblaciones autóctonas e indígenas: los shuar, más conocidos como jíbaros o "reductores de cabeza", aguarunas y huambisas. Ya antes del conflicto armado, los huaronis se vieron expulsados de su territorio y amenazadas las fuentes de su subsistencia debido a la explotación petrolera.

Los quichuas de la Amazonía, que viven entre los ríos Coca y Napo, tienen problemas de tierras debido al avance de la colonización y la penetración de empresas transnacionales de palma y té.

Todas estas comunidades serán obligadas a desplazarse por el conflicto armado —de hecho se habla ya de 100.000 desplazados y más de 500 desaparecidos— y dejar limpio el escenario para la creación de esa zona franca de desarrollo no sostenido que beneficiará a los respectivos Gobiernos, cúpulas militares, TNC y empresas de los Gobiernos garantes del Protocolo de Río de Janeiro firmado en 1942.

El juego de la guerra se sabe como empieza pero no se sabe como termina de cara a las opiniones públicas de ambos países. Fujimori y Durán Ballén buscarán el rédito del triunfo para sus respectivas causas sin importarles mucho la soberanía nacional o el espíritu patriótico que dosificadamente alimentan a sus respectivas plebes.

En Perú, “vender” un probable triunfo sobre Ecuador acarreará automáticamente la reelección para el presidente de los narco-generales. Fujimori y sus generales ayudantes de campaña electoral *reparte-fotos* tendrán cuerda para rato y seguirán medrando en un Estado corroído por la corrupción y manteniendo unos lazos más que sólidos con el narcotráfico internacional.

Los entresijos de un “Narco-Estado”

El Observatorio Geopolítico de las Drogas, institución internacional que funciona en París, en su último informe anual señala al Perú como uno de los ocho “Narco-Estados” del mundo. Indica además que Perú tiene una economía “narcoadicta”, habiéndose producido la fusión de los intereses del narcotráfico con la subversión y con elementos militares en amplias zonas, en una cadena de intereses que llega hasta el corazón del poder central.

En política se dice que no hay casualidades. Sin embargo, en el justo momento que estalló el conflicto armado en los titulares de la prensa internacional —porque noticias sobre las incursiones peruanas en supuestos territorios ecuatorianos ya se publicaba desde diciembre del pasado año— se capturó a la cúpula del Cartel del Norte, una banda de narcotraficantes que tenía en su directorio nada menos que a un vice-ministro del Interior, un general jefe de una Región Militar y al hermano del Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas —el que sale ahora por la tele *vendiendo* sus batallitas como triunfos militares— entre otros 40 nombres de altos personajes pertenecientes al estrecho círculo del ingeniero Fujimori.

A la cabeza de este Cartel se encuentra el siniestro asesor del presidente en temas de inteligencia, conductor del grupo paramilitar Colina y, según muchos analistas de fuera y dentro del Perú, el actual *Padrino* de la mafia de narcotraficantes, el ex-capitán Vladimiro Montesinos.

En el preciso momento en que el escándalo estaba servido y la imagen de Fujimori perdía puntos de cara a las próximas elecciones, estalló el conflicto con el Ecuador. El sonido de las bombas y el *tam tam* de la guerra salvó, de momento, el futuro del presidente-candidato.

La detención y destape de las vinculaciones de altos personajes del régimen con el narcotráfico coincidió con el aumento de las denuncias de presuntos fraudes en el

camino hacia las elecciones. Incluso hubo candidatos que públicamente empezaron a cuestionar el papel de la OEA.

La habitual imagen de generales repartiendo propaganda electoral en favor de su ingeniero, comitivas electorales abaleadas por soldados que se divertían jugando con sus armas "al tiro al pato", el uso de subversivos arrepentidos y soplones para amedrentar a la población e inclinaran su voto en favor del candidato-presidente descendiente de *niseis* ¹, coacciones, amenazas y el Servicio de Inteligencia acechando por todas las esquinas menos para advertir de que las fronteras estaban siendo "invadidas".

En todo este paripé, la diplomacia a ido detrás de los acontecimientos. Durante el mandato del nuevo *ayatola de los Andes*, severo fustigador de escritores como Mario Vargas Llosa pero incapaz de poner en vereda a sus narco-generales, el cuerpo diplomático ha sufrido una terrible merma. 117 cualificados diplomáticos fueron depurados a través de una lista confeccionada, entre otros, por el actual embajador de Perú en Madrid, Roberto Villarán Koechling.

En el aspecto militar, muchos han sido los profesionales depurados por su no anuencia a los dictados del llamado *Emperador*. Y otros han sido premiados por sus "servicios prestados", como es el caso del general Roberto Saldaña Vázquez. Saldaña, desde la Agregaduría Militar en Madrid, es el actual responsable de la compra de armamento. En Perú desempeñó la "destacada" labor de tapar todas las denuncias contra militares vinculados al narcotráfico. Su premio fue conseguir que lo enviaran a España.

Mientras tanto, los acólitos del régimen llaman al hambre y al sufrimiento de un país "éxito económico y bonanza", a la corrupción generalizada y gansteril del Gobierno "progreso y moralización", a los dolos de los ministros "disciplina fiscal", a los militares socios de los narcotraficantes "héroes nacionales", al remate de empresas estatales "modernidad", y al presidente mentiroso, soez y traidor "gran conductor y gran autoridad".

Intereses militares en Ecuador

Sin embargo, Ecuador, con una aceitada y rodada cancillería hizo frente con mejor oportunidad a la opinión pública internacional. En los últimos años, este pequeño país que vió nacer al gran precursor de la independencia de América, Eugenio Espejo, más conocido como *Indio Espejo*, ha alcanzado altos niveles de endeudamiento por la compra de armamento.

En 1994, el presupuesto de Defensa Nacional de Ecuador alcanzó un 10.4% del presupuesto general. Asesores militares chilenos e instructores israelíes se pasean cómodamente por las bellísimas calles de Quito y Guayaquil.

35 son las empresas controladas por el Ejército ecuatoriano, desde hace 22 años, a través del organismo denominado DINE (Dirección de Industrias del Ejército). Muchas de ellas instaladas en propiedades que anteriormente eran privadas y que fueron adquiridas bajo presiones y confiscadas. Esas empresas, ubicadas en la provincia de El Oro y Loja, fronterizas con Perú, son dirigidas actualmente por 51 oficiales del Ejército ecuatoriano, integrantes de la cúpula militar de su país.

Este grupo privilegiado de oficiales ve en la penetración de las TNC un riesgo a sus

¹/ niseis: de origen japonés

intereses. O se pacta en condiciones onerosas su participación en los futuros beneficios o seguirán moviendo el tablero del conflicto armado.

Durán es un mandatario que llegó debilitado al enfrentamiento vecinal y recupera terreno con el conflicto; ha pasado de un 10% de aceptación a un 17% en estos días, y según se rumorea en Quito depende en alta medida de los mandos militares.

Como era de suponer los militares ecuatorianos defienden su parte del botín bajo la bandera de su combate "en defensa de la patria".

Ecocidio

En todo este escenario bélico, junto a las poblaciones autóctonas, el ecosistema es el que sale muy mal parado. A la depredación permanente motivada por la presencia de las empresas petroleras y la contaminación de ríos, los bosques son los "muertos vivientes" de esta absurda guerra.

El ecosistema atesora uno de los lugares ornitológicos más ricos y variados del mundo. El Ecuador tiene alrededor de veinte mil especies de plantas, la mayor parte en sus bosques. Considerando su tamaño, el país tiene una enorme cantidad de riquezas florísticas, ubicándose quizás en el primer lugar, en cuanto a especies de plantas por unidad de área, en toda América del Sur. Esta alta diversidad se debe a que posee bosque húmedo tropical en los dos flancos de los Andes.

Hasta antes de la guerra, anualmente se destruían 340.000 hectáreas de bosques. El Ecuador ocupa el segundo lugar en este aspecto en América Latina. Cada año se destruye el 3.4% de bosques, lo que significa que, al ritmo que vamos, dentro de treinta años ya no quedarán bosques naturales.

Los refugios militares en plena selva han sido construidos con cemento y casamatas construidas con troncos, abiertas muchas entre las raíces de poderosos cedros y caobas.

La Cancillería peruana denunció al gobierno ecuatoriano por el sembrado de minas terrestres antipersonales (MTAP) en Huaquillas y Aguas Verdes. Ecuador denunció a Perú por el empleo de lanzallamas y armas químicas.

La Cueva de los Tayos, que conocimos por el púdico baño de Fujimori a orillas del profundo y torrencioso río Cenepa, debe su nombre precisamente a que entre la enmarañada selva existe una enorme caverna natural con corrientes de agua subterráneas. Recientes estudios científicos revelan que existe una flora y fauna aún no catalogadas por los científicos naturalistas. El vocablo "tayo" es una deformación de la voz nativa de la etnia huambisa "tuyo" que es el nombre de un ave que habita en esas cavernas tropicales.

La guerra arrasará toda esta rica y bella tierra arrojando al exterminio a sus comunidades autóctonas, como ha denunciado la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos.

En definitiva, este es un conflicto que desde sus inicios ha estado controlado desde los respectivos Gobiernos y cúpulas militares que buscan su propio beneficio y siempre en contra de las respectivas poblaciones. Una opinión pública internacional perpleja, que no entiende las causas, que considera absurda esta guerra y no ve fácilmente que las causas y los intereses son más profundos.

Los únicos responsables de este absurdo enfrentamiento son los Gobiernos y las cúpulas militares. Hacia ellos tendrían que ser dirigidos los sonidos de la guerra.

3 miradas Voces

Cumbres borrascosas



Comitiva



Acogida



En el valle



De paseo



Torres

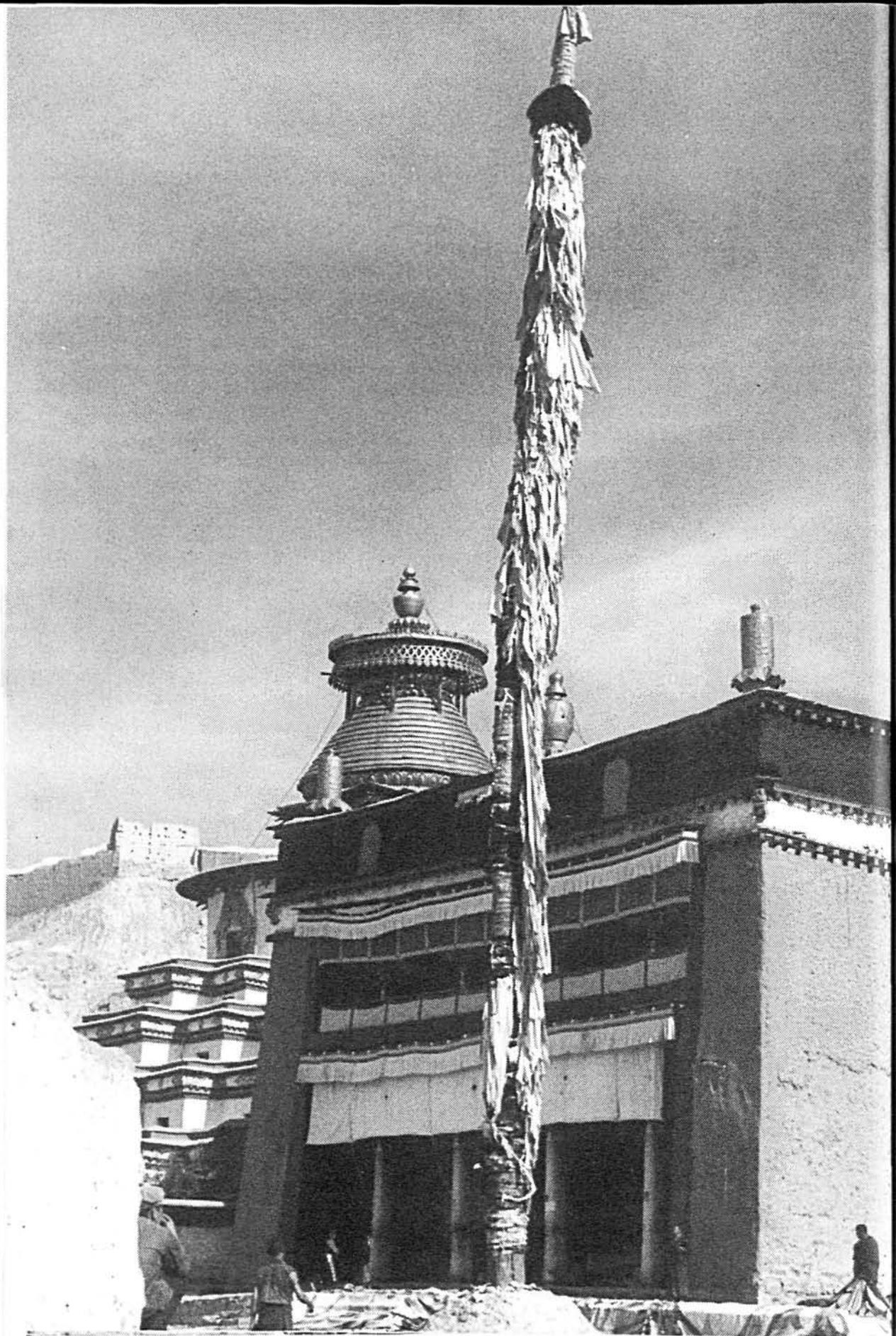
Fotos de Lola Ribera











1 España, ¿una?

Comunidad, nación y federalismo

Pedro Ibarra y Ramón Zallo

El pensamiento de todas las corrientes políticas concluye en un modelo de organización territorial (autonomía, federalismo, confederalismo, independencia) sin perjuicio de que algunas gradualicen sus opciones con etapas, entendiendo que así se acerca mejor el futuro deseado.

Hay, desde luego, un discurso en las derechas e izquierdas que justifica cada modelo ideal. Pero lo cierto es que el debate está tanto en el modelo final —centrado en las ventajas e inconvenientes de cada modelo y en el que, curiosamente, pueden llegar a coincidir discursos ideológicos opuestos como autonomistas de derechas e izquierdas, federalistas de derechas e izquierdas, independentistas de derechas e izquierdas— como, sobre todo, en los prediscursos, en los anclajes conceptuales e ideológicos que los sostienen. Además del debate sobre las oportunidades, ventajas e inconvenientes de cada modelo, las formaciones políticas deben reflexionar, desde la comprensión del problema de las nacionalidades mismo y situándose en el punto de vista de las nacionalidades tanto si se pertenece o no a una de ellas.

Mitos de la izquierda y cuestión nacional

En el discurso de la izquierda histórica no nacionalista los referentes han sido tradicionalmente los siguientes: el internacionalismo frente al nacionalismo; la unidad de la clase trabajadora frente a su fragmentación, lo que incluye una consideración crítica de los nacionalismos como obstáculos en la toma de conciencia y organización de las clases trabajadoras y populares, sin perjuicio de eventuales alianzas con los movimientos nacionalistas democráticos; los espacios

económicos amplios constituyen una infraestructura más adecuada para la construcción del socialismo; antiimperialismo independentista en los casos coloniales o semicoloniales; la autodeterminación como principio democrático en las nacionalidades y, caso de eventual ejercicio, la apuesta por el Estado unitario en su vertiente federal.

La experiencia de la confrontación y relación durante más de cien años con los movimientos nacionalistas, la evolución en todos los discursos, la emergencia de nuevos sujetos políticos y sociales con permanencia de los viejos, los nuevos ámbitos supranacionales....invitan a poner en entredicho viejas verdades y a ordenar los referentes del discurso de izquierdas.

Hay certidumbres que no funcionan

- Nacionalismo e internacionalismo no son términos antitéticos puesto que no se sitúan en el mismo plano. Construir la propia nación y ser solidario y cooperativo con otros países, y en especial con sus capas populares, no solo es posible sino que está en la tradición del nacionalismo de izquierda y en los movimientos anticolonialistas. Incluso es detectable una especial sensibilidad cuando otros países ven dificultada su soberanía nacional por intervenciones imperiales o por oligarquismos internos dependientes.
- La unidad de clase es un bien en sí mismo, pero no debe idealizarse ocultando los problemas que su logro encierra. El problema no es proclamarla, atribuyendo a los demás la división –cuando no se pliegan a la propia concepción– sino cómo articular formas viables de unidad desde el reconocimiento de las diferencias que recorren a las clases trabajadoras desde el punto de vista social, ideológico y nacional. Es más útil reconocer realidades que estigmatizarlas como indeseadas. Hay dos planteamientos espacial-organizativos posibles en el terreno político y sindical. Cabe considerar que los espacios inmediatos **/1** de unidad deben partir del Estado-nación tal y como lo han configurado las clases dominantes –aceptándolo aunque sea críticamente– o, por el contrario, cabe considerar como marco cada una de las naciones que lo constituyen como prefiguración de la estructuración territorial del Estado y de la articulación entre pueblos que se desea. No es claro siquiera que la eficacia –la unidad de acción– se promueva mejor desde la primera opción puesto que, de partida, dificulta enormemente el peso social de las organizaciones de clase, situadas a contracorriente en algunos ámbitos nacionalitarios.
- Los kautskyanos **/2** pueden estar satisfechos. Los espacios económicos ya son supranacionales, continentales. El único detalle que falla es que no ha significado la unidad supraestatal de las clases trabajadoras ni la extensión de

1/ El espacio no inmediato, internacional, de las clases trabajadoras se articula realmente mediante acuerdos entre izquierdas y sindicatos soberanos. El internacionalismo orgánico hace tiempo que dejó de existir.

2/ Kautsky desde su concepción cosmopolitista identificaba progreso social y expansión internacional del capital, sostenía una concepción economicista de la clase trabajadora –unidimensionalizada por el modo de producción– y una estructural desconfianza sobre los movimientos nacionalistas de naciones minoritarias. Tanto Rosa Luxemburgo como Pannekoek abundaron, en este aspecto, en ese unilateralismo.

las conquistas de los países más avanzados a otros. Si bien los Estados se debilitan en la medida de la aparición de instancias políticas supraestatales, ello no significa un fortalecimiento de las clases trabajadoras, ellas mismas imbuidas de ideologías nacionalistas de Estado **3**. Por otra parte, ya pocos sostendrán que los espacios estatales grandes o supraestatales son más aptos a la construcción del socialismo, cuando desde el ecologismo político, desde las minorías nacionales, desde los regionalismos y desde las concepciones autogestionarias, se reivindica la escala humana de los espacios, permitiendo una gestión colectiva democrática —quebrando la tendencia del poder político a separarse definitivamente de la sociedad— e impidiendo la formación de poderes acumulativos incontrolables.

- La autodeterminación es un derecho reconocido en abstracto por la izquierda para los pueblos que lo reclaman **4**, aunque su concreción dista de ser unánime **5**. La pregunta es si el tema se deriva sólo del hecho de que el Estado-nación ha de ser democrático y la cuestión nacional una asignatura pendiente en la profundización democrática de cualquier Estado plurinacional democrático, o si además y principalmente, ese derecho se deriva no de la deseable naturaleza del Estado sino de la naturaleza política misma de una comunidad diferenciada que activamente quiere convertirse en sujeto político diferenciado.

En esta segunda interpretación la soberanía popular tiene la doble dimensión de la decisión sobre la representación política y de la definición del propio marco

3/ La creación de marcos supraestatales económicos y decisionales conlleva la pérdida de funciones de los Estados y pone de nuevo de actualidad fenómenos nacionalistas bien distintos e incluso opuestos. En primer lugar, hay un resurgir de los nacionalismos de Estado con la construcción en clave de "geometría variable" de los ámbitos supranacionales, es decir de resurrección de las relaciones bilaterales interesadas, que se expresaría en la búsqueda de un proteccionismo compatible con el respeto formal a los acuerdos regionales (UE, NAFTA..) e internacionales (GATT..), con una contemporización con las xenofobias y el reforzamiento de las fronteras frente a terceros países...En segundo lugar, nacionalismos expansivos de Estado que buscan dominar áreas geopolíticas —Irak, Serbia, Rusia...—. En tercer lugar, desde el referente exacerbado y xenófobo del Estado nación nacionalismos de extrema derecha. En cuarto lugar, nacionalismos integristas religiosos en países de mayoría musulmana. En quinto lugar, y en un marco de desestabilización general y de insatisfacción por las políticas no democráticas de los Estados democráticos occidentales, se refuerzan los nacionalismos periféricos, defensivos y minoritarios, tanto históricos como nuevos, ya sean moderados, radicales o de izquierdas. Como se ve, no hay una naturaleza única del nacionalismo. La naturaleza del nacionalismo se mueve entre dos extremos. Por un lado, puede ser una expresión de la búsqueda de autonomía y autorregulación de los actores sociales para un mayor control de su entorno social y físico. Esta ha sido una parte fundamental en la acción colectiva a lo largo de los dos últimos siglos y en la afirmación de la independencia de los Estados modernos (Declaración de Independencia americana, Revolución Francesa, doctrina wilsoniana para la Liga de las Naciones...). Por otro lado, el nacionalismo de gran nación ha sido ideología y excusa, en nombre de la nación, para acabar con los enemigos internos y las libertades y justificar las invasiones territoriales. Las secuelas trágicas en la historia de ese nacionalismo expansionista son de todos conocidas y curiosamente, el nacionalismo defensivo de los invadidos, ha sido en buena parte uno de los muros que lo ha contenido.

4/ Lenin consideraba que las cuestiones nacionales eran cuestiones democráticas a resolver tanto por tratarse de problemas políticos en sí mismos como por política de alianzas.

5/ Hay quien lo identifica con un pronunciamiento vinculante de la población estrictamente concernida (ámbito nacional) y ejercitable de tiempo en tiempo (Quebec); quien lo amplía a las poblaciones afectadas por los resultados (ámbito estatal); quien no lo considera vinculante sino consultivo; quien piensa que la autodeterminación es la opinión emitida (opinión de la antigua Euskadiko Ezkerra respecto al Estatuto de Autonomía) o incluso las elecciones periódicas.

político. Es decir el derecho de autodeterminación se derivaría del carácter soberano de ese pueblo. Aceptar que en este plano hay un sujeto político, el sujeto comunidad, un pueblo que se constituye en nación –tenga o no Estado /6–, significa que la clase trabajadora o la izquierda son parte del mismo y que su problema es cómo hegemonizar la construcción nacional, en lugar de considerarla como un velo de los problemas importantes o como un problema ajeno /7. El sujeto “clase trabajadora” no es exterior al proceso de construcción de la nación. La cuestión nacional no es una pura cuestión democrática en la que sólo estarían implicadas las burguesías y pequeñas burguesías deseosas de constituir un mercado nacional. La propia clase trabajadora está recorrida por los distintos intereses y discursos sobre el modelo de construcción nacional en el que una parte central –y ya lo dijeron los austromarxistas– es la cuestión cultural, la identidad, la percepción interna, el “nosotros” respecto al “otros” /8.

El sujeto “comunidad”

En las sociedades complejas, además de la reestructuración y diversificación de las clases, emergen nuevas y viejas formas de expresión de la vida social, que aunque entrecruzadas por intereses diferenciados, se configuran como sujetos de actuación política. Junto a movimientos con carácter globalista que pondrían en

6/ El nacionalismo convencional –de Estado nación o de minoría nacional– como ideología de la modernidad, extrae su racionalidad precisamente de su papel central en la construcción de lo racional por antonomasia, el Estado. La nación es así una comunidad proyectada y un sujeto abstracto de imputación política. La pretensión nacional supone un salto cualitativo sobre el concepto de etnia o de comunidad y es, al mismo tiempo, una representación colectiva, comunitaria y un discurso ideológico. Como discurso, la nación es un momento ideológico que implica la construcción de una identidad diferenciada con vocación hegemónica en su ámbito. Ese proceso ideológico nacionalitario o nacionalista supone la definición de unos rasgos que delimitan la nación, una codificación y una estrategia política de autoafirmación que se justifica desde la diferencialidad y la promueve.

7/ Parte de la izquierda tradicional sólo ha reconocido como sujeto de cambio el derivado de las relaciones sociales de producción: la clase trabajadora. La socialdemocracia, en cambio, encontró otros sujetos: el Estado, la opinión pública... que sustituyeron a aquel, convertido en mero eco ideológico. Se está tardando en percibir que junto al sujeto clasista, hay otros sujetos históricos. En las naciones sin Estado el sujeto comunitario, nació a la política de la mano del nacionalismo, como uno de los fundamentos centrales de la sociabilidad, que vela por su identidad cultural y nacional y, como tal, filtra el lugar del resto de sujetos políticos y sociales, adquiriendo un papel de legitimador social y redistribuidor de espacios políticos. La cuestión nacional es así un hecho, no un velo como algunos pretenden. Los velos, en todo caso, son tanto el populismo de las ideologías simbolistas –las formaciones políticas nacionalistas de derecha e izquierda están atravesados por intereses clasistas, aunque tiendan a oscurecerlos o subordinarlos bajo el paraguas interclasista o popular– como la negación del hecho tanto etnológico como político del sujeto comunitario. Por ejemplo, Ber Borjov (1905) comunista, judío y ucranio, sostenía que más allá de la división de la sociedad en clases, desde la izquierda habría que explicar la diversidad de la humanidad en sociedades y planteaba la posibilidad de un nacionalismo clasista en las nacionalidades oprimidas de cara a liderar y racionalizar los fenómenos nacionalitarios. Han pasado 90 años sin que esa pista se haya experimentado coherentemente.

8/ Algunos nos preguntamos, veinticinco años después de que ETA VI equivocara el camino rompiendo drásticamente con el nacionalismo por razones de pura especulación ideológica, si lo molesto del nacionalismo no son los propios nacionalismos tal y como se han configurado históricamente –etnicistas, etnocéntricos, excluyentes, interclasistas, híbridos, simbolistas y defensivos– y si no se perdió una oportunidad histórica de configurar una izquierda nacional –y desde ese punto de vista, abertzale– que, realmente fuera ambas cosas a la vez –izquierda y nacional– sin chirridos. Quizás fue el miedo a reinventar el marxismo práctico en aquellos tiempos de ortodoxias.

cuestión estructuras básicas de la organización social (feminismo frente a patriarcalismo) o económica (ecologismo) también refluían movimientos que cuestionan la mediación entre individuo y sociedad, así como la organización del Estado (identidad y nacionalismos en naciones minoritarias) ⁹.

Básicamente, en las nacionalidades históricas la referencialidad de la acción política —el eje legitimador de la acción social y política que ha delimitado históricamente los espacios políticos y la organización social— se la han disputado, a grosso modo, los movimientos puramente clasistas —en representación de las clases trabajadoras y de las burguesías— y los movimientos nacionalistas —en representación de la nacionalidad oprimida pero, de ninguna manera, ajenos a intereses clasistas—. La emergencia de otros movimientos no interfiere estrictamente en esa pugna de ideologías y hegemonías pero las connota y, al mismo tiempo, las posiciones de los propios nuevos movimientos sociales también están recorridos por los dos grandes ejes sociales y nacionales, vertebradores de las sensibilidades.

Algunas consideraciones

En primer lugar, las reivindicaciones nacionales y sociales se sitúan en distintos planos porque no hay sujetos históricos únicos en las sociedades complejas. Desde el punto de vista societario hay tantos sujetos como formas estructuradas de organización social según ejes articuladores como el modo de producción (clases sociales y estratos), las relaciones comunitarias con el Estado (naciones), relaciones de género (mujeres y hombres), generacionales, funcionales (estudiantes), territoriales (mundo urbano y rural) y organizaciones por sensibilidades sociales, políticas o religiosas (ecologismo, antiracismo, pacifismo...). Todas estos sujetos se expresan en movimientos, de hecho especializados, ya sean organizados o espontáneos, estructurados o puntuales, sin que ninguno debiera arrogarse un papel central o subsumidor del resto.

Realmente la centralidad en el cambio social se juega, en última instancia, en el plano político —el lugar de la exposición, confrontación y resolución de los conflictos centrales en el cambio político y social— y ahí lo que se expresan son movimientos políticos del *establishment* o de oposición ya sean movimientos políticos organizados, partidos, colectivos, o movimientos políticos espontáneos y puntuales. Estos son los sujetos históricos del cambio social.

En segundo lugar las reivindicaciones nacionales y sociales, aun siendo distintas, están relacionadas por el simple hecho de que las personas somos pluridimensionales y que los movimientos no son compartimentos estancos. Se trasversalizan entre sí. Puede haber tantas formaciones políticas como cruces entre los ejes principales.

En tercer lugar, el término nacionalismo se identifica hoy todavía con las corrientes etnicistas y potencialmente etnocráticas. Para el nacionalismo, tal y

⁹ También emergen movimientos referenciales espirituales (religiosos) que luego se desparraman en otros movimientos sociales y políticos, así como movimientos más parciales (pacifismo, antimilitarismo, antiracismo...).

como está configurado, la identidad colectiva sería menos la expresión del Pueblo, actual y real, y que permitiría indicar las fronteras culturales y societarias exteriores, como la identidad étnica y lingüística –vividá como posesión o también como sentimiento de carencia o agónica–. A partir de ahí la nacionalidad no sería un hecho de vecindad continuada sino la identificación con el discurso sobre la etnicidad, recreando artificialmente fronteras interiores (nacionalistas/españolistas) que ayudan poco a la construcción de una cultura nacional incluyente /10.

Las connotaciones etnocráticas son de imposible aceptación para la tradición de izquierda. La izquierda históricamente ha defendido la radicalización de la democracia política –la implicación política de la ciudadanía convertida en sujeto activo– y su extensión al plano social, evitando el divorcio entre ámbito de representación y ámbito vivencial. Más que representar a la nación como abstracción, un programa coherente de izquierda habría de buscar, mediante el liderazgo tanto en los aspectos nacionalitarios como sociales, representar a las mayorías, con su propio proyecto nacional. No propugnaría sin más un nuevo Estado-nación sino su proyecto de Estado-nación y, en su momento, su proyecto de superación de la forma Estado-nación. Un proyecto socialista en una nación sin Estado por fuerza debiera ser, además de socialista, un proyecto nacional, integrador e identitario, en claves simultáneas de programa nacionalitario y de sociedad civil real.

La soberanía

El concepto de nación nace vinculado a la construcción de los Estados modernos. La nación en la Historia es el resultado de fenómenos diferentes: una aspiración, reivindicación política o deseo de construcción de un Estado (caso de las naciones periféricas y de muchos Estados modernos) o el producto del Estado mismo. Ambas manifestaciones conectan con las tradiciones francesa (el Estado crea la nación /11) y germana (la nación da lugar al Estado). En todos los casos, la nación es la expresión política, al mismo tiempo, de la búsqueda de

10/ El nacionalismo, tal y como se ha configurado, es una ideología que se apropia en exclusiva de un sentimiento social de pertenencia y la proyecta en el plano político cuestionando no ya sólo el patriotismo de quien no se sitúe en el arco nacionalista actual sino también su lugar social, aunque no su ciudadanía. Traslada el legítimo nosotros/ellos desde las fronteras exteriores a las fronteras interiores, produciendo desagregación social. El irracionalismo del planteamiento –la apelación psicológica a la inclusión o autoexclusión de la auténtica comunidad en un ámbito tan racional como la política– permite autentificar, en nombre de esa forma de construcción nacional, como acertada cualquier decisión política. La política serían menos los programas como la ideología y la práctica simbólica. En el umbral del siglo XXI todos los nacionalismos se plantean el reto de su remozamiento por ese chirrido entre identidad nacional e identidades internas, entre etnicidad e integración social global, entre democracia política y ciudadanía igualitaria.

En la izquierda histórica el problema es el contrario: la ausencia de un discurso sobre la construcción del sujeto “comunidad nacional minoritaria”.

11/ Como decía Rafael Ribó, “En la Revolución Francesa, la Nación pasa de ser una comunidad de costumbres a una comunidad de voluntades (...) La burguesía, clase revolucionaria, encontró en el concepto de nación el fundamento de su poder político. La abstracta igualdad de todos los ciudadanos de la nación cierra las barreras a los privilegios de sangre”. R. Ribó “Conceptes politics i realitat nacional”, *Taula de canvi* nº 3. Ediciones Claridad. Barcelona 1976 pg 39.

alguna forma de construcción de un Estado y la manifestación organizada y política de la identidad colectiva, entendida como evidencia subjetiva compartida. La producción de identidad y construcción nacional o estatal se identifican /12.

La construcción nacional y de la identidad no son productos naturales de elementos objetivos previos (territorio, lengua, cultura, instituciones, historia...) sino producciones sociales posibles que aunque busquen legitimarse en hechos de la experiencia comunitaria, su expresión real y fortuna depende del marco histórico-estructural en el que se desenvuelven (impacto de la industrialización tanto sobre la comunidad como sobre sus clases, impacto interno de la modalidad de la unificación del mercado y de uniformación del Estado) y de factores activos y subjetivos capaces de generar un proyecto hegemónico (impulso organizativo, capacidad de las élites para liderar un movimiento de masas, conciencia compartida de identidad nacional, estrategia acertada..).

No hay un hilo de necesidad histórica entre etnia y nación, pues hay naciones multiétnicas. Pero ha sido corriente en la historia de las naciones europeas que se construyeran desde la hegemonía de la burguesía y la solidaridad del grupo étnico dominante. Con la consciencia de su identidad, y mediante un ejercicio de poder sobre otras etnias, se buscaba construir un Estado unitario más o menos compartido. Hasta hoy esa pretensión es lo que caracteriza a la nación. Quien lideraba la construcción de la nación era un movimiento nacionalista, entendido en sentido amplio. Tampoco ha sido de otro modo la construcción de la nación-Estado de naciones española con base en la identidad castellana.

La construcción de la nación política pluriétnica desde el Estado es quebradiza si no hay una integración plena de las minorías en el modelo de organización territorial del Estado. La democracia es más vulnerable, por su propia naturaleza política a las reivindicaciones de autodeterminación planteadas desde la contralógica racionalista y de soberanía popular de los movimientos nacionalitarios. Al fin y al cabo la autodeterminación no es sino una variante de la soberanía popular.

Son precisamente las limitaciones del Estado-nación para integrar políticamente a las comunidades diferenciadas que se piensan a sí mismas como "naciones culturales", las que fundamentan la reivindicación de construir las "naciones políticas" soberanas, y en las que se ejercería, precisamente, la soberanía popular.

La globalización de las relaciones económicas y políticas internacionales, la configuración de macroespacios de naciones, los riesgos de dilución de identidades o la generación de marginaciones en los grandes ejes de construcción

12/ Como señala J. Habermas en *Identidades nacionales y postnacionales*. Tecnos, Madrid 1989, pg 89." El nacionalismo, tal y como se desarrolló en Europa desde fines del siglo XVIII, es una forma específicamente moderna de identidad colectiva. Tras la ruptura con el Ancien Regime (..) los individuos se emancipan en el marco de libertades ciudadanas abstractas. La masa de los individuos así liberados se torna móvil, no sólo políticamente como ciudadanos, sino económicamente como fuerza de trabajo, militarmente como obligados al servicio militar y, también, culturalmente como sujetos a una educación escolar obligatoria, que aprenden a leer y escribir y se ven arrastrados así por el remolino de la comunicación y cultura de masas. En esta situación es el nacionalismo el que viene a satisfacer las necesidades de nuevas identificaciones."

del mundo, alientan hoy dos fenómenos que no tienen por qué ir juntos pero cuyo maridaje sería deseable: la reivindicación y búsqueda de institucionalización del pluralismo y la vuelta a espacios más humanos, sociables, gestionables e identificables.

Una reflexión ecléctica sobre paradigmas de cohesión

Asistimos hoy a un notable debilitamiento de los lazos sociales. La afirmación de lo privado —el refugio en lo particular y cercano— junto con el desarrollo de una vida asociativa conformista son aspectos dominantes de nuestras sociedades postmodernas.

Las rupturas del sentido de pertenencia y las racionalizaciones de la insolidaridad, protagonizadas por aquéllos que han decidido que la sociedad ha de ser formalmente desmenuzada, perjudican a los débiles, a los que sí necesitan la cobertura colectiva. En una sociedad atomizada y con un poder político apropiado por los poderosos, la desigualdad se convierte en estado de naturaleza.

Con todo, los dos viejos proyectos cohesionadores, la comunidad republicana de los ciudadanos políticamente activos y la comunidad socialista solidaria, siguen actuando felizmente como horizonte de referencia de las ideologías y prácticas. Sin embargo, a esos grandes referentes habría que despojarles de toda pretensión impositiva, excluyente (recordemos historias demasiado recientes) y de toda posibilidad de que el Estado nos sustituya porque ha decidido que nadie mejor que él representa nuestros auténticos pero ocultos deseos de ser responsables ciudadanos y cooperativos trabajadores. La república socialista nunca puede plantearse como un remedio a los irresponsables egoísmos del ser humano. La participación política y la igualdad vivida como una segunda naturaleza, han de ser la expresión colectiva del convencimiento y rutina de unas virtudes públicas trabajosamente conquistadas.

Cualquier proyecto de cohesión social debería construirse a partir del pluralismo, a partir de la convicción de que cada uno de los individuos tiene derecho a optar libremente acerca de cómo debe transformar o mantener su vida, respetando la ajena.

Para dar entrada a ese pluralismo hay una tercera vía en la cohesión social. La de la sociedad civil. El proyecto **13** hoy profusamente defendido desde los más dispares lugares propugna la superación de la anomía, uniformización e indiferencia de los individuos, a través de un activo y plural asociacionismo. La sociedad civil como red de múltiples instancias organizadas que se sitúa en medio del Estado y del individuo, que opera como amortiguador de las tendencias intervencionistas del Estado y que otorga al individuo múltiples posibilidades de desarrollar distintas y enriquecedoras identidades colectivas.

Sin embargo se exagera cuando algunos presentan el asociacionismo como

13/ Sobre las definiciones, virtudes y defectos de la sociedad civil, ver los recientes artículos de M. Walzser y H. Dubiel en *Debats*.

perfecto, extenso (toda la sociedad se teje), variado, democrático, profundo y sobre todo equilibrado e igualitario. El problema no es sólo que ese escenario asociativo ideal no exista, sino que ni siquiera está claro que pueda otorgar un sentido de pertenencia eficaz, realmente cohesionador. El riesgo de una voluntaria disolución social, no desaparece. Sólo se desplaza. Si antes era el individuo quién se sentía tentado de abandonar la sociedad política, ahora el protagonista de este desprecio a la comunidad amplia puede ser cada grupo, cada asociación que respetaría sólo lo que le conceda el poder político y si puede, combatirá a las otras asociaciones o grupos. El asociacionismo realmente existente –con significativas excepciones– es imperfecto, limitado, parecido, burocratizado, poco significativo, y sobre todo profundamente desigual y desequilibrado. La asociación de los fuertes desequilibra a los débiles.

El pluralismo es una condición necesaria para construir una sociedad solidaria pero no suficiente. En las plurales sociedades occidentales hay más uniformidad que variedad, más autoritarismo que participación y mucha más desigualdad que equidad aunque haya cada vez más asociacionismo.

Una cuarta vía, el nacionalismo, es, sin duda, uno de los grandes proyectos cohesionadores, pero presenta otros problemas. En el nacionalismo tradicional al exclusivizar aparentemente la nación se practican actos de selección. Se afirman sólo unos rasgos de la comunidad, y no otros. Son los rasgos nacionales. Se pretende construir una identidad colectiva densa, un espacio en que los individuos se sientan emotivamente unidos, semejantes, compartiendo los mismos rasgos constituyentes de la comunidad nacional. Para que sea funcional la cohesión social derivada del discurso y praxis nacionalista, se pretende un “nosotros” fuerte, percibido como común y como distinto a otros.

Sin embargo, la elección implica exclusión e intolerancia porque se afirma que quien no defiende unos determinados rasgos no es miembro de esa comunidad nacional que se mira en el espejo de la comunidad primordial idealizada. El nacionalismo tradicional tiene dificultades con el pluralismo. Y algunos tipos de nacionalismo tienen dificultades absolutamente insalvables.

¿Es así necesariamente? /14. Lo nacional en las comunidades privadas de soberanía, en el proceso de autoconstitución, pueden además de generar un fuerte sentido de pertenencia, ahondar en el pluralismo. El hecho nacional puede ser concebido como un “conjunto de individuos que quieren decidir sobre el futuro político de su territorio e identidad”. El “nosotros” no se definiría por un contenido prefijado –hay clases e ideologías– sino por la coincidencia en el orgullo de formar parte de una comunidad que comparte el deseo/proyecto de querer recrear su identidad propia en un mundo transnacionalizado y homogenizante y de poder decidir –no sin fuertes contradicciones y tensiones

14/ En el caso del País Vasco, en el propio PNV se ha abierto un período de reflexión sobre el nacionalismo del siglo XXI. Junto a razones de oportunidad –prepararse a mantener una cierta hegemonía–, se percibe que la sociedad es plural, que bajo la identidad nacional conviven identidades múltiples en las sociedades urbanas, que hay un desajuste entre la percepción étnica al uso y modernidad, se parte del mestizaje –el lehendakari dixit–, se advierte que la igualdad de derechos políticos entre la ciudadanía vasca chirría con una diferenciación social por comunidades étnicas o por adscripciones políticas (más y menos vascos, abertzales /no abertzales). Ver AAVV *Euskadi en la Unión Europea*, Fundación Sabino Arana, 1994.

internas— su futuro político, su autogobierno, con unas relaciones libres con otros pueblos.

Esa convicción común de construcción nacional deja de ser una ideología global y alternativa a otros grandes paradigmas, para estar imbuida por ellas a la hora de la formulación de un proyecto de sociedad. Con todo, la etnia deja de ser el fundamento nacional aunque se promueva su adaptación si ha sufrido los rigores de un largo aplastamiento. El fundamento es la comunidad tal cual es aunque, a partir de ahí, hay distintas y contrapuestas formas de concebirla y viabilizarla.

Esa manera de pensar la cuestión nacional es pluralista y tolerante porque el lazo de unión no es la definición de la identidad o la concreta opción política (independencia, confederación, autonomía, etc.) sino el querer poder decidir como consecuencia natural de las vivencias comunitarias y de la convicción de una soberanía popular específica.

Es suficientemente cohesionadora. No tan cohesionadora como una concepción etnicista (peligrosamente esencialista), ni tan poco atractiva y “enlazadora”, como una concepción estrictamente territorial. Es suficientemente ilusionante y animadora de un sólido “nosotros”. Al fin y al cabo reclamar la libertad, la capacidad de decidir entre todos, afirmar que “somos nosotros porque somos los que queremos ser libres” es —de hecho ya lo es— un proyecto nacional aglutinador.

Si la izquierda termina por comprender la cuestión nacional tiene ahí —no sólo ahí— oportunidades importantes porque sabe convivir mejor con el pluralismo, con la cohesión de una sociedad civil densa y de asociacionismo extenso, que paralice las tendencias disgregadoras existentes —que acrecientan la desigualdad— y porque puede racionalizarla. Puede potenciar el proyecto a largo plazo de la izquierda, acercar ese horizonte de república radicalmente democrática y socialista. Un discurso nacionalitario desde la demanda de libertad política, limita cualquier aventura nacionalista sectaria, y potencia asociaciones que prefiguran, promueven en su seno esa sociedad participativa y cooperativa del futuro. El sentido de pertenecer todos a una misma comunidad con reivindicaciones políticas centrales pendientes facilita la defensa de los niveles de igualdad existentes.

La nación política: federalismo versus confederalismo

La exigencia del derecho y del poder de autodeterminación se habría de expresar en un reconocimiento de soberanía sin restricciones pero también en propuestas que tomen en consideración los contextos objetivos actuales en todos los planos.

Con lo dicho parece obvia la insatisfacción que, como punto de partida, supondría un modelo federal basado en la soberanía global del pueblo español y que aparezca como una distribución funcional y política desde un impuesto Estado común. El punto de vista de partida es el Estado. Además, desde esa premisa, es presumible que el reconocimiento del “hecho diferencial” catalán, gallego o vasco, significaría —tras una eventual reforma constitucional, por cierto, bastante imprevisible con la derecha tradicional en el Poder— sólo el recorrido desde el Estado unitario regional —que es el Estado de las Autonomías— a un Estado federal indiferenciado —el café para todos— de nacionalidades y regiones. Seguiría

habiendo cuestión nacional para rato, incluso en el caso de una geometría variable, federal para las nacionalidades, autonómica para las regiones. De todos modos, aunque algo se hubiera avanzado.

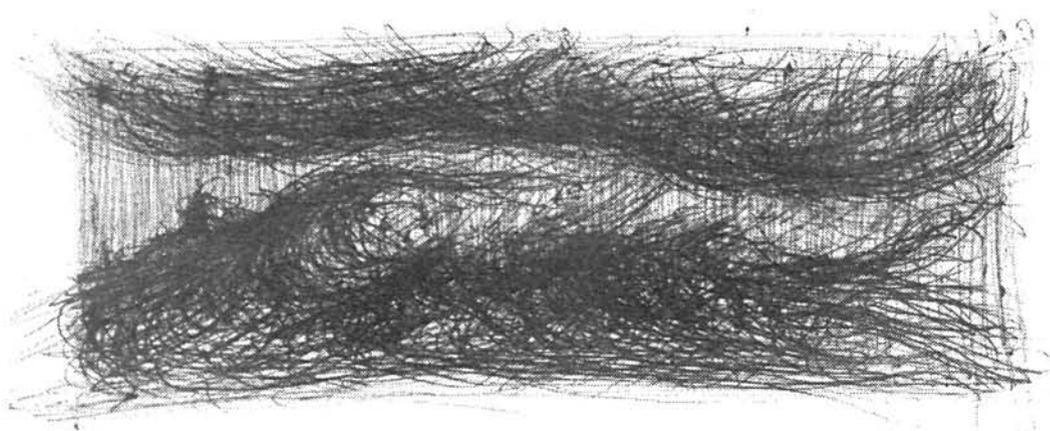
Por otra parte y como punto de partida, la reivindicación de independencia, entendida no como soberanía sino como el establecimiento de un nuevo Estado absolutamente independiente, fronteras incluídas, aun cuando aceptable y legítimo si lo quiere una nacionalidad en el ejercicio de la autodeterminación, casa mal con varios hechos: la improbabilidad de una ruptura política pacífica y sin ruido notorio de sables; la improbabilidad de apoyo popular a una iniciativa con graves incertidumbres en un período prolongado de crisis del modelo de acumulación; la fuerte integración en el mercado e institucionalización económica española; y lo dudoso de que ello significara una rápida aceptación de un nuevo Estado independiente como nueva nación europea y como "región económica europea".

Parece más sensato como punto de partida estratégico —junto a la puesta en primer plano de la soberanía y consiguiente derecho de autodeterminación— la propuesta de un modelo confederal, que implica una unión pactada de Estados soberanos con algunos órganos comunes y algunas competencias centralizadas por acuerdo. El modelo puede ser útil para la normalización de relaciones entre pueblos. Además, en lugar de etapizar la afirmación de la soberanía e independencia y la opción, posterior, por un modelo confederal, ambos pueden constituir un momento único, de autoafirmación soberana como nuevo Estado-nación y de compartición de algunas competencias.

En el plano práctico y tras una experiencia compartida, también es verdad que ese modelo ha tendido históricamente a orientarse —ante las urgencias de la política, de la economía y de las relaciones internacionales— a derivar hacia un modelo federal —es el caso de USA y Suiza /15— o hacia la independencia, en caso de una experiencia negativa de lo federal o confederal (Checoslovaquia, Yugoslavia, ex-URSS). Ni una cosa ni la otra son preocupantes si son el producto de una evolución natural y pacífica.

En el caso vasco, un modelo confederal cooperativo tanto en España como —y es bastante más complicado— en Francia, pueden ser una experiencia de transición hacia una integración de Euskal Herria como un todo, federado en una UE políticamente más consolidada. Desde una perspectiva de izquierda todo ello debiera ir indisolublemente unido a una definición interna de un modelo democrático en profundidad y a un proyecto solidario por cambiar en el mismo sentido, junto con las capas progresistas de otros pueblos, tanto España, Francia como Europa.

15/ Ver C.R. Aguilera, P.Vilanova *Temas de ciencia política*. PPU, Barcelona 1987.



2 España, ¿una?

Alternativas al Estado español

Javier González Pulido

España es el nombre de un Estado plurinacional y, a la vez, de una comunidad política nacional, desigualmente extendida por todo su territorio. Dentro del Estado amplias franjas de población se consideran pertenecientes a las naciones catalana, vasca, andaluza, gallega o canaria. Simultáneamente, otros sectores —que incluyen también cierta cantidad de vascos, catalanes o andaluces...— se definen miembros de la nación española. Ambas vías políticas de construcción nacional reclaman para sus respectivas naciones el reconocimiento de su soberanía nacional, es decir, su capacidad para autoorganizar nacionalmente el conjunto de la vida social y el derecho a decidir libremente su modelo de estructuración política. El proyecto nacional español y los proyectos nacionales alternativos coexisten dialécticamente en el espacio y en el tiempo. Su pugna se desarrolla no sólo en el ámbito del Estado sino también en el de la sociedad civil. Sin embargo, el núcleo del conflicto nacional vigente radica en la permanencia de un Estado español basado en el monopolio de la Soberanía Nacional por la nación española y su consecuente negación absoluta a las otras naciones existentes. Todo ello ocurre en una realidad interna de aguda y creciente desigualdad social e interterritorial; herencia viva del modelo histórico de desarrollo capitalista español, que a su vez se sumerge en un contexto de pertenencia subordinada a la Unión Europea e integración en el mercado mundial.

El Estado de las Autonomías

Merced a lo que se conoció como “política de consenso”, la burguesía española pudo hegemonizar y dirigir el proceso de transición política. El Estado de las Autonomías, definido en la Constitución de 1978, es consecuencia y

manifestación de esa victoria política. La Constitución concedía la autonomía dentro de los límites prefijados por el Parlamento español, al tiempo que negaba el derecho a la soberanía y autodeterminación. Preveía un mismo techo de competencias máximas para todas las comunidades, aunque no una misma vía ni un mismo nivel inicial para todas ellas. El ritmo y la concreción del techo quedaba a expensas de la evolución de la correlación de fuerzas políticas.

El objetivo del pacto constituyente era otorgar un estatus singular a aquellas nacionalidades (Cataluña, Euskadi) cuyas aspiraciones políticas podían chocar con los márgenes constitucionales; compensando e integrando mediante esta diferenciación la insatisfacción de sus reivindicaciones de soberanía. No tuvo en cuenta que, como en ocasiones históricas precedentes, la agitación del modelo de Estado favorecía que se produjeran en otros países del Estado, como Andalucía, procesos de politización de la identidad nacional y de demanda de poder propio. La secuencia política andaluza que lleva del 4 de Diciembre de 1977 al 28 de Febrero de 1980 desbarató la prevista separación de rangos. Todos los estatutos aprobados compartieron, no obstante, instituciones nacionales subordinadas al Gobierno y al Parlamento español, sin poder sobre cuestiones fundamentales y sin capacidad para gobernar sus naciones en función de la voluntad soberana de sus pueblos respectivos.

La tan cacareada flexibilidad del Estado de las Autonomías radica en que éste permite explícitamente en su letra y en su espíritu tanto una lectura armonizadora a la baja, restrictiva del autogobierno; como la instauración de situaciones de privilegio nacional con las que compensar su no cuestionamiento. Las dos opciones constitucionales niegan la libertad de decisión de las nacionalidades y potencian la desigualdad interterritorial. La LOAPA (sostenida en su día por UCD-PSOE) se correspondía a la primera; el pacto autonómico PSOE-PP y los acuerdos de financiación anexos combinaban los efectos nefastos de ambas; la alianza actual González-Pujol-Arzallus se inspira en la segunda. En los tres escenarios los jugadores activos o pasivos son los mismos que diseñaron el actual modelo de Estado: los partidos españolistas y los partidos nacionalistas burgueses de Euskadi y Cataluña. A Andalucía se le adjudica siempre el papel de espectadora sufriente.

Nueva fase

Vivimos en un momento de reordenación del Estado de las Autonomías. La periódica constatación de sus límites; los acuerdos PSOE-CiU-PNV y las perspectivas de ascenso electoral del PP provocan, en suma, una general readecuación de posiciones.

El PSOE, atado por su colaboración con CiU-PNV, se ha visto forzado a dejar de usar el "agravio comparativo" en Andalucía y ha de contemplar como una parte de su electorado más españolista emigra hacia el PP. Ya no esgrime sus planteamientos teóricos favorables al federalismo cooperativo, es decir, la defensa del cierre del proceso autonómico mediante la uniformización centralizada de competencias de las actuales 17 comunidades autónomas. Hoy se define partidario del mantenimiento del Estado de las Autonomías, con reformas cosméticas como la del Senado.

El PP retoma reelaborado parte del discurso abandonado por el PSOE. Pretende abanderar el "agravio"; asume planteamientos pseudofederales (Administración Única) que liga también al cierre del modelo a la vez que reivindica provocadoramente el nacionalismo español tanto dentro como fuera de Euskadi y Catalunya. Todo ellos como forma de incordiar a PNV-CiU. Simultáneamente, abre discretas vías de contacto con ambos para prevenir futuras necesidades de asistencia parlamentaria.

En la práctica y a pesar de excesos y matices retóricos, tanto el PNV como CiU se manifiestan hoy cómodos y satisfechos dentro del Estado de las Autonomías. No aspirando realmente a la soberanía nacional de sus países respectivos la relativa indefinición del actual modelo les permite, sin embargo, institucionalizar una dinámica de negociación política bilateral propia con Madrid con la que obtener un trato singular. Esta forma de relación les resulta útil para mantener bajo control en clave *victimista* las ansias de sus bases sociales nacionalistas y para hacer valer sus propuestas neoliberales. No hay que olvidar que, aún habiendo auspiciado en su día la aprobación en los Parlamentos catalán y vasco de sendas declaraciones a favor del derecho a la autodeterminación, nunca han hecho el menor esfuerzo por convertirlas en iniciativas políticas concretas.

Otras fuerzas como los andalucistas, valencianistas o los insularistas canarios no traspasan el nivel del regionalismo español. Definiéndose españoles, viven a cuenta del agravio comparativo con Catalunya y Euskadi sin cuestionar para nada el Estado de las Autonomías; implorando la benevolencia de Madrid y aún ofertándose en caso de necesidad como cobertura a regresiones centralistas.

El enredo federalista

Federalismo es un concepto políticamente polisémico **/1**. Hasta el punto de que puede acoger bajo su manto posiciones centralistas, federalistas, confederales y hasta independentistas; con una variada gama de matices intermedios, según los países desde donde se expresen o las orientaciones sociales que se defiendan. En el debate político actual esa es su virtud y su peligro.

Sin embargo, orientarse en esta maraña no es difícil. La raya divisoria para situar a quienes asumen la realidad plurinacional y pretenden darle una respuesta "republicana" (es decir, democrática radical) y a quienes por el contrario sólo aspiran, por el momento, a remozar el viejo Estado es bien concreta: luchar o no porque el Estado español reconozca la Soberanía Nacional de Andalucía **/2**,

1/ Ver, Rafael Torrent, *Dos federalismos y su pugna en España*, Dopesa, Barcelona, 1974; José A. González, *Federalismo y Autonomía. Cataluña y el Estado español 1868-1938*, Crítica, Barcelona, 1979; Juan A. Lacomba, *Regionalismo y autonomía en la Andalucía contemporánea (1835-1936)*, Caja Gral. de Ahorros, Granada, 1988.

2/ Resulta útil citar al respecto la posición aprobada por Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía: "Constatando las insuficiencias y el agotamiento del modelo del Estado de las Autonomías, auspiciar un proceso de debate político y movilización social articulado en torno a la obtención de un Poder Andaluz real, a partir de una reforma del Estatuto y la Constitución española que reconozca la Soberanía Nacional de Andalucía; permitiendo así que sea el pueblo andaluz quien determine democráticamente el alcance de las competencias a asumir o a ceder y el tipo y forma de relaciones a establecer con las otras nacionalidades y pueblos del Estado español. Un poder que favorezca la participación y el control popular a partir de la descentralización y la potenciación de los ámbitos de decisión locales y comarcales", *Una propuesta para Andalucía*, pag. 10, VIII Asamblea de IU-CA, Sevilla, Diciembre 1993.

Canarias, Catalunya, Euskadi y Galiza, reformándose en tal sentido Constitución (incluido obviamente su Título Preliminar) y Estatutos. Un federalismo republicano consecuente ha de declararse compatible y respetuoso tanto con una relación federal como confederal o de otro tipo. Ha de manifestarse abierto al debate sobre fusión o federación de Comunidades Autónomas actualmente existentes, allá donde existan motivaciones históricas o políticas para ello: Vascongadas-Navarra; Países Catalanes; las Castillas-Madrid...; siempre contando con el principio de respeto a la voluntad democráticamente expresada de los pueblos afectados. La definición completa final dependerá de cómo se haya desarrollado políticamente el proceso constituyente de sustitución del Estado de las Autonomías.

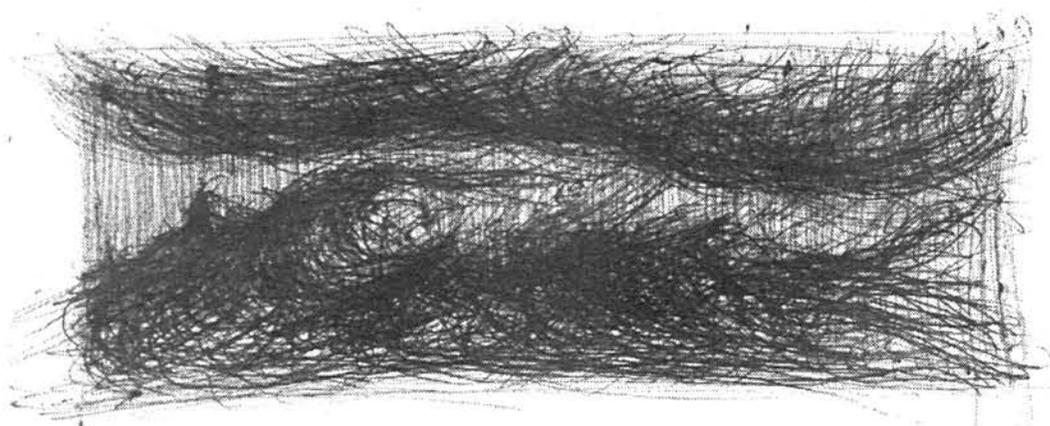
Un federalismo socialista (es decir, anticapitalista), además, ha de apostar por liderar ese proceso basándose prioritariamente en la movilización y participación social y no en el consenso interinstitucional, relacionando demandas sociales concretas y propuestas de soberanía; pensándolo de abajo a arriba y no de arriba a abajo; gestionándolo nacionalmente desde la descentralización política al tiempo que inspirándose en la solidaridad. Considerando que la solidaridad entre países ricos y pobres incluidos forzosamente en el mismo Estado, no puede ser impuesta coactivamente desde fuera, dando así argumentos a posiciones chauvinistas, sino ganada políticamente desde dentro merced a la acción de la izquierda del país.

La orientación aprobada por la reciente IV Asamblea Federal de Izquierda Unida —aunque el debate inevitable seguirá abierto— aún no se inspira totalmente en estos criterios. Ni la aritmética parlamentaria previsible ni la geometría política avalan, sin embargo, propósitos que presentándose como más modestos pretenden ser viables: ni PSOE, ni PP, ni CiU-PNV están por la labor de ir más allá de reformar parcialmente el actual Senado. Es pues fuera del Parlamento español, en la sociedad y en las instituciones autonómicas, donde cabe centrar el eje de actuación, en términos políticos de medio plazo y no coyunturales.

Andalucía y el Estado español.

Las aspiraciones de una sociedad andaluza alternativa, democrática radical, socialista y ecológicamente sostenible, requieren y van unidas a su consolidación como nación. Una relación sana y fraternal con las otras naciones del Estado, sin complejos de inferioridad ni falsas cuentas pendientes, también exigen su conformación como nación. Un trato digno y justo con el Estado, que permita la paulatina devolución de lo que históricamente se expolió, reclama su configuración como nación. La misma alternativa al Estado español actual es social y políticamente inviable sin la nación andaluza. Impedir que el proceso de Unión Europea se haga a costa de instalar a Andalucía en la subalternidad conlleva que avance el proyecto nacional andaluz.

Contando con que la solidaridad no es una seguridad, sino una dura y cotidiana tarea que para fructificar ha de ser de ida y vuelta y que el internacionalismo nada tiene que ver con el desarraigo cosmopolita, la izquierda andaluza ha de ser nacionalista. Es la única fuerza social que puede y debe serlo.



3 España, ¿una?

¿España, una y de izquierdas?

Joxe Iriarte Bikila

A José Borrás, andaluz de nacimiento, catalán por deseo propio, internacionalista por convicción

En los últimos tiempos, tanto la derecha como la izquierda española vienen desplegando un discurso donde el exclusivismo nacional y el nacionalismo tendrían que ver sólo con las formaciones vascas, gallegas y catalanas que así se autodenominan, más algunos grupos fascistoides de la extrema derecha española.

Parece ser que pasaron aquellos tiempos donde los del PSOE hinchaban orgullosos el pecho cuando la prensa europea les denominaba "los nuevos nacionalistas españoles" Hoy en día, nadie quiere ser tachado de nacionalista, ni siquiera el PP. El mismo Anguita, polemista frecuente de los nacionalismos llamados periféricos, gusta de ser considerado como un español federalista.

Estado y nación

Uno que se considera de izquierdas, internacionalista y también abertzale vasco no tendría, en principio, que poner objeción alguna a esa autoconsideración. Quien se considera español y quiere para su país un modelo de organización federal, reciba mis parabienes más sinceros. El problema surge, al definir y concretar lo que se entiende por España. Muchos son los que pensamos, por ejemplo en Euskadi, que lo que hoy se denomina España no es una nación, ni tampoco una "nación de naciones", sino un Estado mal llamado nacional, pues en su territorio hay

diferentes naciones donde la parte mayoritaria de su población no se considera española ni se siente representada por este Estado, cuyo carácter de *cárcel de pueblos* no ha sido alterado en lo sustancial en su paso de Estado centralista al Estado llamado de "las autonomías".

De hecho, quienes más se empeñan en que vascos, catalanes, gallegos etc..., seamos considerados como españoles, son los que con más frecuencia se sublevan ante cualquier manifestación coherente con esa opinión. En un sabroso diálogo literario sobre la "España imposible", le decía Javier Ortiz a un supuesto demócrata español: "Hablas de España como si fuera un ámbito colectivo de convivencia común de catalanes, vascos, gallegos, castellanos, canarios, asturianos, etc..., tenidos todos ellos por iguales en consideración y derechos (...) pero en la práctica, identificas a España con el bloque de pueblos de habla exclusivamente castellana. Para ti es en ellos donde reside la esencia de España (...) te crees un cosmopolita, pero no eres más que un nacionalista español que lo hace, pero que no lo sabe".

No son tan lejanos los días donde a vascos y catalanes al oírnos hablar en nuestra lengua se nos imprecaba con el: "¡español habla en cristiano!". Como ilustración de que la cosa no es algo del pasado, basta ver como se entiende lo español hoy en día, y observar sus repercusiones en materia lingüística. La defensa del idioma español "dentro de territorio nacional", planteada al Gobierno español por parte de Lázaro Carreter, presidente de la Real Academia de la Lengua Española ilustra perfectamente el problema. En teoría, todas las lenguas existentes en el Estado español son españolas, pero en la práctica y en la conciencia del "español típico", lo verdaderamente español es el castellano, la única lengua obligatoria y susceptible de ser defendida por el "Gobierno nacional". Las otras, son sólo de una parte de "España" no obligan al Estado ni a los españoles, sólo son un derecho para los vascos, gallegos y catalanes que así lo reclamen.

Caso de existir una nación llamada España —pues a nadie vamos a negar tal como se hace con nosotros, el derecho a considerarse nación— tendría que quedar claro que esta abarcaría sólo una parte de lo que hoy es el Estado español.

Opresión nacional

Por eso el problema se complica cuando del debate teórico histórico se pasa a lo político, y las propuestas llamadas federalistas (las llamadas autonomistas para que mentarlas) anteponen la unidad estatal existente al ejercicio previo del derecho de autodeterminación. Esta punto de vista demuestra que poco o nada ha aprendido sobre como debe de actuar una izquierda que se precie, allí donde hay opresión nacional; por más que esa opresión no sea en la actualidad del mismo estilo que durante la dictadura. Digo opresión nacional y no "déficit democrático" o cosas por el estilo, por entender que el problema es de raíz, de punto de partida. Si la Constitución excluye el ejercicio de la autodeterminación para las nacionalidades que para sí lo reivindican, a la vez que adjudica a las FFAA el papel de garante de la "unidad nacional", se establece una unidad forzada, por más que esa unidad admita autonomías internas, un cierto reparto del poder y satisfaga algunas de las aspiraciones de las nacionalidades mal llamadas "periféricas". Por

ello, no cabe hablar de proyecto común para las distintas naciones, que se llame España; y de existir el mismo tendría que ser uno verdaderamente plurinacional, reconociendo que la soberanía parte de cada nación, que una vez autodeterminada delega en las instancias plurinacionales las competencias y poderes que considere convenientes.

En consecuencia, gentes como Anguita no parecen darse cuenta de que sus ínfulas contra Pujol, Arzallus y compañía en lo nacional (no entro en considerar otro tipo de críticas) están mal dirigidas, y la mayoría de las veces formuladas desde valores ideológicos que pertenecen a la más rancia burguesía española. Una burguesía con *derechona* propia que, en casos como estos, aplaude con entusiasmo desde la barrera viendo como *su* izquierda se pelea con los nacionalismos periféricos.

Por otro lado, las opiniones de ese estilo favorecen a quienes desde los nacionalismos vasco, catalán, gallego, etc..., afirman que toda izquierda de ámbito estatal está irremediabilmente condenada a hacer causa común con el nacionalismo español y con la idea nacional de España excluyente y opresora del resto de las nacionalidades. Para ello sacan a colación la famosa sentencia de Calvo Sotelo: "antes una España roja que rota". Sentencia lanzada en un contexto muy concreto, que no es norma general, ni siquiera para una burguesía como la española.

De hecho, las burguesías vasca y catalana, que en su momento se aprovecharon de dicha idea para afirmar que "un español sea de derechas o de izquierdas, siempre será español por encima de otra consideración", hoy en día, practican todo tipo de alianzas con izquierdas y derechas españolas para defender la estabilidad política y social conformada en torno al pacto de la Constitución.

Socialismo y libertad nacional

Fue un comunista vasco, llamado Larrañaga, quien en su tiempo respondió certeramente a Calvo Sotelo y las burguesías vascas y catalana, y a él recurrimos para responder a quienes hoy se empeñan en que la dicotomía siga funcionando: "Una España roja es una España rota". Es decir, una transformación social profunda no debería limitarse a acabar con la explotación capitalista, debería resolver el litigio de las nacionalidades oprimidas, reconociéndose el derecho de autodeterminación. Toda idea de España que fuese incompatible con esta exigencia, tendría que ser rechazada.

Dejando de lado el debate histórico sobre si la respuesta de Larrañaga era o no compatible con la política de su partido en aquel entonces (yo creo que no) y de como evolucionó el modelo en el cual se inspiraba (el soviético), lo importante es reseñar que una izquierda liberadora no puede hacer suya la idea de España si ello le exige hacer causa común con más de 500 años de construcción nacional de tipo imperialista. Y opinión es que un punto de vista emancipador no puede defender la idea de España como un todo nacional que agrupe a vascos, catalanes, gallegos, castellanos, andaluces, etc...

La razón es clara. Ese proyecto de españolidad siempre ha sido contestado desde varios ámbitos y con distintos grados de enfrentamiento, sobre todo en lo que va de este siglo y desde el momento que los nacionalismos contrarios al español plantean otros proyectos nacionales alternativos.

Independencia para Euskadi

Por mi parte estoy convencido que la independencia nacional, por lo menos en el caso de los vascos, es un paso obligado para restañar heridas y recomponer relaciones. Que este paso se dé de mutuo acuerdo entre las partes, como el caso checo-eslovaco mejor que mejor. El hecho de que el independentismo político haya descendido respecto a los primeros años de la transición, no puede hacernos olvidar que sigue siendo un deseo alimentado por mucha gente, que hoy no lo reclama por diferentes razones, pero que lo considera deseable y necesario para su construcción definitiva en tanto que nación política.

Esto no cierra las puertas a nuevos reencuentros. La opción federal o confederal, posterior a la conquista de la soberanía plena, tiene un nuevo campo de experimentación en la nueva realidad europea. Los Estados como el español, están obsoletos: son demasiado pequeños para afrontar los problemas que tenemos como humanidad, pero son un monstruo burocrático como proyecto nacional y como marco institucional. El federalismo puede ser una buena solución como proyecto europeo y o mundial, pero no puede basarse en los Estados actualmente existentes sino en agrupaciones humanas realmente nacionales.

Internacionalismo e izquierda

Con este enfoque las distintas izquierdas, sean de ámbito nacional vasco, gallego o catalán, como estatal, podrían tener un punto de partida común basado en un internacionalismo sincero, que defienda los intereses sociales de los oprimidos y explotados. Sólo así podrán, además, defender su propio modelo de liberación y construcción nacional sin ir al carro de sus respectivas burguesías y derechas nacionalistas.

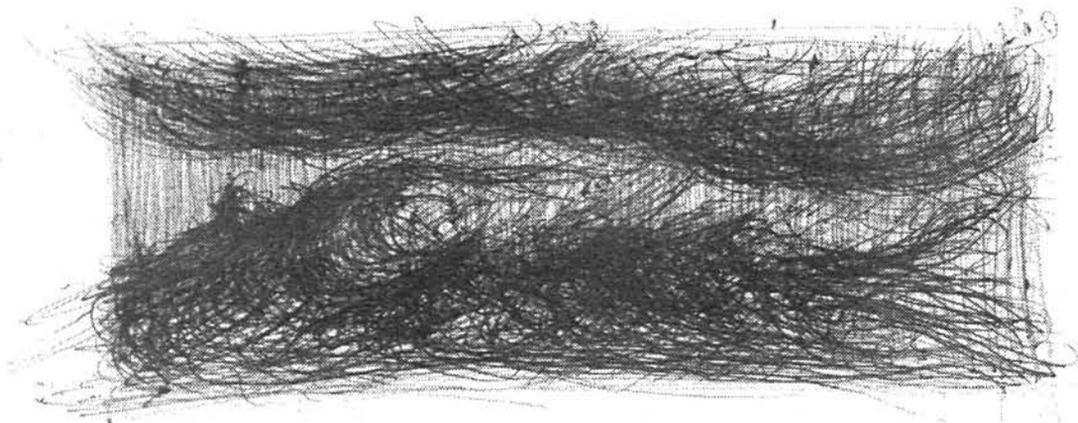
Los traumáticos acontecimientos de la ex-Yugoeslavia tienen muchas lecturas. Hay quienes han sacado la conclusión de huir de todo nacionalismo como el gato escaldado huye del agua, sin darse cuenta que muchas veces terminan sumergiéndose (escaldándose) en las aguas del nacionalismo hegemónico, que no necesita autoproclamarse nacionalista, porque su idea nacional no se pone en cuestión. Hay también quienes han sacado la idea opuesta: que cada nación se arregle como pueda ya que para sobrevivir sólo cuenta con la solidaridad de los connacionales (y quien dice nación, diría según, la etnia). El resto que se las apañe como pueda. Pero cabe otro planteamiento. Como soñaban los Larrañaga, los viejos internacionalistas, partidarios de la solidaridad universal asentada en la autodeterminación de los pueblos: la desintegración de los viejos Estados que oprimen a las naciones que agrupan en su interior debería interesar por igual a la izquierda de la nación oprimida y a la izquierda de la nación opresora, aunque cada una tenga sus propias razones.

Solidaridad, pero no con el estado

Quiero aclarar también la gran deformación que sufre buena parte de la "izquierda española" cuando identifica solidaridad con estabilidad, es decir, cuando asigna al Estado central la virtualidad de organizar y administrar la solidaridad entre los pueblos. Se puede decir que en este terreno comulgan con el PSOE, los Rodríguez

Ybarra y compañía. La solidaridad es resultado de un pacto entre iguales, de una distribución de las riquezas sobre bases altruistas y de colaboración recíproca. En absoluto la apropiación de los recursos económicos por parte del Estado central, para utilizarlos en lo que le conviene (sus planes económicos, culturales y militares) y no precisamente en resarcir injusticias o en promocionar un desarrollo acorde con las necesidades de cada pueblo o nación.

Por último, me gustaría que dicha izquierda defendiese los derechos democráticos que el Estado viola frecuentemente en cárceles y comisarías, con la excusa de reprimir a los nacionalistas radicales. Pocas cosas pervierten tanto como la solidaridad con el Estado en estos temas.



4 Soberanía y federalismo

Nacionalismos y federalismo: el caso español

Jaime Pastor

El debate sobre la actitud de la izquierda alternativa ante la cuestión nacional está planteándose en los últimos tiempos bajo la influencia tanto del resurgir de los nacionalismos en los países del extinto bloque soviético como del contexto europeo en el que se ha ido insertando la economía española. Mi intención en este trabajo es presentar algunos comentarios sobre estos problemas apoyándome en la experiencia extraída de las discusiones realizadas con algunas de las "sensibilidades" que se expresan dentro de la izquierda de ámbito estatal.

I

Para empezar, y aunque sea con brevedad, creo que hay que reconocer los avances logrados desde distintos enfoques en el estudio de las naciones y los nacionalismos, considerados en general como productos sociales, políticos y

culturales, históricamente contruidos, y no como algo existente desde los tiempos más remotos. No hay definiciones esencialistas de la nación, aunque sí puede haber otras instrumentales que nos acerquen a ese complejo fenómeno. La ya clásica de Benedict Anderson, según la cual una nación puede ser entendida como «una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana» **1/**, podría servirnos en ese sentido.

Del mismo modo, la vieja distinción entre nación política y nación cultural también puede ser útil para contrastar la realidad de muchos Estados-nación con la diversidad nacional que, pese al tiempo transcurrido, les sobrevive en muchas partes. Ese es el caso del Estado español que, pese a sus lejanas raíces en las viejas "hispanias", fracasó en sus aspiraciones imperiales, entró en crisis en el umbral del siglo XX y terminó configurando un nacionalismo reaccionario y centralista bajo la égida del franquismo.

Esto explica que, pese a la descentralización administrativa alcanzada bajo el Estado de las autonomías y a la reaparición de un nacionalismo español de corte liberal, sigan coexistiendo dentro de un territorio común diferentes culturas y lenguas que, junto a otros factores de orden simbólico, favorecen la pervivencia de sentimientos de pertenencia a distintas comunidades nacionales. Así, es innegable la configuración de sectores de la población que muestran su identificación con una sola comunidad, pese a que es obligado reconocer también que en muchos ciudadanos se da una identificación con dos comunidades a la vez (catalana y española, vasca y española...), como se puede comprobar en los datos de la evolución de la opinión pública recogidos en algunas investigaciones **2/**.

A todo esto hay que añadir la interdependencia que históricamente se ha producido entre unas zonas y otras debido a un desarrollo capitalista común, bajo la coalición de intereses que se ha ido expresando entre la vieja oligarquía agraria, la nueva burguesía industrial y financiera "pan-española" y la burocracia civil y militar que llegó a consolidarse bajo el franquismo. El precio del carácter desigual y de los desequilibrios sociales resultantes se reflejó asimismo en los flujos de migración tanto a Europa como a las grandes zonas productivas urbanas de Catalunya, Euskadi o Madrid, con los consiguientes problemas de integración sociocultural.

1/ Benedict Anderson, *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y difusión del nacionalismo*, Fondo de Cultura Económica, México, 1ª edición en español de la 2ª en inglés, 1993. Para un útil repaso de los principales enfoques del nacionalismo, me remito a los artículos de John A. Hall, "Nacionalismos: clasificación y explicación" en *Debats*, nº 46, diciembre 1993, y de Ramón Máiz, "¿Etnia o política? Hacia un modelo constructivista para el análisis de los nacionalismos", en *Revista Internacional de Filosofía Política*, nº 3, mayo 1994.

2/ Se puede consultar Manuel García Ferrando, Eduardo López-Aranguren y Miguel Beltrán *La conciencia nacional y regional en la España de las autonomías*, CIS, Madrid, 1994. Con todas las cautelas que hay que tener frente a los resultados de estas técnicas de estudio, hay datos de interés que conviene tener en cuenta: en estas encuestas se revela que en todas las Comunidades Autónomas predomina la identificación con un nacionalismo dual, mientras que un 20 % del País Vasco se siente únicamente vasco y un 14 % catalán; en Catalunya un 53,6 % es partidario del derecho a la autodeterminación (definido como "derecho a decidir libremente su futuro político, económico y cultural"), siendo ese porcentaje del 48,3 % en el País Vasco, aunque ambos bajan si se incluye la independencia; otro dato importante es la constatación de que la mayoría de los inmigrantes no ha tenido dificultades para adaptarse a sus nuevas Comunidades Autónomas de residencia.

II

En función de este esquemático repaso muchas gentes de la izquierda hemos defendido desde hace tiempo dos demandas fundamentales, el derecho a la autodeterminación y la opción federalista. El primero arranca históricamente de la traslación del derecho individual a la autonomía y a la autodeterminación a un derecho colectivo de los pueblos y las naciones a decidir su propio destino y sus relaciones con los "otros" pueblos. Puesto de actualidad al calor de la Primera Guerra Mundial y, luego, de la descolonización, ese derecho ha sido reconocido de forma muy desigual por las viejas grandes potencias en función de cuáles fueran sus intereses en una u otra región del planeta. Como se afirma en el Manifiesto-Programa aprobado por la II Asamblea Nacional de Iniciativa per Catalunya, celebrada a finales del año 92, "El derecho a la autodeterminación es un derecho desigual, desamparado por las insuficiencias y contradicciones del derecho internacional. En teoría es reconocido por todo el mundo, en la práctica es ejercido por aquéllos que tienen la fuerza de realizarlo y defenderlo. El estado de guerra para resolver los conflictos se impone claramente al estado de derecho en el orden internacional". Tenemos ejemplos recientes de esto con la distinta trayectoria que están conociendo los diferentes Estados surgidos de la ex-Yugoslavia. Como experiencias opuestas, tenemos la separación pacífica entre la República Checa y Eslovaquia o la transformación en Estado federal de Bélgica.

Derecho a la autodeterminación implica derecho a la independencia, pero no por ello significa que haya que pronunciarse sólo por esta opción. Tampoco puede ser reducido a un acto plebiscitario en el que la nación afectada se pronuncie; pero es obvio que, si hay división en su seno, hace falta una fórmula democrática para decidir cuál es la forma de organización política que se prefiere. No debemos excluir la vía de la ruptura con el Estado central y la declaración revolucionaria de soberanía, pero no parece probable que ésta sea en el período histórico actual la que se esté abriendo camino entre nosotros. En cambio, hay suficientes experiencias de referéndum para extraer lecciones de ellas y buscar la vía más adecuada para aplicarla a cada realidad concreta ^{3/}.

En nuestro caso, nos encontramos con un obstáculo fundamental para exigir el ejercicio de ese derecho: su exclusión del texto constitucional, en el que en cambio se proclama "la indisoluble unidad de la Nación española", se otorga a las fuerzas armadas la defensa de su integridad territorial y se establece rígidamente el marco en que los Estatutos de autonomía han tenido que elaborarse. Si la izquierda quiere recuperar la iniciativa democrática ante esta cuestión, es evidente que debería propugnar una reforma constitucional que incluyera la modificación de artículos importantes del Título Preliminar, del Título III referente al Senado y del Título VIII con el fin de que se pueda ejercer el derecho a la autodeterminación; cualquier intento de avanzar en la mejora de las relaciones entre los pueblos que

^{3/} Pese a su tratamiento bastante discutible de los referenda sobre los Estatutos de autonomía en el caso español, tienen interés los análisis y las reflexiones recogidas en la obra coordinada por J.R. Rudolph (jr.) y R.J. Thompson, *Política etnoterritorial*, Pomares-Corredor, Barcelona, 1992.

forman el Estado español ha de basarse en la voluntariedad y no en el mantenimiento de la hipoteca derivada del consenso con los poderes fácticos establecido en el momento constitucional /4.

III

Ha sido la resistencia a reconocer ese derecho un factor primordial en el refuerzo de sentimientos nacionalistas independentistas, principalmente en el País Vasco, Catalunya y Galicia; también sectores de la izquierda se han inclinado por esta opción y han llegado a consolidar formaciones políticas con arraigo social y apoyo electoral notables. Sin embargo, casi ninguna corriente ignora que la vía de la independencia, en la hipótesis de que se conquistara, debería conducir muy pronto a fórmulas de federación o confederación con otros Estados y pueblos, a la vista de la interdependencia y la gravedad de los problemas que a escala regional y planetaria hay que abordar en la época que nos está tocando vivir. Además, "imaginar" una comunidad política como inherentemente (de)limitada y soberana no puede evitar reconocer su propia heterogeneidad interna y las múltiples identificaciones que sus miembros asumen cotidianamente, particularmente cuando hay en algunas de ellas una población inmigrante que, pese a estar relativamente integrada socialmente, conserva sus particularidades. La proclamación de la "soberanía" y la búsqueda de la "asociación" con otros Estados y pueblos aparecen de esta forma como pasos complementarios, siempre, eso sí, que esto se produzca desde la práctica de la democracia participativa y no por imposición del poder central o de la élite respectiva en cada nacionalidad.

Añadamos a todo esto que la coincidencia con la crisis de la soberanía territorial de los Estados (por arriba, por abajo y en diversas dimensiones) y con el proceso contradictorio de la Unión Europea puede favorecer las expectativas de una erosión de competencias de los viejos Estados en función de una unión superior /5; pero también, a la vista del momento crítico de esa misma unión, puede fomentar tendencias centrífugas que generen conflictos de identidades no siempre beneficiosos para la necesaria solidaridad entre los pueblos.

Por eso la aspiración a conciliar un derecho democrático con la lucha por la solución de la cuestión social ha empujado tradicionalmente a sectores de la izquierda a propugnar una vía federalista. Esta ha tenido un profundo arraigo en nuestra historia común, desde las libertades medievales a las juntas que emergieron en 1808 y, sobre todo, en la Primera República. Conviene recordar que a lo largo del siglo XIX un federalismo político y social, con rasgos democráticos y libertarios, se extendió entre las capas populares, con las tensiones consiguientes entre "moderados" e "intransigentes", pero también con la convicción de que ése era el único camino para la convivencia. Fue la frustración de aquel proyecto

4/ Véase, por ejemplo, el artículo de Juan Ramón Capella "Un sistema de representación parasitado", en *CuatroSemanas*, nº 17, junio 1994.

5/ Merece la pena la lectura de los temores que expresa Anthony D. Smith ante el alto precio que puede suponer la construcción de una identidad colectiva europea basada en la oposición a otras culturas o actores políticos procedentes del "Sur" ("National identity and the idea of European unity", en *International Affairs*, vol.68, nº 1, enero 1992)

republicano federalista, primer ensayo de construcción democrática de un Estado-nación español, la que dejó el terreno despejado para que posteriormente se configuraran unos nacionalismos “periféricos”, abiertamente enfrentados ya a un nacionalismo español reaccionario /6.

Desde entonces, sólo la nueva izquierda que surgió bajo el franquismo volvió a proclamar un federalismo que muy pronto se vio abandonado por distintas razones: los unos, porque la Constitución no lo permitía; los otros, porque la opción por la independencia en lugares como Euskadi estaba cuajando en el seno de la propia izquierda radical. Ahora, en cambio, la comprobación de los límites del “Estado de las autonomías”, por un lado, y el mayor cruce de identidades en las nacionalidades (frente a la pretendida homogeneidad etno-territorial), por otro, han vuelto a dar credibilidad a una solución federal.

Hay, por tanto, razones suficientes para recuperar esa vía alternativa, propugnando una refundación, desde el respeto al derecho a la autodeterminación, de un Estado federal español dispuesto a impulsar a su vez un proceso democrático —y no elitista— de federalización europea, dentro de la cual aquellas naciones divididas territorialmente también podrían encontrar en un futuro todavía lejano su ubicación geopolítica adecuada. Hablar de “refundación” implica, como decíamos en la contribución que presentamos a la IV Asamblea Federal de IU /7, “el establecimiento previo de un pacto federal libremente asumido por las distintas comunidades que van a formar parte de él”, subordinando por tanto a esto cualquier pacto entre fuerzas políticas y sociales a escala española.

Esa fórmula federal no debería basarse en una simetría entre todas las “Comunidades Autónomas” sino en un desigual reparto de competencias que tuviera en cuenta el distinto peso de los rasgos diferenciales en cada nacionalidad o región, libremente expresados, sin que ello fuera en menoscabo de la búsqueda de la solidaridad entre todas ellas. No tener en cuenta esas diferentes situaciones sólo conduciría a favorecer la desconfianza de aquellos pueblos que mayor sentimiento de agravio histórico tienen, y les empujaría a optar por otras fórmulas, como la independencia o/y la confederación. Como también decíamos en el texto citado, “La necesidad de tener unos criterios democráticos flexibles obedece, en realidad, a la existencia de una diversidad de identidades nacionales y regionales que no puede ser medida con el mismo rasero; lo mismo habría que decir sobre un nuevo reparto de competencias, no necesariamente igual entre todas, aunque luego pudiéramos criticar el uso insolidario de alguna de ellas por el gobierno de alguna comunidad (por ejemplo, en el caso de Catalunya, para avanzar en el desmantelamiento del Estado de bienestar)”.

Ahora, además, a los criterios democráticos, solidarios y descentralizadores que han guiado generalmente a las corrientes federalistas de la izquierda debemos unir también la aportación procedente del ecologismo y que exigiría un tratamiento

6/ Para una crónica de la evolución histórica del federalismo español me remito al artículo que publiqué en el suplemento de *El Mundo* titulado “¿Una España federal?” el 6 de diciembre de 1994.

7/ Esa contribución, bajo el título *Sobre el borrador del documento 'Modelo de Estado'. Un comentario crítico*, fue presentada por Jesús Albarracín, Manolo Garí, Pedro Montes y Jaime Pastor en el Consejo Político Federal de IU reunido el 11 de septiembre de 1994; posteriormente fue publicada dentro del boletín “Materiales de la IV Asamblea Federal de IU”.

más amplio. Baste mencionar aquí que su crítica de unos macro-Estados nucleares al servicio de modelos productivistas ha ido acompañada de una reivindicación de lo local, del impulso a la descentralización de las decisiones y, sobre todo, de una propuesta de reorganización territorial basada en las "biorregiones", entendidas éstas, siguiendo a Brian Tokar, como áreas definidas no por las fronteras políticas sino más bien por unidades ecológica y biológicamente sustentables. La inclusión de ese punto de vista se hace imprescindible en nuestras propuestas.

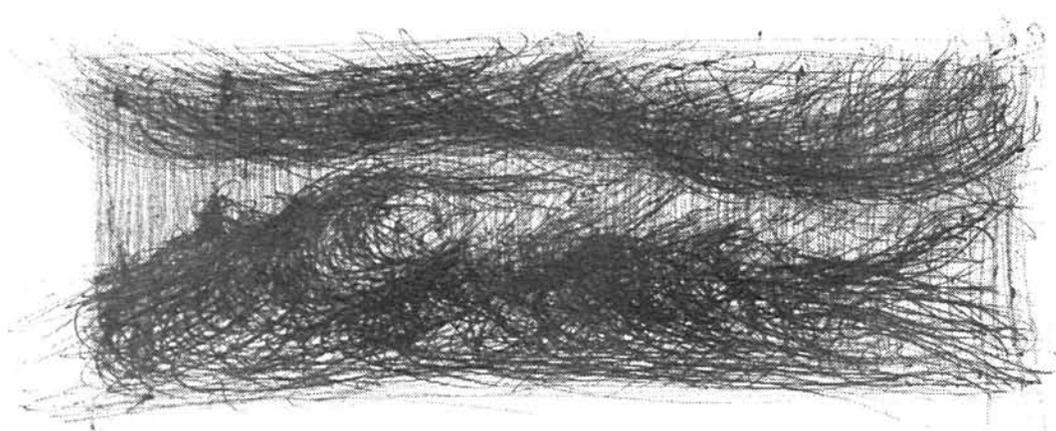
El objetivo a largo plazo también debería estar claro: en palabras de Boris Frankel, habría que buscar "la división racional de las sociedades demasiado grandes en repúblicas genuinamente autónomas, basadas en criterios étnicos, lingüísticos, socioculturales o biorregionales" /8.

IV

Pero los tiempos que corren en un mundo bajo hegemonía neoliberal no son favorables al proyecto que hemos descrito antes. Procesos como la construcción de un "núcleo duro" y antidemocrático dentro de la Unión Europea (con el Banco Europeo como emblema), la autonomía con que actúan los centros de poder transnacionales, los efectos de la desestructuración económica en la atomización social o la fragmentación de las resistencias "desde abajo", entre otros factores, van a seguir permitiendo que las identificaciones nacionalistas excluyentes predominen en muchas ocasiones sobre las de clase, sexo-género o de especie. En el caso español es de temer además que tras el felipismo la nueva "vieja derecha" se empeñe con mayor fuerza en devaluar nuestra realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüística, cuestionando incluso los avances logrados en algunas nacionalidades en el terreno administrativo o educativo. No hace falta añadir que en ese clima general la reforma constitucional que proponemos chocará con una fuerte oposición; lo cual no significa que haya que renunciar a ello, en especial aprovechando debates como el que se está planteando alrededor de la reforma del Senado, o apoyándonos en la fuerza que IU y otras formaciones de izquierda nacionalista conquisten en ayuntamientos y comunidades autónomas, siempre que vinculen su actividad institucional a la movilización social y la participación ciudadana.

Pero ese previsible empeoramiento de la situación obliga con mayor razón a concebir la tarea de una izquierda internacionalista no sólo en el ámbito político sino también en el cultural; en palabras de un compañero de lucha, se trataría de "fomentar culturalmente el federalismo", esforzándonos por promover iniciativas y campañas que, desde la escuela hasta los medios de comunicación, eduquen en el respeto a las distintas culturas y lenguas y exijan una discriminación positiva para aquéllas que hasta fechas recientes se hallaban reprimidas. Quizás así vayamos restableciendo, con nuevos discursos y también nuevas formas de acción, un nuevo tipo de solidaridad, menos politizada y más sólida que la que existía en los últimos tiempos del franquismo entre catalanes, vascos y...españoles.

8/ Boris Frankel, *Los utópicos postindustriales*, Eds. Alfons el Magnànim, Valencia, 1990.



5 Soberanía y federalismo

Reinventando el federalismo: Europa y la izquierda

David Marquand

Los europeos han vivido durante tanto tiempo en el cálido capullo del sistema comunitario que hemos casi olvidado cómo era nuestra historia antes de la asombrosa ola de creatividad institucional que culminó en el Tratado de Roma hace una generación. Si se deja que sigan actuando algunas tendencias actuales quizás tengamos que acordarnos de ella de manera brutal, con consecuencias que no podemos ni imaginar. Los demonios de la historia europea —chovinismo, xenofobia, irredentismo, racismo y búsqueda de chivos expiatorios— andan sueltos ya por el antiguo bloque soviético. En la Comunidad Europea todavía están relativamente dormidos. Pero nadie que haya visto el ascenso del Frente Nacional en Francia, de los Republicanos en Alemania o, incluso, el Congreso del Partido Conservador de Gran Bretaña en 1993 puede pretender que no significan nada a este lado del “telón de acero”. Como en el Este, Europa Occidental está repleta de material combustible. Y si alguien enciende una cerilla todo el sistema comunitario puede arder hasta las cenizas.

Su estructura institucional, es cierto, no corre peligro. Las instituciones, especialmente las internacionales, suelen sobrevivir aunque sea como una sombra de lo que fueron mucho después de que haya desaparecido cualquier atisbo de vida en su seno; aunque conserve la forma de una Comunidad supranacional la realidad de la vida europea se parece cada vez más a una riña de vecinos para obtener alguna ventaja competitiva en una economía mundial cada vez más agresiva, acompañada de redobles de tambor chovinistas, mientras se agudizan las rivalidades nacionales políticas y económicas.

La tendencia actual en la Unión Europea inaugurada por el Tratado de Maastricht es hacia una Europa de dos (o incluso más) velocidades. Como las

tormentas monetarias que destruyeron la *serpiente* en los años 70, los terremotos monetarios que han hecho tanto daño en los últimos años al Sistema Monetario Europeo han demostrado que el mero ejercicio de la voluntad política no conduce a la convergencia económica, que es condición *sine quoniam* para una Unión Monetaria de las divisas fuertes del núcleo duro de la Comunidad Europea, rodeada de una periferia de divisas débiles. Si las tendencias actuales continúan, cada vez habrá menos dudas de que el núcleo duro dominado por el marco alemán, con o sin Francia, seguirá avanzando en el camino de la integración económica y monetaria. Mientras tanto, en la periferia, una rápida "caída hacia los abismos" encabezada por el Reino Unido puede no sólo tener lugar, sino acelerarse.

Apatía ciudadana

La actitud británica ante los capítulos sociales del Tratado de Maastricht, es un ejemplo clásico de política no concertada. Se ha permitido a Gran Bretaña evadirse del fardo de los costes sociales del Mercado Único. Avanza a su aire, pero sobre las espaldas de los otros Estados miembros, en un intento de ser mucho más atractiva para las inversiones extranjeras y mucho más competitiva en el margen sombrío, pero barato, de la economía de mercado global. Y lo justifica alegando oscuras razones sobre sus peculiaridades cuando no abiertamente xenofóbicas. La Comunidad puede sobrevivir a un excéntrico, pero no a varios. Pero si la política de "ir a su aire" de John Major tiene éxito, es difícil creer que los restantes Estados miembros se abstengan indefinidamente de seguir su ejemplo. Si le siguen, el proceso de competencia basada en el *dumping* social, que el capítulo social de la Carta pretendía evitar, será una realidad. Si es así, los Estados miembros con los niveles más altos de protección social se encontrarán bajo una enorme presión, comprensible, para defenderse de la competencia injusta de aquéllos que sigan la vía británica. Y las lecciones de la Historia demuestran que este tipo de autodefensa enseguida se extiende y rápidamente se convierte en "autojustificativa".

También es evidente que, hoy por hoy, el entramado institucional de la Unión Europea seguirá siendo, en un futuro previsible, esencialmente intergubernamental mas que supranacional; que una poco santa alianza entre Francia y Gran Bretaña seguirá bloqueando los intentos para corregir el déficit democrático en la toma de decisiones, como ocurrió antes de la Cumbre de Maastricht; y que, a causa de ello, las instituciones seguirán siendo débiles, opacas y carecerán de legitimidad democrática. Si esta predicción se confirma, los ciudadanos de la Unión Europea seguirán sumidos en la apatía y, hasta cierto punto, alienados de todo el proceso. Todo ello será terreno fértil para el crecimiento de "fundamentalismos" nacionalistas y demagogias populistas como las que surgieron con ocasión de los referendums de Francia y Dinamarca sobre el Tratado de Maastricht y que han sido utilizados por los mal llamados *euroescépticos* desde el día en que la integración europea se convirtió en un tema político fundamental.

Hay que considerar otra consecuencia aun mas alarmante. Que el proyecto socialdemócrata europeo, del tipo de los defendidos por Wolfgang Streeck y Joel Rogers, seguirá siendo, en lo fundamental, una utopía. Una utopía porque las naciones estados de la Unión han transferido tanto poder a las instituciones

supranacionales que no podrían llevarlo a cabo a escala nacional; pero las instituciones de la Unión seguirán siendo demasiado débiles para hacerlo a escala supranacional. Y si todo esto es cierto, la implicación inmediata es que Europa seguirá dominada en la práctica por la derecha y el centro-derecha políticos; que el capital seguirá al timón, con poco que temer de la izquierda política o del movimiento obrero organizado, incluso si Gobiernos nominalmente de izquierdas o de centro-izquierda existen en algunos países, como en España. Aunque los socialistas españoles siguen en el Gobierno, conviene recordar que su programa no es muy diferente del de los neo-thatcherianos de John Major en Gran Bretaña. Y si todo esto es cierto, lo más probable es que los Gobiernos europeos sigan haciendo frente a la competencia internacional desmantelando el Estado de Bienestar, sin lugar a dudas el mayor logro de la civilización europea en este siglo.

Periferia empobrecida

Finalmente, Europa del Este se quedará fuera de la nueva Unión, si se mantienen las tendencias actuales, como una periferia empobrecida, separada de un Occidente rico y complaciente por un nuevo tipo de Muro de Berlín: un muro de paternalismo indiferente y de temores reprimidos, más que concretos. Hay, por supuesto, razones para mantener fuera de la Unión a los países de la Europa del Este. Son razones espurias, pero no por ello menos persuasivas para quienes, por otros motivos, las aceptan: que las economías de Europa del Este son demasiado débiles para soportar la competencia que implica la adhesión plena; que si se convirtieran en miembros de pleno derecho, tras una negociación que les permitiera escapar a la disciplina de la competencia, el famoso *acquis communautaire*, pondrían en peligro a la propia Unión, comprometiendo así el mismo proyecto europeo. La premisa es verdadera, aunque no las conclusiones; y porque la premisa es verdadera, el razonamiento tiene un gran eco en las capitales de Europa Occidental, y aún más, quizás, en la extraña semicapital europea que encierra el edificio Berlaymont de Bruselas.

El problema es que implica graves peligros, que simboliza de manera absoluta la palabra Sarajevo. Los problemas de la transición en Europa del Este han resultado ser muchísimo más difíciles y las soluciones muchísimo más dolorosas que lo que nadie preveyó en la euforia de 1989. Con la excepción de la República Checa y Eslovaquia, las sociedades que sufren esta dolorosa transición tienen pocas o ninguna tradición democrática en la que apoyarse y sí, en la mayoría de ellas, odios étnicos y ambiciones irredentistas. Los nuevos regímenes son frágiles, llenos de esperanza pero escasos de experiencia y necesariamente dependen de la burocracia que han heredado de sus predecesores estalinistas, al mismo tiempo que se encuentran abrumados por las expectativas que no pueden satisfacer y ven en estas ambiciones su última reserva de apoyo popular. Este es el significado interno de la tragedia bosnia; y hay otras muchas "Bosnias" potenciales en Europa del Este. Estas "Bosnias" potenciales serán más probables si Europa del Este es excluida de la Unión Europea que si tienen perspectivas razonables de adhesión en una escala temporal que no se pierda en el tiempo. Si sufren este destino, es difícil creer que una próspera y dichosa Europa Occidental pueda aislarse de los

conflictos que estallarán, de la misma manera que la Europa Occidental de 1914 no pudo distanciarse de las consecuencias de lo que ocurrió entonces en Sarajevo.

Si hay multitud de "Bosnias" potenciales en Europa del Este, aún hay más en la antigua Unión Soviética, donde el terror estalinista fue incluso más salvaje y destruyó la confianza mutua que es la base de toda cultura cívica. En parte debido a ello, y en parte por la misma naturaleza del régimen soviético, la desvertebración económica ha sido mucho más profunda en los nuevos Estados independientes; y los conflictos étnicos y los resentimientos son incluso mucho más feroces. Porque el colapso de la Unión Soviética ha significado no solo el derrumbe de un régimen comunista económicamente irracional y políticamente ilegítimo, sino también el fin del último gran imperio europeo. Y el fin de un imperio es siempre un asunto sangriento.

Las paradojas del proyecto europeo

¿Por qué estas tendencias parecen dominar ahora y son tan amenazantes en comparación con las que actuaban a finales de los ochenta y comienzos de los noventa, tras el Acta Única Europea y la caída del Muro de Berlín? Creo que la respuesta reside en una serie de confusiones, de paradojas, incluso quizás de contradicciones en el corazón mismo del proyecto europeo, al menos tal y como existe hoy. Al tratar de explorar estas paradojas y contradicciones, quiero rápidamente añadir que no critico a los padres fundadores de la Comunidad Europea. Al contrario, creo que Monnet, De Gasperi, Schuman y el resto eran hombres de Estado de extraordinaria creatividad y coraje. Las críticas deben dirigirse contra quienes les han sucedido sin adaptarse a los tiempos.

¿Cuáles son estas paradojas? La primera es una paradoja de identidad. Hablamos de la Unión Europea, o de la Comunidad Europea pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de Europa? ¿Cuáles son sus fronteras? ¿Cuáles son las características esenciales de la identidad europea? Los padres fundadores nunca se preguntaron estas cuestiones. Y no tenían necesidad de ello. Su Europa era, en la práctica, la Europa de Carlomagno con el añadido de Italia del Sur. Y esta Europa, la pequeña Europa de Carlomagno, crecía a la sombra del poder americano, que creía su único protector real contra la amenaza del Este. La Europa comunitaria fue en realidad una Europa carolingia hasta que Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca se sumaron veintiún años más tarde. Después, a comienzo de los setenta, la Comunidad Europea creció para incluir un nuevo miembro del Norte; y a comienzo de los ochenta, volvió a crecer con la adhesión de España, Portugal y Grecia. Con la excepción de ésta última merece la pena señalar que en gran medida se trataba del núcleo central de la cristiandad medieval. Naturalmente, no incluía todos sus territorios. Austria, Polonia y lo que hasta hace poco fue Checoslovaquia, así como el Norte de lo que conocíamos como Yugoslavia, también fueron parte de la cristiandad medieval, pero no de la comunidad de los Nueve o de los Doce.

Si Europa significa la cristiandad católica y protestante —e implícito en los argumentos de muchos de los participantes en el debate sobre la ampliación está el presupuesto que Europa sólo puede ser eso— entonces es evidente que Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Croacia y Eslovenia, así como Austria y

Escandinavia deben, en principio y a su debido tiempo, ser parte política de ella. Pero ¿qué ocurre con la cristiandad ortodoxa? Después de todo, Grecia está ya en la Comunidad y es ortodoxa. Y si el concepto de Europa incluye a los países ortodoxos no hay entonces razón legítima para excluir a Rumanía, Bulgaria, Serbia —si es alguna vez una democracia—, Ucrania y, quizás, Rusia. Rusia ¿es o no es europea?. Si los es Grecia, ¿Por qué no lo es Rusia? Tras el derrumbe de los regímenes comunistas en Europa del Este y el posterior colapso de la Unión Soviética, estas preguntas están, al menos implícitamente, sobre la mesa.

Capitalismo centrípeto

En segundo lugar, hay una paradoja del territorio. En el corazón de esta paradoja reside una coincidencia entre convergencia económica en el núcleo dinámico de la Comunidad y divergencia en la periferia. La geografía económica de finales del siglo XX en Europa se parece cada vez más a la de finales del medievo. En el corazón de la Unión hay un núcleo de prosperidad, donde una línea imaginaria que va de Lombardía al Rin y el Mar del Norte se cruza con otra que une a Munich con Marsella y, quizás, Barcelona. Este eje es hoy mucho más próspero que antes. En los años del *boom* de las décadas de 1950 y 1960, el abismo entre la periferia y el núcleo disminuyó significativamente. Pero en los últimos 20 años, la distancia entre la periferia y el núcleo se ha mantenido en el mejor de los casos y en el peor, ha aumentado.

Se trata de una tendencia familiar en todas las economías capitalistas. El capitalismo es centrípeto. El mercado recompensa a quienes están bien dotados para el mercado y castiga a quienes no lo están: y en ello se incluye la situación geográfica. La Gran Bretaña del siglo XIX es un caso clásico. La creación de un mercado único y la unión monetaria entre una Irlanda atrasada y una Gran Bretaña avanzada acabó por hundir a la primera en la miseria y el hambre. Sin embargo, en las democracias modernas con Estado de Bienestar existen importantes tendencias equilibradoras: los sistemas fiscal y de seguridad social, redistribuyen recursos de los territorios ricos a los pobres de manera similar a la que tiene lugar de personas ricas a personas pobres. En gran medida porque hay mayor proporción de pobres en los territorios deprimidos que en los ricos. Una razón por la que existen los sistemas fiscal y de seguridad social es la competencia electoral que permite que los territorios deprimidos puedan, de alguna manera, reequilibrar políticamente los efectos de la competencia del mercado.

En el sistema prácticamente unipartidista que existe hoy en Gran Bretaña hay que señalar, que estas tendencias equilibradoras han sido amortiguadas porque el partido político que representa a los territorios deprimidos ha estado tanto tiempo fuera del poder que esos territorios han perdido mucha de su capacidad de presión política. Pero se trata de una excepción que confirma la regla. En un Estado normal de Bienestar democrático las elecciones permiten que los territorios deprimidos puedan contrapesar la tendencia a una mayor concentración, que es el resultado natural del libre mercado capitalista. Pero Gran Bretaña hoy ha dejado de funcionar como un Estado de Bienestar democrático normal. Y eso nos lleva al punto crucial. El mecanismo de redistribución territorial —la combinación de sistema electoral, sistema fiscal y seguridad social— no existe en la Europa

comunitaria. El sistema fiscal y la seguridad social permanecen bajo control nacional. Y, extrañamente, lo mismo se puede decir del sistema electoral. El Parlamento Europeo existe; las fuerzas políticas compiten electoralmente por sus escaños; pero de ninguna manera es el equivalente europeo de un parlamento nacional. La capacidad de presión política de los territorios deprimidos que no es muy impresionante ni cualitativa ni cuantitativamente, es el resultado de la representación de los Estados más pobres en el Consejo de Ministros, no de la representación de la población de menor renta en el Parlamento Europeo.

El problema es político y no técnico. Ya en 1977 el Informe McDougall demostró que un presupuesto comunitario redistributivo, que supusiese tan sólo del 5 al 7% del PNB comunitario, podría ser un efectivo medio de redistribución territorial comparable a los presupuestos de los Estados federales que rondan el 20% del PNB. Por supuesto, en una Comunidad de Nueve. En una Unión de Doce la proporción tendría que ser mayor. Pero el Informe McDougall fue papel mojado porque no existía la voluntad política para llevar a cabo sus recomendaciones. Y aquí reside la esencia de la paradoja del territorio. El verdadero obstáculo a la Unión Monetaria —las fuerzas que generan las olas especulativas que tanto daño han hecho al Sistema Monetario Europeo— son territoriales. La Unión Monetaria entre el núcleo y la periferia acelerará el proceso de concentración. Beneficiará al centro, pero no hay nada que demuestre que será bueno para la periferia. El ejemplo de lo que ocurrió a Irlanda en el Siglo XIX o al Mezzogiorno tras la unificación italiana, son una advertencia real. Hasta que no se aborden estos problemas económicos no habrá Unión Monetaria, porque cualquier proyecto transitorio del Sistema Monetario Europeo será siempre vulnerable a las presiones especulativas, que no podrán ser resueltas con meras fijaciones técnicas de los tipos de cambio. Aquí, como en tantas otras esferas de la vida social, sólo la política puede equilibrar los mercados.

Refuerzo del núcleo

Lo que me lleva a la tercera paradoja: la paradoja del supranacionalismo. Quienes apoyan el proyecto europeo suelen proclamar que su objetivo es trascender la nación estado o la soberanía nacional. Creo que la verdad siempre ha sido más compleja. Los padres fundadores querían superar la nación Estado en ciertas áreas políticas cruciales, porque al mismo tiempo querían reconstruirlo. Sobre todo, querían reconstruir los dos Estados nacionales de la Europa Occidental carolingia: Alemania y Francia. Tanto Adenauer como los diferentes Gobiernos de la IV República Francesa, de manera ligeramente diferente, vieron la formación de la Comunidad Europea como un medio para dotar de mayor legitimidad y eficacia a sus débiles e inseguros regímenes. Con extraordinario genio comprendieron que la mejor forma de hacerlo era transferir a instituciones supranacionales el control de ciertas funciones políticas fundamentales. Y, como Alan Milwards ha defendido tan brillantemente en su último libro, lo consiguieron. Desde cualquier punto de vista, las naciones estados de Francia y Alemania son hoy mucho más fuerte que cuando se creó la Comunidad hace cuarenta años. Son más respetadas y tienen un apoyo popular mucho más fuerte. Son más eficaces y tienen una mayor legitimidad que inmediatamente después de la guerra.

El Reino Unido es una excepción. La trayectoria del Estado británico ha tenido sus más y sus menos. Pero es un prejuicio egocéntrico pensar que porque el Estado británico ha perdido fuerza, eficacia y legitimidad desde los años cincuenta, lo mismo ha ocurrido a las restantes naciones estado. En la mayoría de Europa Occidental ha ocurrido lo contrario. Y ahora es cuando aparece la paradoja. Las naciones Estados de la pequeña Europa carolingia, de la Europa de los Seis, que es y será en un futuro previsible el núcleo de la Unión, son mucho más fuertes porque han creado una red de interdependencias que ha hecho imposible, o extremadamente costoso, actuar unilateralmente en ciertas áreas esenciales, en especial en la gestión macro-económica y la política industrial. Las naciones Estado no han transferido soberanía, para hablar con precisión. No sólo siguen siendo soberanas sino que se aferran a su soberanía. Por el mismo proceso por el que han recuperado su legitimidad y eficacia, perdidas durante la II Guerra Mundial, ha hecho cada vez más difícil que puedan actuar como solía hacerlo el Estado socialdemócrata del período de postguerra.

La política como caballo, la economía como carro

Y llegamos así a la cuarta paradoja, que llamaré la paradoja del funcionalismo. Con ello me refiero a que el proceso de integración, como se ha concebido hasta ahora en Europa, se ha convertido gradualmente en un callejón sin salida, no porque haya fracasado sino debido a su éxito. Quizás convenga recordar brevemente su trayectoria histórica. En 1940 hubo un fuerte debate entre los partidarios de la unión de Europa. Unos favorecían una metodología funcionalista y otros la creación de un sistema federal desde los comienzos. Como todo el mundo sabe, triunfaron los funcionalistas, porque los intereses de las naciones estados y las aspiraciones de una Europa unida se aliaron para buscar una integración gradual de sectores claves de la economía. Pero, a comienzos de los años cincuenta, los integracionistas creyeron que este proceso crearía una presión irresistible e ineludible a favor de la integración, hasta que al final la unión política sería el resultado casi de un consenso. Se trataba de una especie de marxismo bastardo. La economía era la base, la economía era la superestructura; para cambiar la metáfora, la economía era un caballo que tiraba del carro de la política.

A partir de ahí se deducían algunas concepciones que ahora se cuestionan en el debate sobre el futuro de la Unión. El debate sobre "ampliación" versus "profundización", en relación a Europa del Este es el ejemplo más claro. Los partidarios de ambas estrategias tienen objetivos diferentes pero comparten un punto de partida esencial. Tanto los que quieren que la Unión se amplíe primero y avance en la integración después y aquellos que quieren más integración primero y ampliaciones después, creen que la política sigue a la economía. Los defensores de la ampliación quiere ralentizar el proceso de integración en la Unión actual. Defienden la ampliación porque están contra la profundización; defienden la incorporación de los países de Europa del Este porque quieren debilitar a las fuerzas que defienden una mayor integración en Europa Occidental. Los partidarios de una mayor integración se oponen a la ampliación por la misma

razón. Temen que, tal y como están las cosas, la ampliación frene la integración.

Un conjunto de presupuestos similares ha marcado el debate sobre el Mercado Único y la Unión Monetaria en Europa Occidental. El argumento central para la Unión Monetaria es que es la consecuencia lógica e inevitable del Mercado Único y el paso previo lógico a la unión política. En parte es verdad. Un mercado de capitales únicos unido a una tasa de cambio estable y con libre movimiento de capitales a través de las fronteras nacionales es inconcebible, a largo plazo, sin la existencia de una moneda única que, a su vez, es inconcebible sin alguna autoridad que la gestione. Por lo tanto, una moneda única implica un salto cualitativo hacia la unión política: por eso, Lady Thatcher y los *euroescépticos* británicos, se oponen.

Por desgracia, esta lógica no se aplica a los primeros pasos del proceso. Aunque es verdad que la moneda única implica un salto cualitativo hacia la unión política, no se desprende de ella que el Mercado Único implique un salto cualitativo hacia la moneda única. El debacle que ha sufrido el Sistema Monetario Europeo y el frenazo que ha tenido lugar en los distintos países de Europa Occidental desde que se firmó el Tratado de Maastricht es una tendencia poco reconfortante. Mientras no haya una autoridad política que asegure justicia territorial, que supere las tendencias centrípetas inherentes a la economía capitalista de libre mercado, la periferia no será capaz de soportar la Unión Monetaria. Y mientras la periferia no pueda hacerlo, la Unión Monetaria será incompleta. Hay, por lo tanto, una contradicción entre las ambiciones monetarias de la Unión y sus divergencias territoriales. Hasta que no se resuelva esa contradicción la Unión avanzará y retrocederá. Pero sólo las instituciones políticas pueden resolver esta contradicción.

Economicismos

Las implicaciones son evidentes. El Tratado de Maastricht no fue lo suficientemente lejos. De hecho, en ciertos aspectos cruciales se equivocó de dirección. Porque Maastricht hundía sus raíces en el economicismo tecnocrático de los orígenes de la Comunidad. Partía de la asunción de que un Mercado Único conduciría, inevitablemente, a la Unión Monetaria y ésta, a la unión política. No había necesidad de movilizar consenso para la unión política; simplemente emergería desde el fondo de la Historia. Por la misma razón, tampoco había necesidad de examinar los obstáculos políticos que se interponían a la Unión Monetaria o tratar pacientemente de superarlos. La Unión Monetaria era un asunto técnico que sería resuelto técnicamente.

Como ha ocurrido tantas veces en la Historia, los acontecimientos después de Maastricht han demostrado que este tipo de economicismos es, no solamente falso, sino también peligroso. La idea de que la política es como un carro que arrastra el caballo de la economía no tiene cabida más que en los cuentos de hadas del marxismo clásico y del liberalismo económico clásico. En el mundo real, la política es siempre el caballo y la economía el carro. Ahora que se ha vuelto a redescubrir dolorosamente esta antigua verdad, la izquierda europea debe sacar sus propias conclusiones, reconociendo que sus objetivos no puedan alcanzarse en esta especie de limbo transitorio creado por el Tratado de Maastricht. Pero al mismo tiempo es imposible volver a la miopía provinciana de la "Europa de las patrias".

La izquierda europea debe defender una nueva versión del federalismo de los años cuarenta, basado en el sano principio demócrata-cristiano de la subsidiariedad.

El tipo de subsidiariedad que se necesita ahora no es la del Tratado de Maastricht. La subsidiariedad "a la Maastricht" es presentada como un principio de validez universal, aplicable por igual en toda la Unión. En Europa en la que vivimos, y viviremos, este enfoque es un callejón sin salida. Durante mucho tiempo, el nivel de gubernamental en el que el proceso de toma de decisiones tenga lugar variará de país a país y de tema a tema. En el núcleo duro de la Comunidad, cuyos miembros satisfacen ya las condiciones de Maastricht para la Unión Monetaria sin muchas dificultades, la toma de decisiones en la política monetaria podrá ser transferida al nivel supranacional. Pero será imposible en la periferia con monedas débiles.

El verdadero problema es la cantidad de diversidad que puede soportar una unión política emergente sin disolverse en sus partes constituyentes. Y la pregunta no puede contestarse a priori. Pero merece la pena señalar que en Estados Unidos, la federación a nivel continental de mayor éxito, el papel del Gobierno Federal era, en comparación con las naciones Estado de la Europa contemporánea, extremadamente limitado hasta bien entrado el siglo XX y que los Estados diferían enormemente, tanto en su capacidad económica como en el alcance de su poder público. Si la Comunidad se desarrolla de acuerdo con las líneas sugeridas aquí tendrá que haber una importante redistribución de funciones entre los niveles regional, nacional y supranacional. La responsabilidad sobre la política exterior y de seguridad será rápidamente comunitaria. En los países del núcleo duro, lo mismo ocurrirá con la política comunitaria. Pero dado que el objetivo de la libre competencia a escala comunitaria tendrá que ser aplazado, en tanto se amplíe con nuevos miembros de Europa Central y Oriental, la desregulación y *reregulación* que se necesita para alcanzar un mínimo común denominador comunitario no tendrá que extenderse a ellos; y las competencias que las instituciones comunitarias tengan que asumir para poder llevarlo a cabo en la pequeña Europa Occidental pueden dejarse al nivel nacional. Y lo mismo ocurrirá en la periferia de Europa Occidental durante mucho tiempo con la política monetaria. Para decirlo de otra manera, el modelo de federalismo comunitario se parecerá más a los Estados Unidos de comienzos del siglo XIX que al de Alemania de finales del siglo XX.

Políticamente, la Comunidad será una federación, pero de carácter vago y limitado. Se restituirá a las regiones un amplio abanico de funciones, en vez de al nivel nacional. A nivel económico las cosas serán mucho menos claras. En el corazón de la pequeña Europa habrá un Mercado Único (y social), de acuerdo con las líneas de 1992. Hacia el Este, el Sur y cruzando el Canal, habrá una gran variedad de regímenes económicos avanzando todos lentamente, a diferentes velocidades, hacia la incorporación plena. A primera vista, parecerá la Europa de "geometría variable" que algunas veces parecía el medio de resolver el problema británico. Pero las diferencias económicas se combinarán con la unión política, en vez de que sean una excusa para posponerla.

NEW LEFT REVIEW nº 203/enero-febrero de 1994/Londres

Traducción: G. Buster

Un mundo sin utopías

Luis Beltrán

Hace unas semanas la prensa dio noticia de una conferencia de Jürgen Habermas. Según las reseñas periodísticas, el filósofo alemán se había preguntado —sin encontrar una respuesta positiva— cómo es posible que el mundo de hoy viva sin utopías. En la esfera política esa pregunta se la hacen a diario cientos de miles de personas en todo el mundo. Naturalmente, no se lo plantean con ese nivel de clarividencia que da la cultura filosófica, pero sí se plantean el problema concreto de la crisis ideológica de la izquierda, que es un problema de ausencia de proyectos de futuro. Tras la escisión del FMLN en El Salvador —encabezada por Joaquín Villalobos—, la crisis del PT brasileño, las tensiones entre los diversos sectores de IU, la descomposición de la izquierda francesa y las crecientes divergencias de la izquierda italiana —por poner algunos ejemplos— se esconde una realidad nueva en la historia: que los sectores más dinámicos políticamente carecen de una utopía, de un horizonte desiderativo y, en consecuencia, se ven sumidos en una profunda desorientación ideológica y práctica.

La utopía y la crisis de la izquierda

Si analizamos esa desorientación política desde el punto de vista de la pérdida del horizonte utópico, se puede apreciar que, pese a las distancias y diversidades, dos actitudes esenciales se dibujan en el seno de la izquierda, tanto en el mundo rico como en países pobres. Esas actitudes son la resignación y el rechazo. Los sectores que se han resignado a la desaparición de cualquier horizonte utópico —y que suelen autoproclamarse socialdemócratas— propugnan una profunda adaptación de la izquierda a los mecanismos de la vida parlamentaria, a la política de Estado, a la concertación social y, en lo organizativo, a la autonomización de las élites parlamentarias respecto a los aparatos políticos que las sostienen. Su actitud hacia la utopía expresa una reacción virulenta. Las viejas utopías aparecen ante estos sectores como los obstáculos que han impedido su más rápido acceso al poder, que les han separado de la sociedad. Frente a los valores utópicos suelen invocar baños de realismo.

Esa reacción antiutópica suele impulsar una conversión ideológica al relativismo y una orientación política que mira hacia la derecha. El caso italiano es un buen ejemplo de esto último. Si presentarse a las elecciones como “progresistas” significa un fracaso electoral, habrá que buscar un sello capaz de recoger una mayoría y para ello es indispensable atraer a nuevos sectores del centro político.

Este tipo de actitudes suscitan un profundo rechazo y una gran desconfianza en los sectores que bien podríamos llamar “utopistas sin utopía”. Estos sectores desprecian la integración plena en la vida parlamentaria e institucional, mantienen actitudes ambiguas, cuando no abiertamente enfrentadas con el Estado, recelan y combaten la concertación social y, en lo organizativo, se aferran a las tradiciones

del obrerismo o de otros movimientos. Por supuesto, estas creencias les alejan de los centros de poder, y su capacidad de influir socialmente, o bien es mínima o depende de la actualidad de determinados movimientos. Ideológicamente estos sectores se aferran al dogmatismo y si suelen aceptar dudas o lagunas es sencillamente porque sienten la ausencia de dogmas esenciales para garantizar la estabilidad de sus sistemas ideológicos. Su actitud hacia la utopía es nostálgica. No sólo nostálgica porque esperen una resurrección de la utopía comunista, sino nostálgicos porque echan mano de aspectos y valores utópicos cuando no encuentran respuestas al presente inmediato. Por eso pueden recurrir hoy a la utopía desde burócratas socialdemócratas en declive –tipo Alfonso Guerra– hasta revolucionarios sin proyecto revolucionario. Comparten el sentimiento de estar fuera del juego político actual.

Aquí y ahora

Lo que he tratado de describir son sólo dos tendencias de direcciones opuestas que se pueden encontrar en todas las culturas de izquierda de este final de siglo. Ciertamente caben entre estas dos tendencias puras muchas posiciones intermedias. Para ilustrar esto sin ir demasiado lejos me detendré en el caso español.

La primera tendencia en estado puro quizá sólo pueda encontrarse en el *felipismo*, aunque sectores renovadores de IU –Sartorius, sobre todo– están muy próximos a ella. La segunda tendencia estaría representada por aquellos que han teorizado la preeminencia de lo social o prepolítico sobre lo político. El guerrismo y el anguitismo son dos posiciones intermedias. El guerrismo incorpora elementos muy superficiales de la segunda tendencia a su cultura política y el anguitismo, por el contrario, representa una combinación más equilibrada de elementos de las dos tendencias –lo que lo sitúa en un punto de difícil equilibrio entre presiones que se expresan en su permanente reivindicación constitucional y cierto recelo hacia los nacionalismos, de un lado, y su orientación obrerista y anticapitalista, de otro. Quizá no esté de más señalar que esta combinación de elementos desiguales en absoluto puede ser criterio para deslegitimar una opción política. No tienen por qué ser mejores las posiciones puras. Al contrario, estas combinaciones pueden tener una innegable utilidad –sobre todo en épocas de desorientación política–, pues permiten la convivencia entre posiciones políticas de orientación divergente, algo siempre interesante. Ahora bien, estas posiciones de compromiso sufren de inestabilidad o, al menos, resulta difícil que consigan una estabilidad duradera. Las crisis organizativas y las tensiones políticas les acechan sin descanso.

El tiempo de la contrautopía

Pero podemos considerar el problema de la utopía desde otro punto de vista: la relación de nuestro tiempo con la utopía. He hablado más arriba de una realidad nueva: la ausencia de utopía. Sobre este fenómeno conviene detenerse en varios de sus aspectos. En primer lugar, hay que tener en cuenta, dentro del panorama anteriormente expuesto, que la orientación socialdemócrata de la izquierda se funda en una verdad histórica: el agotamiento actual de la perspectiva utópica.

Esto da a las orientaciones derechistas de la izquierda argumentos sólidos y actualidad. Digamos que se colocan a favor de la corriente. Esto no es nuevo. La socialdemocracia ha tenido en el siglo XX un peso superior al comunismo, excepto en regímenes dictatoriales, en los que la ausencia de marco parlamentario deja sin posibilidades de maniobra a los socialdemócratas y crea las condiciones idóneas para el desarrollo de organizaciones de corte jacobino. Históricamente, la socialdemocracia representa el esfuerzo de la izquierda por renunciar a la utopía; de ahí su canto a la gestión. En cambio, la orientación radical —fundamentalista— siente que se agota nadando contracorriente. Utopistas sin utopía, no tienen otro remedio que refugiarse en ese fenómeno que se ha dado en llamar pensamiento moral. El pensamiento moral es un fenómeno necesario, pero insuficiente. Se agota en la crítica de lo factual y es incapaz de proponer un paisaje alternativo. Es el pensamiento de la frustración, de la impotencia.

Esta oposición entre socialdemócratas y utopistas radicales puede aparecer como un rasgo nuevo, pero no lo es. No sólo ha estado presente en todo el debate político del siglo, sino que Friedrich Schiller ya lo diagnosticó a fines del siglo XVIII. Para Schiller, la característica esencial del arte nuevo —el arte moderno— es la ruptura entre poesía ingenua y poesía sentimental, que se funda en una oposición que recorre el conjunto social entre realistas e idealistas. Esa oposición entre realismo e idealismo resulta, según Schiller, el fenómeno social más característico de la modernidad.

Lo que aquí he descrito como crisis de la izquierda no sería, siguiendo a Schiller, más que la reproducción de esa doble tendencia en el seno mismo del idealismo. Esa reproducción daría lugar a un nuevo realismo, la socialdemocracia, y a un neoidealismo, el utopismo radical. En el análisis schilleriano, el realismo expresa la fuerza de la naturaleza, encarnada en el arte clásico. El idealismo significa el agotamiento de la fuerza natural y su desplazamiento por la fuerza de la razón. Siguiendo su hilo argumental deberíamos llegar a la conclusión de que la crisis del idealismo expresa la crisis de la razón, y que esa crisis no se debe a la recuperación de la fuerza natural, sino al agotamiento de la modernidad.

Ese agotamiento de la modernidad requiere una explicación. Schiller, y con él otros pensadores de su tiempo (Kant, Schlegel), era consciente de que el futuro estaba al alcance de la mano. Quien mejor representa esa certeza es Kant, “el filósofo alemán de la revolución francesa”. La tarea que asumieron estos pensadores fue la de dotar de un nuevo pensamiento al mundo nuevo que se avecinaba. Pensaron que el advenimiento de la democracia iba a ser el advenimiento de la razón, o, al menos, que, liberada la Humanidad de los obstáculos del viejo pensamiento dogmático y de las instituciones del Antiguo Régimen, ninguna barrera infranqueable la separaba de la conquista del futuro. Doscientos años después, nos encontramos con la frustración de esa esperanza. Podemos pensar que ese futuro de la razón no llegó o, si llegó, ha sido una burla de las esperanzas depositadas en él. Los pensadores actuales han perdido su esperanza en el futuro. La modernidad tardía ya no espera nada del futuro. El único horizonte posible es el presente. Éste es el dogma más poderoso para los gobernantes, pero lo es también para los pensadores, y eso es todavía más alarmante. Un mundo que no espera nada del futuro es un mundo viejo, caduco.

Sin la tensión del futuro, las sociedades se estancan y aparecen síntomas de descomposición. En otras palabras, si hoy no es tiempo de utopías eso se debe a que el capital utópico de la modernidad —que en sus orígenes fue muy rico— está ahora dilapidado (de lo que tienen responsabilidad directa los que han legitimado sus actuaciones en nombre de la utopía).

La descapitalización utópica está ya siendo tratada. Los nuevos movimientos sociales cumplen tareas históricas distintas que, tomadas por separado, alcanzan una escasa relevancia (pese a la euforia oportunista de algunos charlatanes). Pero en su conjunto cumplen una función imprescindible: recapitalizar la utopía, reconstruir los cimientos de nuevos paisajes desiderativos. No se trata de que los nuevos movimientos sociales estén construyendo una alternativa al viejo mundo. Declaraciones de este tipo sólo sirven para edulcorar una realidad que no puede mover a engaño a quienes la conocemos desde dentro. Los nuevos movimientos sociales son más un efecto de la crisis ideológica de la modernidad tardía que el futuro comprimido y alternativo. Pero son también algo más que síntomas de crisis: son la memoria del futuro, el mecanismo de construcción de una conciencia anticipatoria y plural, que ha de ir fraguando figuras de esperanza. La Humanidad o, mejor dicho, sus culturas, y entre ellas la occidental, no pueden vivir sin utopías. A la pregunta que se formula Habermas cabe responder que, efectivamente, no puede haber un mundo sin utopía, pero también hay que explicar que vivimos el momento de profundo reflujo de la utopía, y que las viejas utopías —el socialismo, el anarquismo— deberán ser reemplazadas por otras nuevas que se fraguan en el lento buche de los movimientos sociales.

La utopía crítica

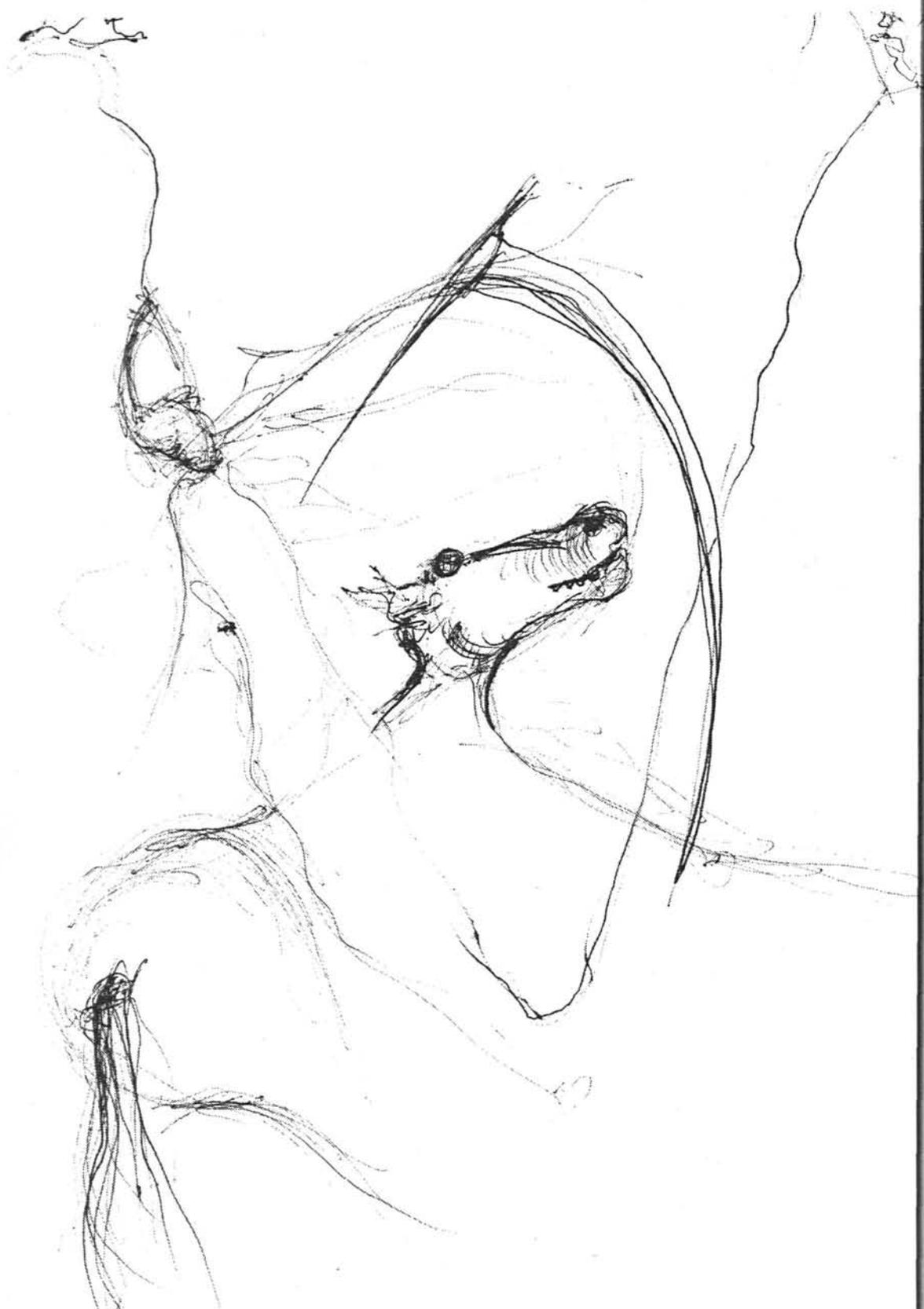
Quiero finalmente señalar algunos rasgos de la nueva utopía. Me referiré a dos problemas: uno, la acusación frecuente de que la utopía es el fermento del totalitarismo; y dos, la construcción ingenua de una imagen de la nueva utopía como un puzzle de los rasgos más evidentes de cada movimiento social, y que se suele traducir en la utilización simbólica del arco iris.

Los movimientos utópicos han sido, en efecto, hasta ahora y sin excepciones, poco o nada plurales. Ocasionalmente han permitido la convivencia de distintas corrientes, pero esas convivencias han sido, más bien, algo ocasional. El utopismo moderno ha estado dominado por un pensamiento dogmático y sus expresiones políticas han derivado hacia el totalitarismo. La pretensión de concentrar en una sola conciencia y en una única voz el espíritu de la utopía ha sido consustancial al utopismo moderno. El monolitismo, la jerarquización, la persecución de la disidencia han sido prácticas habituales e irrefrenables en los movimientos utópicos. El espíritu de la secta se ha confundido con el espíritu de la utopía. La utopía del futuro ha de ser una utopía plural, dotada de varias conciencias. En ella el debate ha de ser libre y abierto. Nunca el debate puede confundirse con el adoctrinamiento.

Detrás de esta tendencia utópica al monolitismo hay una tendencia general del pensamiento racionalista al dogmatismo, en lo ideológico, y al monolitismo, en lo político.

La segunda cuestión es la de la construcción de la imagen utópica del futuro. Una concepción ingenua de la utopía cree que basta con superponer los rasgos más prominentes de los movimientos sociales. El resultado de esa combinación de elementos, sin embargo, poco tiene todavía que ver con esa figura de esperanza que será la utopía crítica. Las razones de esa disparidad se encuentran en la notoria distancia que se da hoy entre la ideología dominante en el seno de cada uno de los nuevos movimientos sociales y el sentido del movimiento mismo. Pondré dos ejemplos. El feminismo está articulado hoy por corrientes ideológicas más o menos sexistas. A ese sexismo se han adaptado todo tipo de corrientes establecidas —marxistas, anarquistas, etc.— y ha generado toda una retórica y una liturgia peculiares, que combinan elementos lamentables con otros de interés. Algo similar ocurre con el pacifismo. Aquí el problema no da lugar a retórica ni liturgia; se trata más bien de la prolongación de un discurso vitalista —la exaltación del derecho a la vida— cuyo fundamento, en el relativismo, incorpora la desconfianza ante los fenómenos ideológicos y la sublimación de lo material y corporal. Sin embargo, las causas pacifista y feminista no empañan su legitimidad por las desviaciones que puedan suponer momentos ideológicos transitorios de esos movimientos. Al contrario, tales corrupciones ideológicas deben ser comprendidas como tributos a la inmadurez de unos movimientos cuyas existencias tienen todavía mucho que ver con hábitos de secta y con debilidades en su proceso de construcción de una identidad.

En conclusión, nuestro tiempo es un tiempo sin utopías. Pero nuevas utopías se están gestando y aparecerán con su propia luz en una etapa histórica futura. Mientras, el debate entre realistas e idealistas nostálgicos seguirá abierto sin ofrecer conclusiones definitivas. El sectarismo, el monolitismo y la controversia seguirán haciendo estragos en las filas de la izquierda política. *Herr* Habermas seguirá preguntándose cómo es posible un mundo sin utopías. Y, sin embargo, de las ruinas de ese mundo sin utopía nacerán nuevos fantasmas.



"No está claro que la integración de la clase obrera sea un fenómeno irreversible"

Entrevista con Robert Castel

[Robert Castel es profesor de la Escuela Práctica de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. En el Estado español, su obra ha tenido hasta el momento una difusión limitada a los círculos especializados. Hay que lamentarlo porque Castel es un pensador fuerte, original y radical, uno de los más interesantes estudiosos de la crisis del trabajo. Un tema al que ya hemos prestado atención en nuestras páginas (incluso está presente en el debate entre Lipietz y Durand que publicamos en este mismo número) y pensamos persistir en ello porque nos parece una cuestión capital de la actual crisis cultural de la izquierda]

Francis Bailleau: Desearíamos conocer su punto de vista sobre las nociones de inserción y de integración y que situara las nuevas prácticas de inserción en una perspectiva histórica.

Robert Castel: Integración-inserción forman dos conjuntos diferenciados y al mismo tiempo, desde una perspectiva histórica, ambas nociones se suceden en el tiempo. Además, como ya se ha dicho en varios textos, a partir del momento en que se empieza a hablar insistentemente de inserción, no estamos ya en una política de integración. De hecho el término "inserción" sólo se emplea desde hace poco en los textos administrativos y legales; el informe de Bertrand Schwartz sobre los jóvenes con dificultades es probablemente el primero que lo utiliza de forma sistemática y reflexiva.

En relación con una perspectiva del tipo de Durkheim, que presupone una fuerte estructuración social, lo que marca el paso de la integración a la inserción, según me parece, es que esta integración deja de estar asegurada, e incluso quizá esperada, principalmente en función de una problemática del trabajo. Es entonces cuando se busca un tipo de inscripción en la sociedad más aleatorio y más frágil, al que se da el nombre de inserción.

Cuando Durkheim empieza a pensar sobre la integración, lo hace en un libro que se titula *La división del trabajo social*, en el que se refiere a las corporaciones, lo que no deja de ser curioso e incluso arcaico desde nuestro punto de vista actual. Pero puede interpretarse como un intento de pensar en el trabajo desde una perspectiva de integración, es decir, como un factor de estabilización de la clase obrera con una política de pleno empleo y una condición salarial sólida. En la sociedad moderna, capitalista/industrial, que se impone cada vez más en el momento en el que escribía, Durkheim se da cuenta de que la cuestión de la integración pasa por la cuestión del trabajo, de la solidificación de la condición salarial.

F. B.: Sobre este tema parece que, en la actualidad, la referencia al trabajo no ha desaparecido sino que más bien lo que se cuestiona es una determinada organización del mismo.

R.C.: Anteriormente yo he hablado de "condición salarial", es decir una situación de empleo a la que van ligados derechos y garantías. Ello nos remite a una organización del trabajo caracterizada por el predominio de los contratos por tiempo indefinido, lo que da una cierta seguridad ante el futuro, y, sobre todo la existencia de derechos sociales ligados al trabajo. La seguridad se va desarrollando sobre la base de la participación en esta condición salarial que conlleva (no de forma automática, sino a través de diversos conflictos) garantías y derechos y fundamenta la protección social. La hipótesis que yo hago, es que la crisis actual es también una crisis de la protección social, ya que la concepción dominante sobre protección social, en lo relativo a la integración, estaba basada sobre el trabajo y, ahora justamente, esta relación entre fuerza de trabajo-protección está puesta en cuestión.

F.B.: Relacionado con estos conceptos de inserción e integración y especialmente en relación a su referencia a Durkheim ¿no podríamos plantearnos que la definición de la crisis está ligada también a una evolución en la aprehensión que se tiene del mundo, que, por otra parte, se hace más compleja?

R.C.: Yo creo que Durkheim había percibido ya esta complejidad; el tema de la solidaridad orgánica expresa la cada vez mayor complejidad de la sociedad moderna y, por tanto, su vulnerabilidad, con el consiguiente riesgo de estallido de la ordenación laboral. Sin duda es por ello que se refiere, teniendo en cuenta el contexto de la época, a las corporaciones, para poder hacer coexistir la pluralidad con la unidad orgánica, la movilidad con la estabilidad, así como con la seguridad; todo ello es desde luego una problemática bastante moderna. Podríamos decir que desde la época de Durkheim la sociedad se ha ido haciendo cada vez más compleja, esto es evidente, pero lo que me parece más importante es que las regulaciones, de cuya fragilidad comenzó a darse cuenta, se han ido haciendo más débiles. La relación que Durkheim trataba de establecer, y que veía ya problemática, entre la complejidad debida a las diferencias entre las distintas tareas y la necesidad de asegurar la "unidad orgánica" de la sociedad, muestra que para él, la integración no era solamente una consigna o un slogan. Al preguntarse sobre las condiciones que la hacían posible, pensaba que una de las principales era la de una organización estable y, al mismo tiempo, diversificada del trabajo.

F.B.: Respecto a este tema de la complejidad y tomando a Durkheim como un símbolo de los autores de finales del siglo XIX, me parece que al término de la década de los sesenta se llega al agotamiento del modelo que ellos habían descrito o al menos que habían deseado. Los escritos de estos autores quedan en la actualidad como una buena descripción de la sociedad hasta los años 70-75. Desde esa época, yo creo que el problema no está situado en términos de complejidad sino que sobre todo, debe plantearse en términos de ausencia de modelo, de ausencia de referencias que permitan integrar las transformaciones socioeconómicas actuales...Se trata más de la explosión de las referencias que anteriormente se organizaban alrededor de la integración, del trabajo asalariado, y de una concepción lineal del tiempo que daba un sentido y permitía organizar una visión de la vida social, que de una mayor complejidad. Nosotros en los años setenta

utilizábamos un paradigma que teníamos perfectamente integrado y que nos permitía clasificar las cosas; éste está actualmente en proceso de cambio...La complejidad está ahí, nosotros cambiamos de paradigma. Lo que veníamos utilizando hasta estos años estaba muy próximo a las concepciones de Durkheim.

Christian Leómate: En Francia, se da un modelo muy en consonancia, con el catolicismo, con el radicalismo y se dan un cierto número de valores que resurgen...en cierto modo todo esto parece estallar. Y, al mismo tiempo, la visión que se tiene del mundo en tanto que investigadores tiende a hacerse más compleja, al menos es diferente. Hace quince años, yo no me planteaba el problema del tiempo, tal como lo hago actualmente. En Francia, Bourdieu, Morin, Prigogine y Stengers, Serre —por citar sólo a algunos— desde puntos de vista diferentes, han hecho evolucionar los paradigmas con los que percibimos el tiempo, la causalidad, el mundo. Nuestra visión se hace más compleja a todos los niveles, sobre todo en la medida en que trabajamos sobre prácticas como el tiempo, que son a la vez sociales e individuales.

R. C.: De todos modos, yo me había referido a Durkheim tan sólo para ilustrar lo que me parece que constituye el núcleo de una concepción precisa de la integración, que establece una estrecha relación entre la estabilidad del estatus social de un individuo y el lugar que ocupa en la organización del trabajo. Hasta los años sesenta esta estabilidad parecía afirmarse; la precariedad del trabajo —que, históricamente, ha sido un dato permanente de la organización del trabajo— retrocedía, y junto con ella retrocedía también la inseguridad de la condición de trabajador.

"No estoy seguro de que la condición salarial como factor constitutivo del estatus social esté superada"

Podríamos decir, de un modo un tanto burdo, que a partir del momento en el que la inscripción en la sociedad no está principalmente asegurada por medio de esta integración en el trabajo, el problema de la inserción comienza a imponerse por sí mismo. No se trata de hacer una apología del trabajo como un valor absoluto. Pero alrededor de la estabilidad del trabajo se organizaba toda una serie de soportes de tipo relacional, de seguridades, se establecía una organización de la existencia alrededor de ciclos de actividad... Si esta estabilidad del trabajo se desmorona, se crea una especie de vacío que crece y la cuestión de la inserción, desde hace una decena de años, se plantea en esta especie de fluctuación con respecto a un orden de la integración que pasa por el trabajo.

F.B.: Actualmente, podemos concebir que se puede estar insertado, por ejemplo en el terreno del trabajo, de la vivienda, pero no en el de la salud o en el de la familia, etc. Es decir que la noción de inserción se define en relación a campos de actividad social de una manera diversificada, mientras que, en los años precedentes no existían más que las posiciones sociales extremas de integración o exclusión. La integración era una totalidad: con el trabajo venía el alojamiento, la familia...

R.C.: La integración era una especie de cruce de variables, por una parte, las del eje del trabajo con una escala entre trabajo fijo y no trabajo, con formas intermedias de trabajo precario, y por otra parte las del eje familiar -relacional, con inserciones más o menos sólidas, en función del medio, de la cultura, de la familia, etc. La integración es tener una posición sólida sobre estos dos ejes, una relación estable en el trabajo y soportes relacionales estrechos. Por ejemplo, evocábamos antes las corporaciones o los oficios en el Antiguo Régimen. Pertenecer a una corporación, era a la vez, tener un trabajo permanente y significaba además participar en todo un tejido relacional y de protección, pertenecer a una hermandad que socorría en caso de necesidad. Este es un caso límite, pero de forma más general cabe preguntarse si en la hipótesis de que algo falle en el eje del trabajo ¿qué pasará en el otro eje? Será necesario establecer sistemas de compensación, trabajar los lazos sociales que no se basan ya en la relación con el trabajo o con el empleo. Esto corresponde al conjunto de tentativas en torno a la inserción social que se han llevado a cabo cuando, incluso sin renunciar claramente a la inserción profesional, se trata por todos los medios de reconstruir o de preservar la relación social, aunque dentro de esa especie de vacío, o en todo caso de fragilidad, que suscita la falta de relación estable con el trabajo.

La relativa integración de la clase obrera hasta los años sesenta tuvo lugar no sólo por la estabilización de la condición salarial, como decíamos, sino también por una política de educación, de vivienda, de familia, de salud, etc. Incluso algunos hablaban entonces del "aburguesamiento de la clase obrera". Pero ya se lea en positivo o en negativo, se trataba en cualquier caso de la promoción de una condición global que asociaba una relativa estabilidad de las condiciones de trabajo y de las condiciones de vida. No era necesario hablar de actividades de inserción, o de prácticas de inserción como objetivos separados; en suma, la inserción venía dada por añadidura.

C. L.: ¿Acaso eso no corresponde a una visión de la sociedad en la que la clase obrera ha sido integrada? Por lo tanto, ya no sería necesario tener una política fragmentada... Pero ya no es necesario integrar una clase obrera, sino que se trata de hacer soportar la vida a la otra parte de la sociedad dual. Hay una sociedad fracturada en dos por la crisis, por el paro y, consecuentemente, mediante retoques por aquí y por allá, en lo social, en lo profesional, etc., se trata de que esta segunda parte de la sociedad soporte la vida y no haga la revolución... Voy muy deprisa quizá...

R.C.: Sí, pero con un matiz: no está claro que la integración de la clase obrera sea un fenómeno irreversible. Si es cierto que esta integración supone una relación estable con el empleo, lo que hoy se observa, no sólo son las dificultades de muchos jóvenes para integrarse a este núcleo estable. Entre la gente de más de 50-55 años, que había trabajado siempre, encontramos ahora una proporción creciente de individuos que no tienen seguridad de trabajar hasta la edad de la jubilación. Hay nuevas categorías de precarios, de las que se habla menos que de los jóvenes en búsqueda de empleo o condenados a los pequeños trabajos, pero que plantean también problemas graves.

Pierden el estatus de trabajadores en toda regla. Por lo tanto, la precariedad es

también la desestabilización de los que han sido estables.

F. B.: ¿Se pueden hacer funcionar al mismo tiempo las nociones de inserción y de integración? ¿No son estos dos términos los símbolos correspondientes a dos épocas diferentes?

R. C.: Una hipótesis sería decir que la inserción funciona para los que podrían ser excluidos, de manera que no aparezcan como excluidos. La inserción trabajaría así sobre los "residuos" o sobre los "desechos" de la integración. La renta mínima de inserción (RMI) puede comprenderse, al menos en parte, dentro de esa lógica: no renunciar a hacer algo con la gente que ya no está en la esfera de la integración por el trabajo, lo cual es una intención absolutamente respetable. Pero ello confirma que esas prácticas específicas llamadas de inserción van dirigidas principalmente a los que tienen necesidad en el terreno del trabajo y que han basculado de hecho hacia una condición precaria, o peor, completamente marginal; son los que llamo los desafiados, es decir, los que tienen cortada la relación con el trabajo y, al mismo tiempo, los soportes familiares y relacionales habituales.

"El valor trabajo es sin duda relativo, tanto históricamente como en función de la jerarquía social, pero para el pueblo ha sido siempre impuesto de una forma absoluta"

F. B.: ¿No le parece que se fragiliza la norma de la integración a partir del momento en que se reconoce por ley la posibilidad de no estar integrado sin ser por ello un excluido, al menos sin tener obligatoriamente todos los estigmas del excluido? Si las normas sobre la RMI se reconoce esta diferencia, ¿acaso no se está oficializando esta situación, destruyendo al mismo tiempo la norma central?

R. C.: En cierta medida sí. Sin embargo, en cuanto a la pregunta que me hace, la RMI es ambigua. Por ejemplo en la afirmación, efectivamente muy importante, de que "la inserción social o profesional del individuo en dificultad es un imperativo nacional". Pero inserción social y profesional quedan así en un mismo plano, como si fuesen equivalentes. Pero no lo son. La inserción profesional sería la posibilidad de integración, mientras que la inserción social es "sólo inserción": un tratamiento que puede ser útil e incluso indispensable, pero sin regresar a esa especie de estatus pleno del individuo como trabajador, que seguramente sigue siendo hoy una referencia dominante. Incluso en su forma eufemística en la RMI, esta referencia perdura. Seguramente todos están de acuerdo en decir que la inserción profesional es preferible, superior, y que lo ideal de la inserción social es que conduzca a una inserción profesional (lo malo es que, aparentemente no lo suele conseguir).

F. B.: El valor trabajo sigue siendo importante; como desde hace siglos, constituye un valor organizador. Lo que hoy está en cuestión, en la nueva situación económica, son las condiciones en que se desenvuelve esta actividad, las condiciones de trabajo con respecto a la clase asalariada tradicional, es decir, a tiempo pleno y con contrato de duración indefinida.

R.C.: No estoy seguro de que la condición salarial como factor constitutivo del estatus social esté superada. Toda la historia de la protección social en particular, pasa por una lenta promoción de la condición salarial; a ella se ligaron en un principio las principales "coberturas" contra los riesgos sociales. Inversamente, hoy, la crisis de la protección social proviene sobre todo de la degradación de esta condición salarial. No veo inconveniente en que se pretenda "superar" la condición salarial, que, efectivamente, tiene aspectos alienantes, sobre todo bajo su forma fordista. Así es que tanto mejor si se desarrollan formas de trabajo y una atracción por el trabajo que no pasen por la condición salarial. Es quizá una novedad antropológica. Pero no por ello hay que olvidar que estas innovaciones difícilmente consiguen inscribirse en un proceso de estructuración profesional y garantizar una protección social real.

F. B.: Existe hoy un modelo de ejercicio de actividad profesional: el trabajo asalariado. Pero este modelo aunque no es el único, se ha convertido en hegemónico. Este ascenso del trabajo asalariado es reciente; no se estabilizó hasta los años setenta. Y la RMI contradice este modelo al ofrecer una protección social sin relación con una actividad salarial. ¿Es posible pues imaginar otras formas de actividades, de trabajo, que no vayan ligadas a esta forma tradicional?

R.C.: Sobre este punto estaríamos de acuerdo si usted añadiese una palabra a lo dicho: formas de trabajo que no sean el trabajo asalariado, pero que no por ello estén menos reconocidas y menos garantizadas que aquel. Ahora bien, actualmente, me temo que las formas que se inventan, o más bien que se reactivan, son las del trabajo precario, el trabajo sumergido, los pequeños trabajos... es decir formas desvalorizadas de trabajo. Si el trabajo asalariado se sustituye, se sustituye en general por estatus inferiores, esto es, según me parece, más una regresión histórica que un progreso. Si la RMI es indudablemente algo bueno a falta de algo mejor, hay que reconocer sin embargo que estar percibiendo la RMI no es motivo de orgullo, y que los mismos perceptores de la RMI lo viven así.

F.B.: ¿No le parece que vivimos hoy un desfase entre las representaciones, que están estructuradas por esta imagen del asalariado al que se liga la protección social, y, que a causa de esta representación de la estabilidad, de la normalidad, la precariedad en el trabajo no puede ser concebida o vivida más que de una forma negativa? ¿No podemos imaginarnos de un modo socialmente positivo, las actividades que no sean asalariadas?

R.C.: Efectivamente tenemos todo el derecho de imaginarnos unas formas de actividades sociales más positivas. Pero hay una diferencia entre imaginar y constatar. De momento, esa utopía totalmente respetable tiene muy pocos indicios que la avalen en la realidad.

¿Qué prácticas se dan hoy en día que tengan realmente un reconocimiento, una verdadera dignidad social, al margen de las asalariadas? Sin duda existen; se hacen innovaciones sociales en el mundo del trabajo, pero éstas exigen un capital social, cultural, cuando no económico, del que raramente pueden disponerlas poblaciones de las que estamos hablando. Incluso si se remunera el no trabajo —cosa no desdeñable— por ejemplo en el caso de la RMI, yo no creo que tenga el peso

suficiente para rehabilitar realmente las actividades no productivas, como las actividades de pura reinserción. Esto constituye sin duda un obstáculo en una ideología estrictamente productivista, es una avanzadilla, pero no deja de ser muy tímida y muy limitada. En todo caso, es difícil llegar a pensar que éste sea un modelo que pueda abrirse a la sociedad en su conjunto. Por mucho que se añore, es difícil pensar que los perceptores de la RMI puedan aparecer como modelos para zarandear el productivismo dominante. En nuestra sociedad —ver también lo que ocurre en la Europa del Este— los modelos dominantes son los productivistas, eficaces y de resultados tangibles.

F.B.: ¿No cree usted posible que hoy en día pueda vivirse “socialmente”, sin contar con los tres elementos básicos de familia, alojamiento y trabajo?

R. C.: Yo diría que, aunque lo eche en falta, no constato la emergencia de nuevas formas de prácticas sociales que sean reconocidas y que no pasen por esa especie de trípode, salvo en el caso de que nos traslademos a otra esfera social. Por ejemplo, un artista o un banquero no tienen necesariamente necesidad de tener totalmente colmados estos valores básicos. Ellos pueden hacer equilibrios sin estrellarse. Pero yo creo que de lo que nosotros hablamos aquí, es de lo que se ha llamado la cuestión del pueblo o la cuestión social. Que en la Edad Media o más tarde haya habido monjes que eran respetados e incluso santificados en nombre de la ociosidad, para el servicio de Dios, no impide considerar que la ley del trabajo ha pesado siempre de forma despiadada sobre el pueblo. Al mismo tiempo que se canonizaba a los monjes y se les prohibía el trabajo a las personas que ocupaban la cúpula de la sociedad (por ejemplo, para los nobles era indigno trabajar) se colgaba a vagabundos, cuyo único crimen era no trabajar. El valor trabajo es sin duda relativo, tanto históricamente como en función de la jerarquía social, pero para el pueblo ha sido siempre impuesto de una forma absoluta.

F. B.: Al tratar este tipo de problemas solemos situarnos a partir de los años setenta-ochenta; sus investigaciones actuales sobre la afiliación, desafiliación ¿pueden ser resituadas también en una perspectiva histórica?

R.C.: Yo creo que he comenzado ya con esa perspectiva, histórica al hacer el encuadre de la diferencia entre integración e inserción. Por definición, la temática de la inserción no puede dejar de ser considerada como un hecho moderno.

A partir de un dispositivo como la RMI y lo que él comporta como referencia a la inserción, podemos intentar mostrar lo que tiene de nuevo y aquello que es heredado. Leamos el primer artículo de la ley que establece la RMI: “Toda persona que, en razón de su edad, de su estado físico o mental, de la situación de la economía o del empleo, se encuentre en incapacidad de trabajar, tiene derecho a obtener de la colectividad los medios convenientes para su existencia. La inserción social o profesional de las personas en dificultad es un imperativo nacional”. Efectivamente si se interpreta este texto desde una perspectiva histórica, la RMI es innovadora.

Históricamente, el conjunto de medidas que podemos llamar de protección social, de asistencia, de ayuda social, etc., se dividen según la diferencia que se establecía entre gente capaz de trabajar y gente incapaz de trabajar. En esquema,

corresponden a la asistencia los que son incapaces de trabajar y, a partir del Siglo XX, corresponden a la Seguridad Social los que trabajan. Esta oposición entre dos tratamientos según se pueda o no trabajar, está presente en toda la legislación social desde la Edad Media. La RMI es la primera medida social que sobrepasa esta división, uniendo con una simple conjunción de coordinación estas dos situaciones opuestas.

Por primera vez, pues, y esto es importante, se colocan en un mismo estatus de derecho los inhábiles y los hábiles para el trabajo. Esto quiere decir que no se puede seguir organizando la protección social en torno a la complementariedad del seguro para los que trabajan y de la asistencia para los que no pueden trabajar. Hay que inventar un dispositivo transversal que dé derecho a la subsistencia a todos. Estas disposiciones las encontramos en los otros dispositivos de inserción; intervienen a partir del momento en que se constata que una especie de brecha se produce en lo que antes se preveía para asegurar la protección social, el seguro para los trabajadores y la asistencia para los otros. ¿Qué hacer con la gente que puede trabajar y que por lo tanto no es de la competencia de la antigua asistencia rebautizada "ayuda social", pero que tampoco lo son de la del seguro, ya que no trabajan? Se hará con ellos inserción, se reconocerá la inserción como un derecho, y se la acompañará de una remuneración. Se trata pues de algo nuevo, como vemos.

Pero, como decíamos antes, la ambigüedad reaparece inmediatamente si creemos, o si hacemos como si creyéramos, que la inserción social y la inserción profesional están en el mismo plano. Se necesitarían esfuerzos enormes para que la inserción social fuese promocionada a la dignidad de una inserción profesional, verdaderamente integradora, y esto no parece ser el caso. Desde luego, habría que responder a nivel de las prácticas, estudiando lo que se entiende concretamente por el término inserción. Pero parece que sigue habiendo una disparidad real, a través de los contratos de inserción en curso, entre lo que se refiere a la posibilidad de una inserción profesional, es decir que constituye un paso hacia la integración, y lo que podría terminar en una especie de "ocupacionismo" que sirve para ir pasando el tiempo sin llegar nunca a soluciones duraderas. Esto no es una crítica a la inserción social, ya que ésta se esfuerza precisamente —y me parece positivo— en no resignarse a asistir sin más a estas personas bajo pretexto que no pueden trabajar. Se siguen ocupando de ellas activamente, por lo menos en principio, y estableciendo con estas personas contratos, impidiendo que se rompa del todo el lazo de pertenencia social. Pero es también el reconocimiento del hecho que no disponen aún de todas las prerrogativas de una ciudadanía social total. Se trata de reconstruir el lazo social con ellas porque se constata que este lazo social se ha perdido o se ha roto, o, en cualquier caso, se encuentra muy fragilizado, y que hace falta un suplemento para restaurarlo. Es precisamente este suplemento, el que la voluntad de inserción quiere dar y en ello se diferencia de la pura asistencia.

F. B.: Finalmente, ¿estaría de acuerdo en decir que la noción de inserción no reemplaza a la de integración, sino que es una noción coyuntural con respecto a la de integración que queda siempre como objetivo, como ideal?

R.C.: Sí, podrían decirse las cosas así: la inserción "ideal" sería la que constituyera una etapa hacia la integración.

F. B.: Es una etapa en relación a una época conflictiva, pero contrariamente a la opinión de otros autores, la integración no es reemplazada por la inserción.

R. C.: No, porque subsiste ese carácter menor de la inserción con relación a la integración. Y, a riesgo de pasar por pesimista, expresaré mi temor de que esta inflación actual de las prácticas de inserción no sea un dato coyuntural. Estas situaciones pueden no sólo prolongarse, sino también extenderse. Nada nos asegura que las diferentes fórmulas de "tratamiento social", como los procedimientos de contratos en formación por ejemplo, no sean un modo permanente de asumir a estas poblaciones inintegrables por el trabajo, y que representarán conjuntos numéricos cada vez más importantes. Entonces, la diferencia integración-inserción no habría que entenderla sólo en términos de transición temporal, sino en términos de subordinación permanente. Quiero decir que las acciones de inserción podrían continuar desarrollándose sin poner en cuestión la jerarquía social que hace que sea Bernard Tapie quien pase por representante de los valores de la modernidad "en el horizonte 93" de la Europa que se avecina. El modelo de nuestras sociedades, incluso para el futuro previsible, sigue siendo, y más que nunca, me temo, un modelo de competitividad y de eficiencia. En cualquier caso no es el modelo del perceptor de la RMI, incluso en vías de inserción.

F. B.: Porque para usted la inserción es una noción menos fuerte que la integración, es una noción menos

R. C.: Yo diría más frágil, capaz tan sólo de procurar estatus inestables y susceptibles de caer en esa zona inconfortable de la existencia social que está poblada por los llamados "más necesitados". ¿Los más necesitado de qué? No sólo de recursos económicos sino también con frecuencia, de trabajo, de consideración, de soportes sociales. Las prácticas de inserción representan un esfuerzo para ayudar a las personas a salir de esta condición, y, por una vez, no es cuestión de criticarlas. Al contrario, es necesario desarrollarlas, reforzarlas. Sin embargo el éxito de la inserción, se produce cuando ya no es necesario hacer inserción como una actividad especial. Para un individuo verdaderamente insertado, no se habla ya de inserción.

ANNALES DE VAUCRESSON, nº 32-33/ París

Traducción: Dolores Vivero



5 subrayados

Desvelando trampas

Mercado, ética y economía

Félix Ovejero

Icaria, Barcelona, octubre 1994

La quimera fértil

Félix Ovejero

Icaria, Barcelona, noviembre 1994

Estos dos libros han aparecido a finales de 1994, con menos de un mes de diferencia entre ambos. Ello no quiere decir que Félix Ovejero (profesor de Metodología de las Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona y autor de otros libros de teoría social entre los que cabe destacar *Intereses de todos, acciones de cada uno, crisis del socialismo, ecología y emancipación*, editado en 1989 por Siglo XXI) haya estado trabajando en ambos al mismo tiempo e inmediatamente antes de su reciente publicación. Algunos de los capítulos de *La quimera fértil* ya habían aparecido, en versiones previas, en diversas revistas durante un lapso de tiempo relativamente breve: de 1985 a 1988. *Mercado, ética y economía* es más "nuevo". También tiene algunos capítulos publicados en versiones previas, pero la

mayoría de páginas son de escritura expresa para la ocasión. Se puede observar en las notas bibliográficas (notas que tratándose de Félix Ovejero son siempre muy abundantes, sin que el "muy" tenga aquí ninguna connotación valorativa) que en este último libro las fechas llegan a 1993, en el otro sólo lo hacen hasta 1988.

Lo que se dice y cómo se dice.

Mercado, ética y economía consta de una introducción (en la que se anticipan algunas conclusiones), cinco capítulos y un largo epílogo de más de 60 páginas. Si se toma la moral como argumento, existen al menos dos modos de apostar por determinado modelo social. Uno, al que el autor califica de "débil y condicional", mide según determinados valores. Otro, "fuerte e incondicional", apela a la necesidad. Un modo de vivir si es el único posible, es necesario, y por tanto, no susceptible de crítica. Esta es la forma amoral de defender el mercado. Pues bien, *Mercado, ética y economía* trata precisamente de ir deslindando muy pormenorizadamente cada una de estas afirmaciones. Explicarlas, mostrar inconsistencias y criticarlas desde diversos ángulos. Pero también se nos muestra las debilidades de algunos críticos del mercado quizás demasiado impacientes en

mostrar, a su vez, las debilidades del enemigo. Estas impacencias, es una manera imprecisa de decir, acarrear críticas muy débiles que atacan más al atacante que al atacado.

A menudo se confunden dos planos distintos, que se llamarán aquí, para abreviar, el "ideal" y la "fundamentación". Puede haber un y (defensor del mercado neoclásico, por ejemplo) cuyos "ideales" (crear las condiciones sociales para que su mercado pueda funcionar sin ninguna traba) sean una auténtica barbaridad para x (un partidario de una distribución igualitarista que cree que el mercado neoclásico no sirve para ello, por ejemplo); pero cuyas fundamentaciones sean mucho más potentes que las de su crítico. En otras palabras: una cosa es el "ideal", otra su "fundamentación". Lo que se dice no es cómo se dice. Lo primero puede ser loable y lo segundo deplorable. Y viceversa. Confundir ambos planos, como así ocurre en muchas circunstancias de la vida, es insensato. Félix Ovejero, en buena parte del libro, intenta mostrar que esta confusión (o mala inferencia, si se quiere) se comete frecuentemente en el tema que le ocupa. Dice en determinado momento: «no hay que convertir los "ideales" o la utopía en palabras mágicas que conjuran la reflexión y la calibración de proyectos». No todo aquello que nos «podemos imaginar conceptualmente es materialmente posible». Algunas buenas reflexiones ecológicas han ayudado a comprender de forma muy precisa que ser partidario de la abundancia y de la igualdad puede ser un bonito ideal, pero completamente inconsistente. Los ideales salen mal parados con unos apoyos tan endeble.

La quimera fértil es un libro más ambicioso y difícil. Y más largo: son casi medio millar de páginas distribuidas en una larga introducción, siete capítulos, dos apéndices, un epílogo y un addendum. Pero es de lectura muy aconsejable para aquellas personas que estando motivadas por la teoría social tengan además interés en saber más allá de las apariencias de

tales teorías. Porque, por utilizar una frase de libro, "lo que parece no es lo que hay".

Marx, el historicismo y el

naturalismo. La más característica de las quimeras es, en opinión de Félix Ovejero, la teoría de la historia de Marx. A ella está dedicada el capítulo tercero. Es un estudio de Marx y su relación con las dos herencias de las ciencias sociales. Si el naturalismo pretendía hacer una ciencia de leyes muy abstracta y formal, el historicismo ponía el acento en la originalidad metodológica de las ciencias sociales para lo que se precisaba de utillaje nuevo: «el sentido, la comprensión, la totalidad». Marx tiene algo de naturalista y algo de historicista, si bien «El Marx naturalista resulta más conocido y es el que hoy se prolonga en la academia cuando se lo reconoce como un clásico de la economía o de la sociología».

De forma más general, el libro trata de lo siguiente: las dos tradiciones metodológicas de las ciencias sociales (el historicismo con sus "problemas sin utillaje" y el naturalismo con sus "herramientas sin propósito"), los intentos de hibridación entre ambas tradiciones, los principales problemas que han enfrentado historicismo y naturalismo (las estructuras como limitación de las conductas de los humanos, las leyes de tales estructuras y la racionalidad), la explicación de acontecimientos particulares a partir de las distintas abstracciones que usa la historia, las teorías materialistas. Al final se mostrará «cómo la filosofía de la historia se queda a la modesta puerta de la teoría social».

Un capítulo particularmente exquisito, siempre a juicio del que opina (esto es pura redundancia), es el VII cuyo título es: «El sentido de cada uno: la intención y la racionalidad».

Ambos libros tienen mucho en común aunque la materia de estudio no sea exactamente la misma. Y si se tuviera que condensar en unas cuantas palabras el aire de familia compartido no sería otro que un empeño (obsesión casi) en delimitar la

buena argumentación en ciencia social de la mala, en desvelar aquellas trampas difíciles de percibirse por estar recubiertas de hojarasca retórica, en rescatar una buena idea aunque esté envuelta en una marrullera epistemología, en delimitar lo que es método y lo que es teoría, en defender microfundamentos en la teoría social. Porque, y es una reflexión particularmente fértil, «por un camino errado se puede llegar a pasar por un sitio interesante, pero se llega más tarde, cuesta identificar el enclave y, sobre todo, resultará imposible explicar a otros cómo llegar y seguir». O, dicho más formalmente: «La falta de consciencia metodológica impide la buena heurística». El autor presenta una combinación no frecuente: es de izquierda más o menos extrema y partidario de la forma de explicación conocida por individualismo metodológico («un enfoque metódico, no una teoría social, que recomienda abordar la explicación de los procesos sociales desde la interacción entre individuos, a partir de propiedades o relaciones referidas a individuos o unidades de decisión»). Es mucho más habitual una combinación de izquierdas y holismo que no la descrita. Con el individualismo metodológico se incurre a menudo en alguna equivocación. Hay quien supone, por ejemplo, que va ligado a determinada teoría o teorías. Félix Ovejero expresa claramente que no, que individualismo metodológico no está comprometido con ninguna teoría particular.

Dos libros muy recomendables en definitiva para aquella gente que tenga los intereses expresados más arriba: teoría social y fundamentos de la misma. Desgraciadamente hay bastantes errores tipográficos y de referencias bibliográficas en *La quimera fértil*. Se echa en falta, en ambos libros, un índice analítico. En obras como las comentadas, un índice tal es imprescindible y no se justifica su ausencia.

Daniel Raventós

La ciencia como problema

La ciencia y cómo se elabora

Alan Chalmers

Editorial Siglo XXI, 1992. Madrid
Madrid, 1994

¿Qué es esa cosa llamada ciencia? constituía un sólido alegato contra la pretenciosidad cientifista. Pocos olvidamos el impacto que nos produjo su lectura en los primeros cursos de la facultad de letras. Pero aquella obra, escrita en 1976, descarga su ímpetu polémico en un contexto intelectual, político y social que ha dejado de ser el nuestro. La preocupación que vertebra *La Ciencia y cómo se elabora* es dar una respuesta a las inquietantes tendencias irracionistas que la crisis de la filosofía ortodoxa de la ciencia ha desencadenado y, que la obra de Chalmers contribuyó a acentuar.

Paul K. Feyerabend y la sociología de la ciencia han dinamitado la excelencia cognitiva de la ciencia, bien juzgándola inconmensurable con la magia negra o el vudú, bien disolviéndola en los procesos económico-sociales que constituyen su contexto de surgimiento.

Rechazo del positivismo. La crisis de la estrategia positivista del Círculo de Viena a Lakatos, deriva de su empeño en establecer un dilema falso y autodestructivo: o existe un método científico universal y ahistórico exonerado de la corrosiva determinación espacio-temporal, o la gnosis y el "Diamat" no deben sentirse ruborizados ante la ciencia establecida.

Chalmers rechaza el dilema, y con él la estrategia positivista que lo formuló, y la corriente irracionista que de él extrae su fuerza. Las normas de racionalidad no sucumben con una alternativa tan extremada. Es posible apelar a normas y métodos históricamente contingentes, que

efectivamente contribuyen a vigorizar la finalidad de la ciencia: establecer leyes y teorías sumamente generales cuya relación con el mundo nos faculta las técnicas experimentales existentes. De aislar métodos y normas sin ínfulas platónicas, pero que contribuyan a esta empresa, pueden delimitarse criterios de racionalidad extraños al sarampión esotérico rehabilitado por el anarquismo epistemológico.

Esos métodos y normas son estrictamente específicos a un área de conocimiento. Chalmers, insiste en deslindarse de otra característica de la estrategia positivista: el método único. Pese a Popper, la débil fuerza normativa que se puede identificar en los métodos productivos en física, no puede convertirse en criterio de valor que juzgue el marxismo o el psicoanálisis.

Podría utilizarse el esqueleto de la estrategia defensiva de la racionalidad propuesto por Chalmers, también en teoría social. Habría que establecer la finalidad de ésta, y proceder a un estudio de los métodos que han contribuido a la misma. Resulta curioso el posible engarce de esta propuesta, con la conexión entre racionalidad y acción trazada por Habermas en su obra *Conocimiento e Interés*. Para Habermas, las ciencias sociales críticas, pretenden caracterizar las determinaciones que conforman nuestra inercia cotidiana, y estudiar su desactivación mediante la reflexión emancipatoria. Esta propuesta constituye, a mi entender, un patrón general, pero sugerente, para realizar un ajuste de cuentas con la tradición marxista, y con cualquier corriente que no quiera separar, apuesta subversiva y racionalidad. Algo que no abunda en tiempos que basculan entre el positivismo chato y el mesianismo irresponsable.

Positivismo o ciencia. Tal es para Chalmers el dilema. En un contexto en que la lógica formal se tambalea con el desarrollo de la mecánica cuántica parece

urgente enterrar las exigencias positivistas que nos dejarían sin algunas de las teorías científicas que más apreciamos.

Habermas resumía el interés de las ciencias empírico-analíticas en un control del mundo físico que garantice el éxito de nuestras intervenciones. Que efectivamente la ciencia nos ha proporcionado un triunfo siniestro en nuestra interacción con el entorno natural, está fuera de dudas. La estructura ontológica de la realidad natural ha validado con creces las generaciones producidas en situaciones experimentales artificiales. Incómodo para los que afirman que la verdad científica se disuelve en el ser social.

Chalmers defiende que hay procedimientos por los que se aumenta la objetividad en nuestro enfrentamiento con el mundo. Curioso en un autor que nos convenció de que la observación depende de la teoría.

Para el autor no hay motivo para extrañarse. La observación depende de la teoría, no equivale a que historia, cultura y psicología de los observadores determinen totalmente su actividad. Conscientes de las influencias subjetivas en la observación, la comunidad científica apuesta por realizarla de manera rutinaria y normalizada, obteniendo una progresiva inmunización respecto de las influencias subjetivas. La legitimidad de las teorías científicas no se destruye cuando sorprendemos algunas influencias sociales y políticas en su formulación y aceptación. Una teoría adquiere la acreditación de científica cuando dados los recursos teóricos y tecnológicos existentes se han producido resultados experimentales determinados por el comportamiento efectivo de la realidad que estudian. Hay que abandonar los argumentos empiristas que localizan la génesis del conocimiento en un enfrentamiento cara a cara con el mundo, aceptar de la sociología de la ciencia, que la práctica científica obtiene su condición necesaria de la satisfacción de las condiciones materiales, y que el desarrollo

de programas de investigación fértiles en una u otra área de conocimiento, obtiene su visado de los centros de poder de la sociedad capitalista.

Práctica científica y acción social.

Alan Chalmers sitúa conscientemente su obra en el debate que tras la debacle de todas las utopías de ingeniería integral ha embargado nuestro presente. En ese debate, la despedida del proyecto ilustrado, se acompaña, a veces, de un altisonante descarga verbal contra el supuesto totalitarismo subyacente a todo criterio delimitador de verdad y falsedad. Explícitamente inspirado en la noción althusseriana de práctica teórica, el autor nos ofrece una visión en que la práctica científica aparece dotada de una finalidad privativa, que, sin embargo, no puede dejar de modularse al margen de los espacios sociales de fuerza: denuncia así determinadas extorsiones de la ciencia que buscan expropiar al debate público determinados asuntos que conciernen a toda la sociedad.

La ciencia «constituye una poderosa ayuda para nuestras intervenciones tecnológicas, ingenieriles y medioambientales» pero «(...) una vez que introducimos cuestiones sobre la deseabilidad y seguridad de diversas intervenciones tecnológicas en el mundo, vamos más allá del dominio legítimo de la ciencia».

Este libro, de cuyo excelente último capítulo están extraídas estas palabras, concluye con una declaración del autor sobre la que debería reflexionar cierta desmesura posmoderna: "No soy el único, en absoluto, en considerar las tendencias sociales del mundo contemporáneo con desmayo y alarma. El abismo entre ricos y pobres, y entre países desarrollados y subdesarrollados se ensancha, se destruye el medio ambiente, y se vislumbra la amenaza de aniquilación. Los problemas políticos y sociales a los que nos enfrentamos son urgentes y vitales. No creo que nos ayude a esa causa considerar

la ciencia como una conspiración masculina capitalista, que no se puede diferenciar de la magia negra o el vudú".

José Luis Moreno Pestaña

Un balance de cinco años de transición

Europa del Este: el laberinto del cambio

Observatorio Económico Permanente
Instituto de Europa Oriental, 1994
Madrid

Este es el segundo informe anual del Observatorio Económico Permanente del Instituto de Europa Oriental, de la Universidad Complutense de Madrid. Si en el anterior informe (*Europa del Este: ¿Transición o Cambio?*) se estudiaba la situación económica de Europa Central y Oriental en 1993, en el momento en que empezaban a apuntar las primeras señales de recuperación en Polonia, República Checa y Hungría, ahora se intenta hacer un balance de conjunto de lo que ha supuesto la transición de la gestión económica administrativa por la vieja nomenclatura a la economía capitalista de mercado en toda la zona y su integración al mercado mundial.

El informe comienza con una visión de conjunto, donde se recogen las principales polémicas sobre la transición en el Este, de Fernando Luengo. Resulta difícil en nueve páginas exponer de manera más concisa un panorama tan complejo, sirviendo después de guía para poder comparar las distintas evoluciones nacionales, que pueden encuadrarse ya en tres subzonas: la Europa de Visegrad (Polonia, Hungría, República Checa); la Europa "sombria", con un abanico más amplio, en la que las reformas tropiezan con grandes dificultades

(Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Albania); y las economías de los nuevos Estados independientes surgidos de la descomposición de la URSS.

El caso de las antiguas repúblicas yugoslavas merece un capítulo aparte, que escribe Pedro J. Gomez Serrano, marcado por el conflicto bélico.

Sólo en la primera subzona se puede hablar con propiedad de la aplicación de la "terapia de choque" recomendada por el FMI y el Banco Mundial. Y de ahí el interés teórico de evaluar el modelo, tanto en lo que se refiere a la secuencia de las reformas, como a la política de privatizaciones, la construcción de una red de asistencia social, la política industrial y, sobre todo, la caída de la producción que, a pesar de la recuperación operada en 1994, sitúa el PNB de estos países por debajo del que disfrutaban en 1989.

En el caso de la Europa "sombria", la discusión parece centrarse en los obstáculos sociales, es decir la oposición de sectores significativos de la antigua nomenklatura y de la clase obrera, a la aplicación sistemática de las reformas, empezando por el ajuste macroeconómico. El caso de Rusia y Ucrania, estudiados por Enrique Palazuelos, Carlos Garcimartín y María Jesús Vara, es un mundo aparte, por sus dimensiones y su complejidad histórica, que es difícilmente asimilable a Europa Central.

Esta es, quizás, la primera conclusión práctica del balance: acabar con la idea de una transición, regida por una lógica "natural", que bastaba con aplicar frente a ciertos obstáculos sociales del antiguo régimen comunista, para reinsertar a estos países a la economía mundial y hablar de transiciones, con unas especificidades marcadas por muchas décadas de *socialismo real* que han generado unos sujetos sociales específicos, que se mueven por sus intereses concretos y no por supuestas actitudes racionales de actores de modelo. No existe, por lo tanto, peligro alguno de restauración

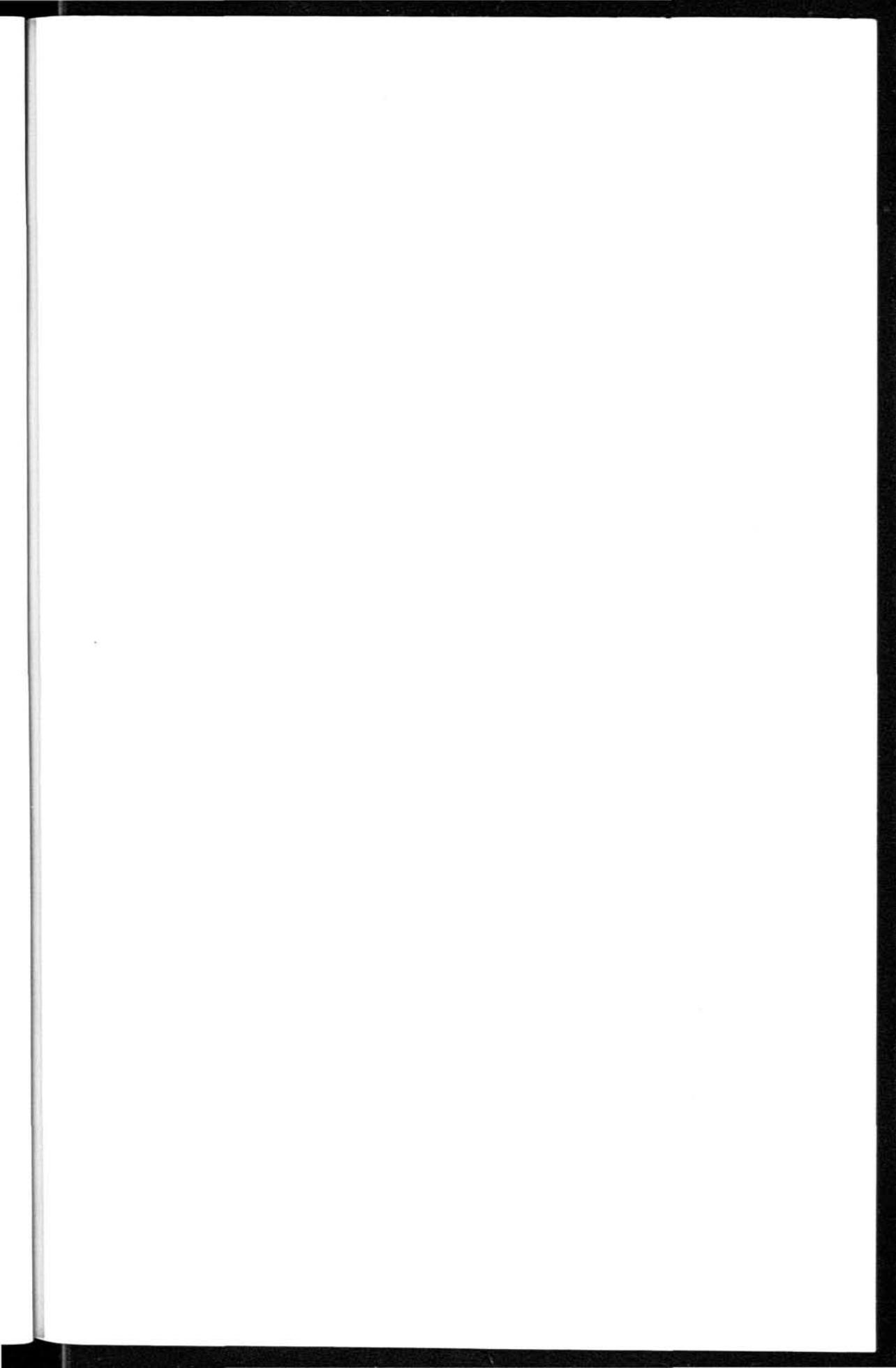
y sí, sin embargo, muchos otros conocidos, ligados al desarrollo del capitalismo en economías periféricas.

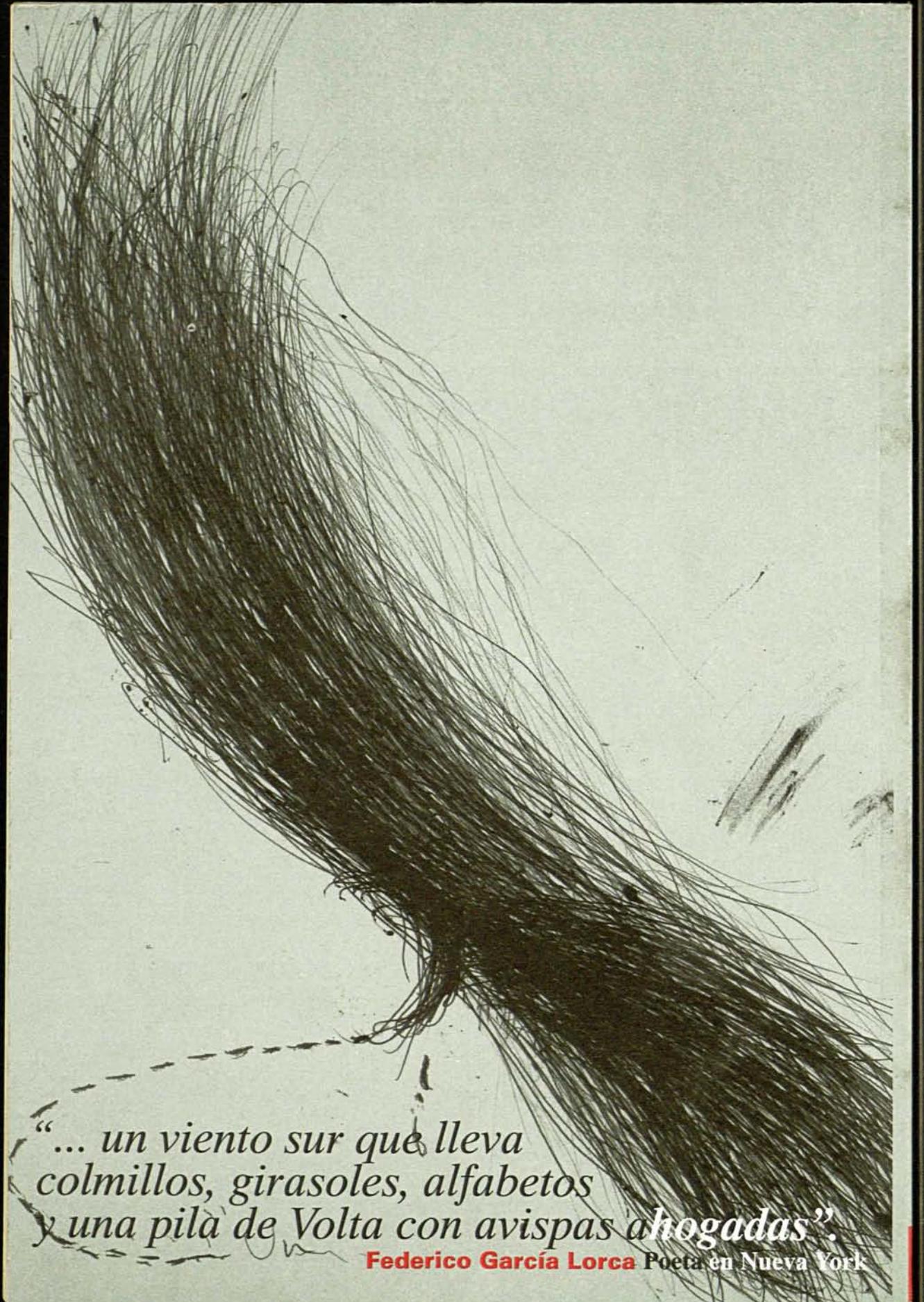
Basta mirar la bibliografía utilizada por los autores para comprender que nos encontramos ante una obra que, a pesar de la modestia de su presentación, tiene un nivel perfectamente comparable a la literatura que se produce en inglés o francés y, probablemente, con bastantes aciertos de orientación.

G. Buster



NO ME DARÁS DE VUELTA DONDE ESTABA ANTES.





*“... un viento sur que lleva
colmillos, girasoles, alfabetos
y una pila de Volta con avispas ahogadas”.*

Federico García Lorca Poeta en Nueva York